

A conceptual image of a small forested island on a single tree trunk. The island is on fire, with flames and smoke rising. Several animals, including a jaguar, a toucan, and a parrot, are shown fleeing from the island. The background is a cloudy sky with birds flying. The title 'CONTRA FUEGOS' is overlaid on the image in large, bold, black letters. The letters 'CON' and 'FUE' are solid black, while 'TRA' and 'GOS' are outlined. The letters are filled with a fiery, orange and yellow pattern.

CONTRA FUEGOS

EFFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE LOS INCENDIOS DE 2024 EN BOLIVIA

Esta investigación ha sido posible gracias al trabajo comprometido del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer – Cecasem, en alianza con comunidades del Bajo y Alto Paraguará, líderes locales y profesionales comprometidos con la justicia ambiental y social.

CONTRA FUEGOS

Título:

Contra Fuegos: Efectos Sociales, Económicos y Políticos de los Incendios de 2024 en Bolivia

Primera edición:

Octubre 2025

Lugar de publicación:

La Paz – Bolivia

Editor:

Cecasem – Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer

Directora:

Patricia Bustamante de Romero

Dirección:

Calle Guerrilleros Lanza Nro. 1536

Teléfono:

(+591) 2226672

Correo electrónico:

comunicacion@mailcecasem.com

Sitio web:

www.cecasem.com

Investigación y coordinación general:

Brian Cristopher Dalenz Cortez

Redacción y edición:

Brian Cristopher Dalenz Cortez

Diseño y diagramación:

Jorge Alejandro Aguilera Salas

Corrección de estilo:

Priscila Siles Becerra y Monserrath Nicole Murillo Ezcurra



Índice

Presentación	05
---------------------	----

Introducción	09
---------------------	----

Capítulo 1 – La ruta del fuego	19
---------------------------------------	----

- El patrón histórico de los incendios en Bolivia
- La Chiquitanía como epicentro recurrente
- 2024, cronología y magnitud
- San Ignacio de Velasco en el epicentro de la crisis
- San Ignacio de Velasco antes del fuego
- La llegada del fuego, primeras señales y reacciones
- Secuelas inmediatas del desastre

Capítulo 2 – Testimonios del fuego	37
---	----

- El eco del fuego en las voces del territorio
- Recuerdos del humo y el momento del incendio

Capítulo 3 – Huellas vivas: impacto social, económico y político	47
---	----

- Situación económica, política y social post quema
- Alto y Bajo Paraguará, dos realidades, una misma herida

Capítulo 4 – Propuestas y acciones de cambio	55
---	----

- Propuestas y acciones de cambio
- Del dolor al propósito
- Propuestas sociales, el fortalecimiento del tejido comunitario
- Propuestas económicas, la reactivación de la vida y el sustento
- Propuestas políticas e institucionales, del abandono a la presencia efectiva
- Plan de acción integral hacia comunidades resilientes





Capítulo Extra

67

- El santuario en el límite del mundo
- Un pulmón para Bolivia y el mundo
- Amenazas y vulnerabilidades actuales

Capítulo 5 – Marco normativo y vacíos

79

- Cuando las llamas exponen las grietas de la ley
- Marco legal vigente, normas que existen, pero no siempre protegen
- Ley 1333 de Medio Ambiente
- Normas sobre áreas protegidas, el caso del Noel Kempff
- Vacíos legales y aplicación deficiente
- Compromisos internacionales de Bolivia
- Comparación regional, Brasil y Perú

Capítulo 6 – Las otras quemadas de 2024 un país en llamas

90

- El fuego que ardió más allá de la Chiquitanía
- Las quemadas en La Paz, los Yungas y el norte
- Las quemadas en Beni, los llanos y reservas bajo amenaza
- Impacto en comunidades y ecosistemas
- Las quemadas en Pando, el fuego silencioso en la frontera amazónica

Conclusiones

99

- El fuego como síntoma y oportunidad

Nota Final

105

Agradecimientos

106



Presentación

La historia reciente de Bolivia está marcada por episodios que, a pesar de su magnitud, a menudo desaparecen del debate público una vez que las llamas se apagan, el humo se disipa y las cámaras se retiran. Los incendios forestales del año 2024 constituyen uno de esos episodios cuya dimensión no puede ser comprendida únicamente desde las cifras oficiales ni desde la fría mirada de los mapas satelitales. Más de doce millones de hectáreas ardieron en aquel año, arrasando no solo con bosques y especies animales, sino también con modos de vida, identidades culturales y proyectos de futuro de miles de familias que habitan las regiones más recónditas del oriente boliviano. Hablar del fuego en Bolivia implica ir más allá del relato de las hectáreas consumidas. Significa adentrarse en territorios donde las cifras no alcanzan para explicar lo que realmente ocurre, ni para reflejar el dolor ni la fuerza de las comunidades que, incluso en medio de las llamas, luchan por preservar sus vidas y sus culturas.

Esta investigación nace justamente de esa convicción: que lo verdaderamente relevante no está solo en los números, sino en los rostros, en las voces y en las historias de las personas que habitan los territorios golpeados por el fuego. Durante el 2024, buena parte de los análisis sobre los incendios se basaron en imágenes satelitales y datos técnicos de áreas quemadas, indispensables para dimensionar la crisis, pero profundamente insuficientes para describir la experiencia humana y social que subyace bajo esas imágenes. Las zonas del Alto y Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, ejemplifican de manera dolorosa ese vacío informativo y humano: territorios alejados, de difícil acceso, donde comunidades enteras permanecen invisibles para las instituciones y los medios de comunicación. Allí, el fuego no solo quemó árboles, sino que puso en riesgo vidas, contaminó el agua, llenó de humo los pulmones de niños y ancianos, y alteró economías familiares que ya vivían al filo de la subsistencia.

En ese contexto, la presente investigación no pretende ser un estudio más que repita datos conocidos ni una recopilación de información sin alma. Es el resultado de un esfuerzo exhaustivo de trabajo de campo que llevó a nuestros equipos a adentrarse en territorios prácticamente inaccesibles, atravesando caminos

intransitables, cruzando ríos infestados de peligros naturales y soportando largas jornadas de viaje bajo condiciones extremas. Esta investigación fue gestada desde la cercanía, desde el contacto directo con las comunidades, sus liderazgos, sus mujeres, sus niños y sus ancianos. Fue concebida para dar voz a quienes, en demasiadas ocasiones, son meros datos estadísticos, ignorados en informes institucionales. Porque detrás de cada hectárea calcinada hay historias humanas, hay silencios, miedos y esperanzas que deben ser contadas.

Nuestro punto de partida para esta investigación fueron precisamente las comunidades del Alto y Bajo Paraguá, enclavadas en la Chiquitanía, y tan diversas como distantes. Comunidades como 15 de Agosto, Sañonama, San Rafaelito de Suponema, San Antonio del Cerro, Picaflor, Porvenir, Piso Firme, Cachuela y Bella Vista, cada una con sus realidades particulares, sus miedos y su manera de enfrentar el desastre. En el Alto Paraguá, el fuego no alcanzó a devorar los caseríos, pero dejó tras de sí un aire cargado de cenizas que enfermó pulmones y contaminó aguas. En el Bajo Paraguá, la situación fue todavía más dramática: largas travesías de más de catorce horas para llegar a comunidades aisladas, sin servicios básicos, y donde la desconfianza hacia las instituciones era tan densa como el humo que cubría el horizonte. En estas regiones, los incendios no fueron un fenómeno distante ni pasajero, sino una amenaza latente que puso a prueba la resistencia y el espíritu colectivo de pueblos enteros.

Uno de los hallazgos más significativos que emerge de este trabajo es la evidencia de una profunda desigualdad territorial. Mientras algunas zonas más cercanas a las cabeceras municipales pudieron recibir, aunque sea mínimamente, atención de autoridades departamentales o nacionales, comunidades más alejadas quedaron completamente solas, enfrentando el fuego con sus propios medios. Hombres que dejaron sus trabajos para convertirse en bomberos improvisados, mujeres que se organizaron para acarrear agua, niños y ancianos soportando el humo durante semanas. Incluso donde las llamas no llegaron a consumir las viviendas, sus efectos fueron demoledores: enfermedades respiratorias, pérdida de cosechas, animales silvestres desplazados invadiendo chacos y huertas en busca de alimento, y plagas nuevas que surgieron tras la destrucción de los ecosistemas. El relato de las comunidades es, en buena medida, un relato de resistencia y de abandono.

Pero esta investigación también revela la existencia de un tejido social que se mantiene fuerte pese a la adversidad. En comunidades como Piso Firme, el liderazgo femenino surge con fuerza, mostrando la capacidad de las mujeres no solo para organizarse y proteger a sus familias, sino también para convertirse en voceras de sus territorios ante organizaciones como la nuestra. En otras comunidades, como Porvenir, se identifica un potencial económico ligado a la producción de asaí, que incluso en medio de la crisis logra sostener parte de la economía local. No todo es desolación. Hay esperanza, hay dignidad y hay proyectos de vida que resisten frente al fuego.

Detrás de la posibilidad de realizar esta investigación está Cecasem, una institución que lleva 35 años caminando los territorios más complejos de Bolivia. Cecasem no es una entidad que observe los problemas desde la comodidad de un escritorio en la ciudad; es una organización que ha construido su legitimidad sobre la base de la cercanía, del trabajo constante en campo, de la capacidad de escuchar, de compartir el riesgo y la incomodidad, y de comprender las realidades culturales y sociales de las comunidades con las que trabaja. Su historia está marcada por la defensa de los derechos humanos, la protección de la niñez, el combate a la trata de personas, la promoción de liderazgos locales, el empoderamiento económico de las mujeres y la lucha por la protección de territorios y recursos naturales. Hoy, en su aniversario número 35, Cecasem asume también la tarea de visibilizar los efectos políticos, económicos y sociales de uno de los desastres ambientales más grandes de la historia boliviana.

Fue precisamente la experiencia acumulada de Cecasem en las regiones más recónditas, y la confianza que ha sabido construir con líderes, caciques, capitanes y comunarios, lo que permitió que esta investigación se realice en lugares donde pocas organizaciones pueden entrar. No es lo mismo preguntar desde un despacho, que sentarse en la tierra junto a los comunarios, compartir su comida, escuchar sus miedos y registrar sus historias con respeto. Esa es la diferencia fundamental de este trabajo: no es una investigación realizada desde afuera, sino desde el interior mismo de las comunidades.

Los incendios de 2024 no fueron un accidente aislado ni un evento puramente natural. Responden a dinámicas más complejas, vinculadas a modelos económicos, intereses políticos, presiones sobre la tierra y prácticas culturales que en ocasiones se convierten en riesgo cuando no se gestionan adecuadamente. Las leyes, los decretos, las políticas públicas, tienen lagunas enormes que dejan sin protección a comunidades enteras, mientras que la respuesta institucional ha sido desigual y, en muchas zonas, prácticamente inexistente. Esta investigación tiene el propósito de aportar evidencia concreta para llenar esos vacíos. No solo se trata de contar lo que ocurrió, sino de proponer soluciones y caminos posibles para que estos desastres no se repitan, o al menos, para que sus efectos no sean tan devastadores para quienes menos tienen.

Este documento, entonces, no es simplemente un informe técnico. Es una contribución política y social, que pretende incidir en el diseño de políticas públicas, en la conciencia social y en la construcción de estrategias sostenibles que pongan en el centro a las personas y a los territorios. Se presenta como un instrumento que busca brindar puentes entre las comunidades afectadas, las autoridades, la sociedad civil y los organismos internacionales. Nuestra intención no es solo describir el daño, sino contribuir a la reparación, a la prevención y a la justicia ambiental y social.

Nada de esto sería posible sin las voces de las comunidades. Cada dato aquí recogido está vinculado a testimonios, a relatos directos, a la experiencia de vida de quienes enfrentaron el fuego. Cada cifra encuentra su verdadero significado en las historias personales que la sustentan. Por eso, más allá de los gráficos y las tablas, lo esencial de esta investigación es su carácter profundamente humano.

Hoy, cuando la atención mediática se ha desplazado a otros temas, Cecasem cree firmemente que es el momento de documentar, de reflexionar y de actuar. Esta investigación es apenas el inicio de un trabajo mucho más amplio que Cecasem seguirá impulsando en la Chiquitanía y en otros territorios que, aunque lejanos para muchos, forman parte fundamental de la vida y del equilibrio ambiental de Bolivia y de toda América Latina.

Que las páginas que siguen sirvan para honrar a quienes resistieron, para exigir responsabilidades donde las hubo, para proponer caminos de reconstrucción, y sobre todo, para mantener viva la memoria de un desastre que no debe repetirse. Porque incluso después del fuego, siempre hay algo que puede volver a brotar, si existe voluntad y justicia.



Introducción

Hablar de incendios forestales en Bolivia no es únicamente enumerar cifras ni describir fenómenos naturales aislados. Es hablar de territorios, de seres humanos, de economías comunitarias y de estructuras políticas que, en el momento de mayor fragilidad, mostraron sus costuras. El año 2024 quedará grabado como uno de los más severos en la historia ambiental del país. Más de doce millones de hectáreas ardieron, consumidas por un fuego que se extendió a lo largo de meses, sin que pudiera contenerse del todo ni por la intervención estatal ni por la naturaleza misma. Pero detrás de esos millones de hectáreas, cuya superficie resulta tan vasta que casi pierde significado, hay comunidades concretas, familias, rostros, culturas y sistemas de vida que, en muchos casos, quedaron en el más absoluto olvido.

La narrativa oficial y mediática sobre los incendios se concentró, casi de manera exclusiva, en mostrar la magnitud ambiental del desastre. Las imágenes de columnas de humo elevándose hasta el cielo, los puntos rojos en mapas satelitales y los reportes sobre especies amenazadas dominaron la discusión pública. Nadie discute la validez de esos datos ni la importancia de dimensionar la tragedia ecológica. Sin embargo, esa visión fue, en gran medida, insuficiente para capturar la dimensión social, económica y política de lo ocurrido. Allí donde las cámaras de televisión no llegaron y donde los satélites solo vieron manchas oscuras sobre el verde de los bosques, persistía una realidad humana compleja, cargada de miedo, de pérdida, de enfermedad y también de resistencia. Precisamente esa realidad es la que esta investigación pretende documentar y comprender.

La experiencia sobre el terreno demostró que, más allá del fuego visible, existía otro fuego, menos evidente pero igualmente devastador: el del abandono institucional, el de la indiferencia social, el de la desconexión entre el discurso oficial y la vivencia concreta de quienes habitan territorios considerados periféricos. Comunidades como las del Alto y Bajo Paraguá, enclavadas en la Chiquitanía, fueron testigos directos de este doble desastre: el ambiental y el social. Mientras los árboles ardían, el humo se infiltraba en las casas y en los cuerpos. Niñas, niños y ancianos se enfermaban, el agua se contaminaba con

cenizas, y las pocas economías locales se paralizaban por la necesidad urgente de apagar el fuego, tarea para la cual las comunidades se convirtieron en sus propios bomberos, muchas veces sin más herramientas que ramas verdes y baldes de agua.

La investigación que se presenta en estas páginas no surge de una curiosidad académica ni de la necesidad de llenar un vacío bibliográfico. Nace de una obligación ética y profesional. Surge del deber de documentar lo que muchas veces se queda sin voz. Para comprender la magnitud real de los incendios en Bolivia, no basta con estudiar imágenes satelitales ni con recitar cifras de hectáreas quemadas. Es imprescindible adentrarse en los territorios, recorrer caminos destruidos, escuchar relatos, observar las huellas que el fuego dejó en los paisajes y en las personas. Este no es un trabajo construido exclusivamente desde escritorios ni desde la revisión de documentos. Es una investigación realizada sobre el terreno, fruto de múltiples viajes a las comunidades más apartadas de San Ignacio de Velasco, con la firme convicción de que solo estando allí es posible captar la complejidad del fenómeno.

El Alto y el Bajo Paraguará representan, cada uno, realidades diferentes, pero profundamente entrelazadas. En el Alto Paraguará, el fuego no ingresó con la violencia que destruyó hectáreas en otras zonas. Sin embargo, el humo prolongado se convirtió en un enemigo silencioso, dañando pulmones, contaminando fuentes de agua y alterando la vida cotidiana de comunidades como 15 de Agosto, Sañonama, San Rafaelito de Suponema y San Antonio del Cerro. Allí, el relato compartido por comunarios y líderes locales fue uno de lucha diaria contra el aire cargado de cenizas y de preocupación constante por la salud de las poblaciones etarias más vulnerables, como la niñez y adultos mayores. El relato del botadero de San Ignacio de Velasco, que afecta particularmente a Sañonama, se suma a un escenario ya frágil, donde las aguas contaminadas no solo provienen del humo y las cenizas, sino también de residuos sólidos que invaden el entorno, multiplicando los riesgos para la salud.

En el Bajo Paraguará, la situación adquiere otra magnitud. Se trata de un territorio que, incluso en circunstancias normales, permanece aislado, con accesos que implican recorridos de catorce o más horas por caminos en pésimo estado o largas navegaciones por ríos llenos de obstáculos naturales. Allí se encuentran comunidades como Picaflor, Porvenir, Piso Firme, Cachuela y Bella Vista, cada una marcada por su propio grado de aislamiento y vulnerabilidad. En Picaflor, apenas diez o quince familias sobreviven en condiciones precarias, sin servicios básicos y con una profunda desconfianza hacia cualquier institución externa, resultado de promesas incumplidas a lo largo de los años. En Porvenir, la producción de asaí ofrece una esperanza económica, pero también evidencia la fragilidad de depender de un único producto para sostener toda la vida comunitaria. Piso Firme, puerta de entrada al Parque Noel Kempff Mercado, es testigo de un liderazgo comunitario, sobre todo femenino, que se organiza para sostener la vida frente a las múltiples adversidades, mientras Cachuela y Bella Vista se mantienen en una situación de semiabandono, con familias aisladas y economías casi inexistentes.

Una investigación científica y profesional que pretenda analizar los efectos de los incendios de 2024 no puede soslayar la interacción entre lo ambiental, lo social, lo económico y lo político. En estos territorios, el fuego no solo consumió vegetación, sino que puso en evidencia estructuras de desigualdad histórica. Comunidades enteras quedaron sin acceso a asistencia médica oportuna, a alimentos básicos o a medios de vida. Muchos comunarios se vieron obligados a dejar sus actividades económicas para convertirse en bomberos improvisados, lo que tuvo repercusiones profundas en los ingresos familiares. Mujeres y niños participaron activamente en las tareas de contención del fuego, rompiendo dinámicas tradicionales de género, pero al mismo tiempo quedando expuestos a enormes riesgos físicos y emocionales. Mientras tanto, las plagas emergentes, migradas desde el bosque quemado, comenzaron a invadir chacos y huertas, afectando la seguridad alimentaria y obligando a los comunarios a replantear sus estrategias de producción.

La suspensión de actividades escolares fue otro de los efectos indirectos más significativos. Aunque en algunas comunidades se logró dar continuidad educativa mediante clases virtuales, esta posibilidad estuvo limitada a aquellas con acceso a internet, recurso escaso o inexistente en gran parte de las zonas investigadas. Para muchas familias, la interrupción de la educación significó no solo un retraso académico, sino también una pérdida de espacios de contención emocional y social que la escuela representa en comunidades rurales.

En términos legales y políticos, los incendios pusieron en tela de juicio la efectividad de la normativa vigente en Bolivia. Existen leyes y decretos orientados a la protección ambiental, a la gestión de riesgos y a la respuesta ante desastres. Sin embargo, la experiencia sobre el terreno revela una brecha gigantesca entre la letra de la ley y la realidad de las comunidades afectadas. Los planes de contingencia no llegaron a ejecutarse de manera uniforme, y las ayudas fueron, en la mayoría de los casos, puntuales y limitadas, consistentes en la entrega de medicamentos básicos como paracetamol y colirios, insuficientes para atender problemas respiratorios complejos o para resolver la contaminación de fuentes de agua. La respuesta institucional fue desigual, y muchas comunidades quedaron completamente fuera del alcance de cualquier asistencia, confirmando que el Estado boliviano, en ciertas regiones, es apenas una presencia nominal.

Es en este escenario donde se enmarca la presente investigación. Más allá de exponer el daño ambiental visible, su propósito es dar cuenta de la complejidad social, económica y política de los incendios forestales de 2024 en territorios que históricamente han sido postergados. El Bajo y el Alto Paraguá, aunque pertenecen a un mismo municipio y comparten ciertas dinámicas culturales, presentan realidades profundamente distintas que es imprescindible describir y analizar. Mientras en el Alto Paraguá los comunarios vieron cómo el humo alteraba sus vidas sin que el fuego llegara a consumir sus viviendas, en el Bajo Paraguá se experimentó un grado de aislamiento casi absoluto. Allí, el ingreso de cualquier equipo de investigación implica no solo enfrentar obstáculos físicos, sino también superar las barreras de desconfianza y el cansancio de poblaciones que han escuchado demasiadas promesas sin cumplimiento.

Uno de los aspectos más notables que ha revelado esta investigación es el papel protagónico de las comunidades en la gestión de la emergencia. No hubo en estas regiones una presencia constante de instituciones públicas ni de organizaciones humanitarias que pudieran articular una respuesta efectiva y sostenida en el tiempo. Fueron los propios comunarios quienes asumieron las funciones de bomberos, organizando turnos, relevos y estrategias para contener las llamas con los escasos recursos disponibles. El relato de mujeres que participaron en estas tareas, cargando baldes de agua, cortando maleza y siendo contra fuegos, es testimonio de un empoderamiento que nace de la necesidad y que desafía los roles de género tradicionalmente establecidos. Este dato es clave, pues muestra cómo las dinámicas de género se transforman frente a las crisis, generando nuevas formas de liderazgo y organización comunitaria que merecen ser reconocidas y fortalecidas.

Al mismo tiempo, esta investigación se ha encontrado con la cruda realidad de comunidades que, por su ubicación geográfica y por el débil interés institucional, viven permanentemente en un estado de vulnerabilidad estructural. La falta de caminos transitables, de transporte regular, de servicios básicos como agua potable, electricidad o acceso a internet, convierte cualquier intervención en un desafío logístico enorme. En muchos casos, el simple traslado de personal o materiales requiere jornadas enteras, costos elevados y sobre todo, el conocimiento de guías locales que permitan sortear los peligros del terreno. Esta inaccesibilidad no solo complica las respuestas ante emergencias como los incendios, sino que profundiza el aislamiento de comunidades cuya existencia pareciera ser ignorada en los despachos donde se diseñan las políticas públicas.

La diferencia más significativa entre el relato institucional y la realidad comunitaria radica en el enfoque. Para los organismos oficiales, el desastre se mide en hectáreas, en gráficos, en mapas. Para las comunidades, el desastre es la tos persistente de los niños, es el agua turbia que causa diarreas, es el ganado que muere asfixiado, es la imposibilidad de sembrar en tierras cubiertas de cenizas o invadidas por plagas que no existían antes. Las entrevistas y grupos focales realizados durante esta investigación fueron, en muchos casos, espacios donde las comunidades encontraron por primera vez una oportunidad de narrar su experiencia a alguien dispuesto a escuchar. Lo que emerge de esos relatos es una verdad sencilla pero contundente: el fuego no se apagó con las lluvias; sus efectos siguen presentes, visibles en la salud de las personas, en la economía local y en el ánimo colectivo.

No menos relevante es la desconfianza que se respira en muchos de estos territorios. Durante los recorridos de campo, se hizo evidente que las comunidades han sido objeto de múltiples visitas de instituciones, organizaciones o investigadores que prometen ayuda, visibilidad o soluciones, pero que, tras recolectar datos o producir informes, rara vez regresan o se mantienen presentes en el territorio. Esa desconfianza no es gratuita. Es el resultado de un patrón repetido de intervenciones inconclusas o desconectadas de las verdaderas necesidades locales. En comunidades como Picaflor, la

mención de cualquier organización externa provoca gestos de recelo. Allí, los comunarios recuerdan la llegada de instituciones que prometieron proyectos de desarrollo, acceso a agua potable o electrificación, y que finalmente se marcharon sin cumplir. Esa herida institucional constituye uno de los principales obstáculos para cualquier investigación seria, pues sin la confianza de la gente es imposible acceder a testimonios honestos y completos.

Precisamente por eso, una de las fortalezas esenciales de esta investigación radica en la experiencia y el prestigio institucional de Cecasem, organización que lleva 35 años trabajando en las zonas más recónditas de Bolivia. La legitimidad de Cecasem no se construyó en conferencias ni en oficinas urbanas, sino en caminos polvorientos, en noches pasadas en casas comunales, en reuniones que se prolongan hasta la madrugada, escuchando las inquietudes de las comunidades. Fue esta relación de confianza la que permitió el acceso a testimonios valiosos y a información difícil de obtener en territorios donde la gente ha aprendido, a fuerza de desilusiones, a no abrirse fácilmente.

Cecasem, a lo largo de su trayectoria, ha comprendido que las comunidades no son simples beneficiarias de proyectos ni cifras en una base de datos. Son sujetos con saberes, con estructuras organizativas, con una profunda conciencia de su territorio. En contextos como el de los incendios forestales, las comunidades no solo sufren las consecuencias, sino que poseen conocimientos y estrategias de respuesta que deben ser escuchadas y valoradas. Esta investigación se nutre precisamente de esa escucha activa y de la convicción de que cualquier solución duradera debe surgir del diálogo con quienes habitan los territorios.

Los objetivos de esta investigación están definidos por esa perspectiva. Se busca documentar con rigor los impactos sociales, económicos, políticos y ambientales de los incendios de 2024 en las comunidades del Alto y Bajo Paraguá. Pero no se trata únicamente de describir daños. El propósito es comprender las dinámicas internas que han permitido a las comunidades resistir y adaptarse, identificar las lagunas en las respuestas institucionales, y aportar elementos concretos para la construcción de políticas públicas más sensibles, eficaces y respetuosas de la diversidad cultural y territorial de Bolivia.

La metodología utilizada combina enfoques cualitativos y cuantitativos, aunque es claro que el corazón de esta investigación reside en la experiencia cualitativa. Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, capitanes, caciques, mujeres, jóvenes y adultos mayores, además de grupos focales en varias de las comunidades visitadas. Estas técnicas permitieron recoger no solo datos objetivos, sino también narrativas, percepciones, emociones y matices culturales que, en muchos casos, constituyen la clave para entender la magnitud real del impacto. Complementariamente, se revisaron documentos oficiales, reportes de instituciones, imágenes satelitales y estadísticas municipales, lo que permitió contrastar las vivencias locales con las cifras oficiales.

La dificultad logística de este trabajo ha sido considerable. Ninguno de los viajes se realizó en condiciones ideales. Los caminos estaban destruidos, los vehículos sufrían desperfectos constantes y en más de una ocasión, el equipo debió esperar largas horas para recibir auxilio o para poder continuar. El acceso fluvial, especialmente hacia comunidades como Cachuela o Bella Vista, representó un riesgo físico considerable, dada la presencia de fauna peligrosa y las inclemencias del tiempo. Sin embargo, la decisión de ingresar físicamente a estas zonas fue estratégica y ética: solo desde la presencia en el terreno es posible comprender los matices que definen la vida en territorios tan complejos.

Esta investigación, además, se ha enfrentado a un desafío metodológico que trasciende lo puramente técnico: la necesidad de equilibrar la rigurosidad científica con el respeto profundo a la dignidad y las emociones de las personas entrevistadas. En comunidades afectadas por el fuego, el relato de lo vivido se entrelaza con el dolor y en ocasiones, con el miedo a represalias o a ser señalados por expresar críticas a las autoridades. Fue indispensable construir espacios de confianza donde los comunarios sintieran que podían hablar sin temor. De ahí la importancia de que las entrevistas se realizaran en contextos seguros, muchas veces en casas comunales, rodeados de rostros conocidos, sin cámaras ni grabadoras visibles que pudieran intimidar.

El conocimiento generado a partir de esta investigación pretende tener un impacto real, no solo en el ámbito académico o institucional, sino en la vida concreta de las comunidades. No es un informe destinado a acumular polvo en bibliotecas ni a engrosar estadísticas de cooperación internacional. Es un insumo que busca servir de base para la construcción de políticas públicas más sensibles a las realidades territoriales, para la planificación de intervenciones más eficaces y para la formulación de propuestas que surjan de las voces locales.

Al mirar hacia atrás en el recorrido de esta investigación, resulta evidente que una de las enseñanzas más valiosas es la urgencia de comprender los territorios en toda su complejidad. No se puede hablar de incendios en Bolivia sin considerar las particularidades de cada zona, las historias de quienes la habitan, las tensiones políticas y las formas en que la población se organiza frente a la adversidad. La narrativa predominante sobre los incendios forestales suele ser homogénea, como si el desastre se expresara de igual forma en todas partes. Esta investigación demuestra lo contrario: que existen múltiples realidades incluso dentro de un mismo municipio, y que cada comunidad procesa la crisis a partir de sus condiciones específicas, de su cultura, de su historia y de su relación con las instituciones.

Un elemento que destaca poderosamente es el modo en que la crisis ambiental ha funcionado como un catalizador de problemáticas estructurales. Lo que en apariencia es una emergencia puntual—un incendio forestal de gran magnitud—se revela, al escarbar un poco más, como la consecuencia de dinámicas políticas, económicas y culturales de larga data. Las comunidades investigadas,

particularmente en el Bajo Paraguá, viven en una situación de fragilidad crónica. El fuego no ha creado esa fragilidad, pero la ha expuesto de manera brutal. Ha dejado al descubierto la falta de infraestructura básica, la ausencia de servicios de salud, la precariedad de las vías de comunicación, la dependencia económica de monocultivos o de actividades extractivas, y sobre todo, la escasa presencia efectiva del Estado en estos territorios.

Es precisamente esta combinación de vulnerabilidad estructural y aislamiento geográfico lo que convierte a comunidades como Picaflor, Porvenir, Piso Firme, Cachuela y Bella Vista en territorios donde las crisis adquieren dimensiones desproporcionadas. Allí, cualquier emergencia —ya sea ambiental, sanitaria o económica— tiene consecuencias mucho más profundas y duraderas que en zonas más accesibles. La imposibilidad de recibir ayuda oportuna agrava los impactos, y la recuperación se convierte en un proceso lento y doloroso. Los relatos recogidos durante el trabajo de campo muestran que, en muchos casos, las comunidades aún conviven con secuelas físicas y psicológicas del desastre, pese a que las llamas se apagaron hace meses. Niños que no pueden dormir bien por el recuerdo del humo, adultos con enfermedades respiratorias persistentes, mujeres que cargan la preocupación de no saber si podrán cultivar sus chacos en la próxima temporada. Todo esto permanece en la vida diaria, como brasas encendidas bajo la superficie.

Al mismo tiempo, es indispensable reconocer que no todo es desesperanza. Incluso en las comunidades más afectadas, esta investigación encontró evidencias claras de resiliencia, de organización social y de voluntad para seguir adelante. Mujeres que se convirtieron en líderes naturales durante la emergencia, hombres que retomaron sus oficios tras haber actuado como bomberos voluntarios, jóvenes que plantean nuevas estrategias para proteger sus comunidades. Existe una fuerza colectiva que se mantiene viva, alimentada por la memoria compartida de lo sufrido y por el deseo de no repetirlo.

Esa experiencia acumulada es la que permitió que esta investigación no solo recogiera datos, sino que penetrara en la profundidad de las realidades locales. Se ha intentado mantener, en cada etapa del proceso investigativo, un equilibrio entre la rigurosidad científica y el respeto absoluto por las personas entrevistadas. El equipo de trabajo comprendió desde el inicio que estaba ingresando a espacios de dolor y de vulnerabilidad, donde revivir ciertos recuerdos podía significar abrir heridas aún no cicatrizadas. Por ello, cada entrevista, cada grupo focal, cada conversación informal en un patio o en la orilla de un río, se llevó a cabo con sumo cuidado, asegurando la confidencialidad y procurando siempre no causar daño. El conocimiento obtenido es valioso, pero lo es aún más la confianza depositada por las comunidades en los investigadores. Esa confianza constituye un compromiso que Cecasem asume con seriedad, con la intención de que los datos recogidos no se conviertan en información muerta, sino en herramientas para la acción.

Otro aspecto fundamental es la relación entre esta investigación y las políticas públicas. Una de las grandes motivaciones de este trabajo es contribuir, de manera concreta, a la elaboración de políticas más justas, más eficaces y más

sensibles a la diversidad territorial de Bolivia. Es innegable que las respuestas oficiales a los incendios han sido desiguales y, en muchos casos, insuficientes. Los planes de contingencia existen en el papel, pero su implementación en terreno ha sido irregular. Las ayudas se han concentrado en áreas más accesibles, dejando enormes vacíos en regiones como el Bajo Paraguá. Esta investigación pretende llenar, aunque sea parcialmente, esos vacíos de información, proporcionando datos y análisis que puedan ser utilizados para mejorar la planificación institucional y para evitar que futuras emergencias encuentren nuevamente a estas comunidades solas y desprotegidas.

En términos metodológicos, esta investigación se caracteriza por haber integrado distintas fuentes y enfoques. La observación directa, las entrevistas, los grupos focales, el análisis documental y la recopilación de datos estadísticos permiten construir un panorama amplio, pero profundamente anclado en la realidad. No se trata de un trabajo elaborado únicamente sobre hipótesis ni sobre documentos secundarios. Cada afirmación que contiene este estudio se respalda en experiencias concretas, en kilómetros recorridos, en noches pasadas en comunidades remotas, y en horas de conversación con quienes vivieron el desastre en primera persona.

Los resultados que se presentan en los capítulos siguientes están ordenados de forma que el lector pueda transitar desde el contexto general del desastre hacia los detalles más específicos de cada comunidad. Se parte de una visión panorámica para, poco a poco, sumergirse en la diversidad de situaciones locales. No es casual que se haya decidido incluir, más allá de la descripción de daños, un análisis del marco legal y de las contradicciones existentes entre las normas ambientales y la realidad en terreno. Esa dimensión jurídica es clave para entender por qué, a pesar de las leyes vigentes, las comunidades siguen tan expuestas a catástrofes como las ocurridas en 2024.

Finalmente, es importante subrayar que esta investigación no pretende tener la última palabra sobre los incendios de 2024 ni sobre las comunidades del Alto y Bajo Paraguá. Más bien, aspira a abrir nuevas preguntas, a invitar a otras instituciones, a investigadores, a tomadores de decisiones y a la sociedad en su conjunto, a mirar estos territorios con mayor profundidad y compromiso. El conocimiento es solo el inicio. Lo esencial es que este conocimiento se traduzca en acciones concretas, en prevención, en reconstrucción, y en justicia para quienes han soportado la peor parte de una tragedia que no debió alcanzar la magnitud que alcanzó.



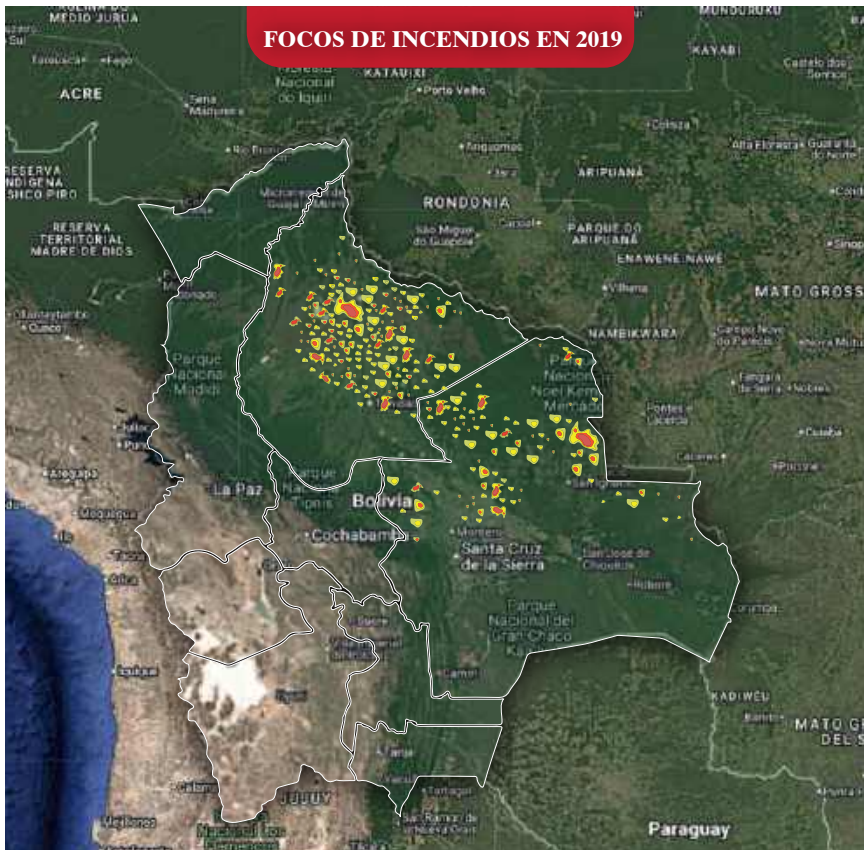


Parque Nacional Noel Kempff Mercado, (San Ignacio de Velasco)

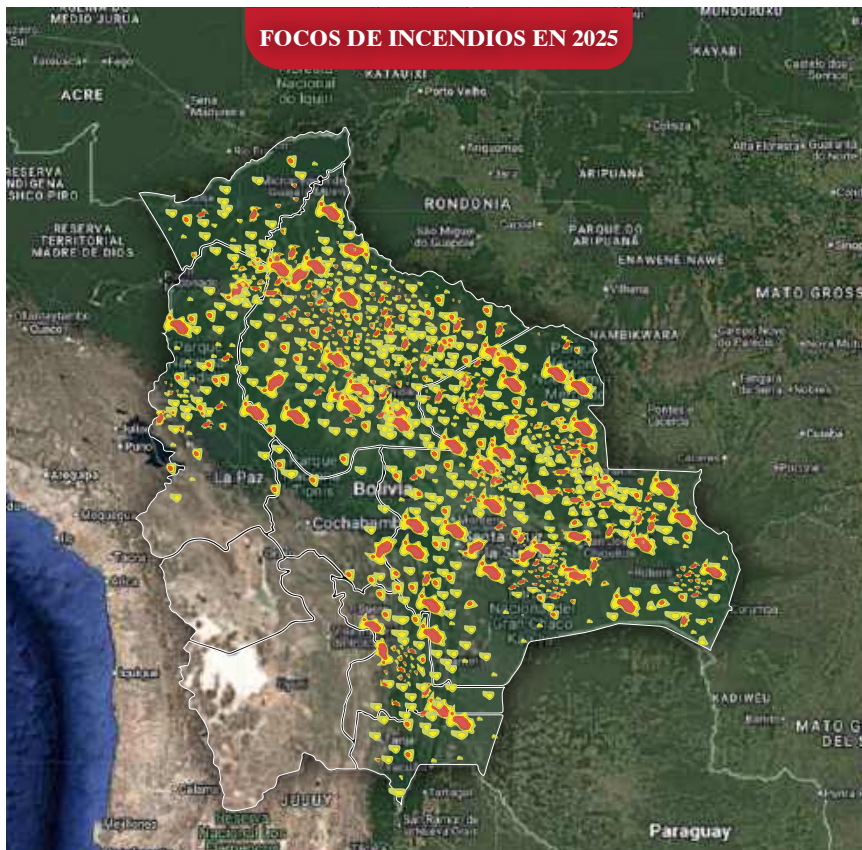
Capítulo 1

EL PATRÓN HISTÓRICO DE LOS INCENDIOS EN BOLIVIA

Hablar de los incendios forestales en Bolivia exige comprender que este fenómeno no es nuevo ni aislado; forma parte de un patrón que se repite año tras año y que se ha intensificado en las últimas dos décadas. En particular, la región de la Chiquitanía ha sido escenario recurrente de estos desastres, concentrando gran parte de las quemas más devastadoras que ha vivido el país. Este contexto histórico es fundamental para dimensionar la magnitud del incendio de 2024, ya que muestra que lo ocurrido no es un accidente aislado, sino la consecuencia de múltiples factores estructurales, sociales y ambientales que han convergido a lo largo del tiempo.



Mapa satelital, (Satrifo)



Mapa satelital, (Satrifo)

En la memoria colectiva nacional, el año 2019 marcó un punto de inflexión. Los incendios de aquel año arrasaron más de seis millones de hectáreas en la Chiquitanía, destruyendo bosques secos tropicales, hábitats de especies únicas y comunidades enteras que vivían en estrecha relación con el monte. Las imágenes de animales calcinados y paisajes convertidos en desiertos de ceniza recorrieron el mundo, despertando una ola de indignación y solidaridad. Se prometieron reformas profundas, pausas ecológicas y una mayor protección para los ecosistemas más frágiles. Sin embargo, la experiencia mostró que estas medidas fueron temporales o insuficientes: cinco años después, en 2024, Bolivia volvió a enfrentar incendios aún más extensos y destructivos.

Comprender por qué se repiten estas tragedias implica mirar más allá del fuego mismo y analizar las causas estructurales. Una de ellas es la práctica del chaqueo, una técnica ancestral utilizada para limpiar terrenos y preparar el suelo para la siembra. En su concepción original, el chaqueo era un método controlado, realizado en áreas pequeñas y en condiciones climáticas favorables.

Pero el contexto actual —marcado por sequías prolongadas, altas temperaturas y vientos intensos— ha convertido esta práctica en un riesgo difícil de manejar. A esto se suma la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la producción de soya y ganadería para exportación, que presiona cada vez más sobre el bosque chiquitano y amazónico.

El marco legal boliviano también ha contribuido, de manera indirecta, a esta problemática. Normas como la Ley 741 permiten desmontes de hasta 20 hectáreas por predio para fines productivos, legalizando así el uso del fuego en extensiones considerables de tierra. La fiscalización por parte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) es limitada, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso como el Bajo Paraguará. En la práctica, esto genera un escenario en el que las quemas autorizadas y las ilegales se confunden, y donde el control efectivo resulta casi imposible.



La Chiquitanía como epicentro recurrente

La Chiquitanía, ubicada al este de Bolivia, es un mosaico de bosques secos tropicales, sabanas y ríos que conecta la Amazonía con el Pantanal brasileño. Este ecosistema único, que ocupa cerca del 20% del territorio nacional, alberga una biodiversidad excepcional: jaguares, guacamayos azules, tatús gigantes y osos hormigueros son solo algunas de las especies que dependen de estos bosques para su supervivencia. La singularidad ecológica de la Chiquitanía ha sido reconocida internacionalmente, y áreas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.



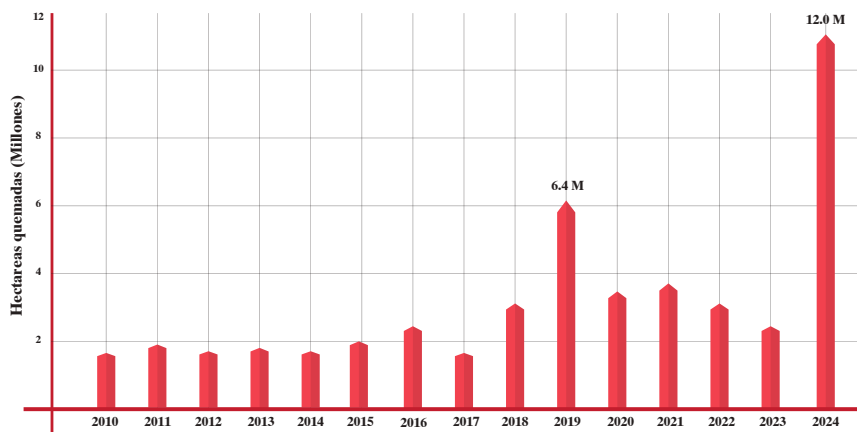
Mapa satelital, (Satrifo)

Pero esta riqueza contrasta con una realidad de vulnerabilidad. La región ha sido históricamente marginada en términos de inversión estatal, lo que se refleja en caminos en mal estado, servicios básicos deficientes y escasa presencia institucional. Esta combinación de riqueza natural y abandono estructural convierte a la Chiquitanía en un escenario paradójico: un territorio de altísimo valor ecológico y cultural, pero altamente expuesto a los desastres ambientales.

Los incendios de 2024 encontraron a la Chiquitanía en un estado de fragilidad acumulada. Tras años de deforestación y expansión agrícola, el bosque había perdido parte de su capacidad de regeneración natural. Las lluvias se habían vuelto más erráticas, los suelos más áridos y la vegetación más inflamable. En este contexto, cualquier chispa —provocada o accidental— podía convertirse en un incendio de grandes proporciones.

El municipio de San Ignacio de Velasco, protagonista de esta investigación, ejemplifica estas tensiones de manera clara. Ubicado en el noreste del departamento de Santa Cruz, San Ignacio limita con Brasil y Beni, y actúa como puente entre la Chiquitanía y la Amazonía. Su territorio, que incluye al Alto y Bajo Paraguá, es vasto y heterogéneo: desde comunidades relativamente accesibles hasta asentamientos que solo pueden alcanzarse tras más de dieciocho horas de viaje por caminos de tierra y ríos caudalosos.

El patrón histórico de incendios, la fragilidad ecológica de la región y la ausencia de políticas preventivas efectivas convirtieron al 2024 en una crisis anunciada. Las comunidades sabían, desde los primeros meses del año, que la sequía prolongada y los vientos constantes crearían condiciones propicias para los incendios. Sin embargo, la preparación institucional fue mínima. Los planes de contingencia existían en papel, pero no se tradujeron en acciones concretas en el terreno. Cuando el fuego comenzó a expandirse, las comunidades del Alto y Bajo Paraguá se encontraron prácticamente solas, repitiendo un escenario que ya habían vivido en 2019, pero ahora con una magnitud mucho mayor.



Con este panorama histórico y territorial establecido, el capítulo se adentra ahora en los detalles del incendio de 2024: su cronología, magnitud y el modo en que afectó específicamente al municipio de San Ignacio de Velasco. A partir de este punto, la narrativa se vuelve más cercana a la experiencia de las comunidades, describiendo no solo los datos del desastre, sino también cómo el fuego transformó la vida cotidiana en el Alto y Bajo Paraguará.

2024, cronología y magnitud

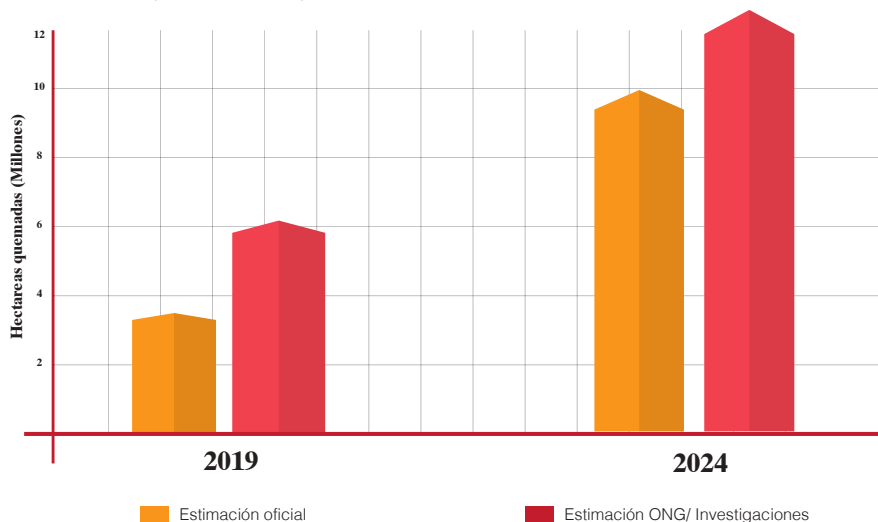
El año 2024 no fue simplemente otra temporada de incendios; se convirtió en el desastre ambiental más severo de la historia reciente de Bolivia. Todo comenzó de manera casi imperceptible: a finales de junio, los primeros reportes satelitales identificaron focos de calor dispersos en el oriente boliviano, algunos en áreas de transición entre la Chiquitanía y la Amazonía. Para las comunidades locales, el humo en el horizonte no era algo inusual. Durante años, habían aprendido a convivir con las quemas agrícolas estacionales que forman parte de las prácticas tradicionales de roza y quema. Sin embargo, en esta ocasión, el fuego no se comportó como en otras temporadas.

El fenómeno climático de ese año jugó un papel determinante. Bolivia enfrentaba una de las sequías más prolongadas en décadas, con precipitaciones un 40% por debajo del promedio histórico. Los suelos estaban secos, la vegetación se había convertido en material altamente inflamable y los vientos del este se mantenían constantes. Bajo estas condiciones, lo que comenzó como focos aislados se convirtió rápidamente en incendios de gran magnitud. En cuestión de semanas, la línea roja que mostraban los satélites se expandió por vastas áreas del departamento de Santa Cruz, afectando especialmente al municipio de San Ignacio de Velasco.

En julio, los primeros focos significativos se registraron cerca de los límites del Bajo Paraguará. Las comunidades percibieron el humo antes que cualquier reporte oficial. Para agosto, el fuego había alcanzado tal extensión que se fusionaba en lo que los especialistas denominan “megaincendios”, áreas de más de 100.000 hectáreas ardiendo de manera continua. Septiembre fue el mes más crítico: las llamas rodeaban varias comunidades, amenazando viviendas y áreas de producción. Aunque en muchos casos el fuego no ingresó directamente a los poblados, su cercanía generó un estado de alerta permanente. El cielo permanecía cubierto por una densa capa gris, las jornadas se volvían opacas y respirar se convirtió en una tarea dolorosa.

Las cifras de afectación resultan elocuentes. Se estima que en todo el país se quemaron aproximadamente 12 millones de hectáreas en 2024, de las cuales un porcentaje significativo correspondió a bosques secos chiquitanos y zonas de transición amazónica. Solo en el municipio de San Ignacio de Velasco se calcula que más de 4 millones de hectáreas resultaron afectadas, incluyendo áreas protegidas, zonas de uso comunitario y territorios indígenas. Estas cifras superan ampliamente las de 2019, cuando se reportaron 6,4 millones de hectáreas quemadas a nivel nacional.

Incendios forestales de Bolivia: Hectáreas afectadas (2019 vs 2024)



San Ignacio de Velasco en el epicentro de la crisis

San Ignacio de Velasco, por su extensión territorial y diversidad ecológica, se convirtió en un microcosmos de la crisis nacional. Con más de 70 comunidades dispersas en su territorio, el municipio experimentó una emergencia desigual: mientras las zonas cercanas a la capital municipal lograron cierta respuesta institucional, las comunidades del Bajo Paraguá quedaron prácticamente solas durante semanas. Este contraste evidenció las profundas brechas en la capacidad del Estado para atender emergencias en territorios periféricos.

La cronología del incendio en San Ignacio muestra una progresión clara. Julio marcó el inicio con focos dispersos en zonas de chaqueo. Agosto trajo la expansión descontrolada del fuego hacia áreas de bosque virgen y reservas comunitarias. Septiembre fue el clímax: la mayor parte del territorio municipal estaba cubierta de humo, y la visibilidad se reducía a pocos metros en algunos días. Las escuelas suspendieron clases, los centros de salud colapsaron por la demanda de atención respiratoria y las actividades productivas se detuvieron.

Para octubre, con la llegada tardía de las primeras lluvias, las llamas comenzaron a ceder, pero el daño ya estaba hecho: miles de hectáreas destruidas, fauna desplazada y comunidades exhaustas.

Si bien las cifras permiten dimensionar la magnitud del desastre, no alcanzan para explicar su impacto real. En cada hectárea quemada había cultivos, fuentes de agua, senderos de caza, plantas medicinales y recuerdos comunitarios. El fuego no solo alteró el paisaje físico, sino también el emocional y cultural. Las comunidades que habitan el Alto y Bajo Paraguá dependen directamente del bosque para su alimentación, medicina y materiales de construcción. Al arrasar con estos recursos, el incendio afectó de manera inmediata la seguridad alimentaria y la salud de la población.

Este capítulo, al explorar la cronología y magnitud del desastre, prepara el terreno para comprender la respuesta de las comunidades y las secuelas que el fuego dejó en su vida cotidiana. En las siguientes secciones, la narrativa se adentrará en los testimonios y en la resistencia silenciosa de pueblos que, pese a la magnitud del desastre, encontraron formas de sobrevivir y reconstruir su entorno.

San Ignacio de Velasco antes del fuego

Antes de que el fuego alterara el paisaje y marcara un antes y un después en la vida de sus habitantes, San Ignacio de Velasco se mostraba como un territorio vasto, diverso y en muchos sentidos, aislado. Este municipio, ubicado al noreste del departamento de Santa Cruz, limita con Brasil y el departamento de Beni, lo que le confiere un valor estratégico en términos ambientales y culturales. Sus bosques secos tropicales y sabanas amazónicas forman parte de la Chiquitanía, uno de los ecosistemas más singulares del planeta, reconocido por su biodiversidad y por su papel como corredor ecológico entre la Amazonía y el Pantanal.

El municipio de San Ignacio se divide en dos grandes regiones: el Alto Paraguá y el Bajo Paraguá. Esta división no es solo geográfica; también refleja diferencias en el acceso a servicios, en las actividades productivas y en la experiencia cotidiana de las comunidades que lo habitan. El Alto Paraguá, más cercano a la capital municipal, concentra comunidades con cierto acceso a infraestructura vial y, en algunos casos, electricidad intermitente o agua entubada. Aunque estas condiciones son precarias, marcan una diferencia importante frente al Bajo Paraguá, una región mucho más remota y de difícil acceso, donde los caminos se vuelven intransitables durante las lluvias y donde las comunidades dependen casi exclusivamente del transporte fluvial para conectarse con el resto del municipio.



Las comunidades del Alto y Bajo Paraguá combinan características de pueblos originarios —como el guarasug'we— con asentamientos interculturales conformados por migrantes de otras regiones del país. La vida diaria gira en torno a la agricultura de subsistencia, la pesca, la recolección de frutos del bosque y en algunos casos, la producción de asaí para exportación. Este fruto amazónico, en particular, se ha convertido en un recurso clave para las comunidades del Bajo Paraguá, que lo recolectan en palmares nativos y lo procesan artesanalmente antes de enviarlo a mercados nacionales e internacionales.

La organización comunitaria en San Ignacio se estructura a partir de liderazgos tradicionales. Cada comunidad cuenta con una autoridad principal —capitán o cacique— que coordina las decisiones colectivas y actúa como enlace con las instituciones externas. Estas figuras son elegidas en asamblea y su legitimidad se sustenta en la confianza de la comunidad más que en mandatos formales. En el trabajo de campo realizado para esta investigación, se constató que la toma de decisiones se hace de manera participativa, aunque las mujeres, si bien cada vez más visibles en espacios de liderazgo, aún enfrentan barreras para una participación equitativa.

El acceso a servicios básicos es limitado en todo el municipio, pero las diferencias entre Alto y Bajo Paraguará son notorias. En el Alto Paraguará, algunas comunidades cuentan con pequeñas postas de salud que ofrecen atención primaria, aunque carecen de medicamentos y personal especializado. En el Bajo Paraguará, la atención sanitaria es prácticamente inexistente: cualquier emergencia implica desplazarse durante horas —e incluso días— hasta la capital municipal o en casos extremos, hasta la ciudad de Santa Cruz. Las escuelas rurales operan con recursos mínimos y enfrentan altos índices de ausentismo, especialmente en épocas de cosecha o cuando las familias deben movilizarse en busca de trabajo temporal.

La relación de las comunidades con el bosque es íntima y multifacética. El monte no es solo un recurso económico; es también un espacio espiritual y cultural. De él provienen alimentos, medicinas, materiales para la construcción de viviendas y elementos esenciales para los rituales comunitarios. El bosque seco chiquitano y los ríos del Bajo Paraguará constituyen la base de la seguridad alimentaria y del bienestar general de las familias. Esta dependencia directa explica por qué la pérdida de cobertura forestal por incendios tiene un impacto tan profundo, no solo en el entorno físico, sino también en la identidad y cohesión social de las comunidades.

La presencia del Parque Nacional Noel Kempff Mercado añade otra capa de complejidad al territorio. Este parque, Patrimonio de la Humanidad, alberga ecosistemas míticos y especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el guacamayo azul. Aunque el parque se encuentra en teoría protegido, su proximidad a comunidades del Bajo Paraguará genera tensiones entre la conservación estricta y las necesidades de subsistencia de la población local. Para los comunarios, el parque representa tanto una oportunidad —potencial para turismo comunitario, acceso a recursos controlados— como una restricción, ya que limita ciertas actividades tradicionales de caza o recolección.

Entender la vida previa al incendio en San Ignacio de Velasco es fundamental para dimensionar el impacto del fuego. Las comunidades ya enfrentaban desafíos estructurales: pobreza, aislamiento, carencia de servicios y vulnerabilidad climática. En este contexto, el incendio de 2024 no solo destruyó recursos naturales; exacerbó desigualdades preexistentes y puso a prueba la resiliencia de un tejido social que, pese a todo, ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resistencia.

La llegada del fuego, primeras señales y reacciones

El fuego no llegó a las comunidades del Alto y Bajo Paraguará como una sorpresa abrupta, sino como una amenaza que creció día tras día hasta volverse ineludible. Desde mediados de julio de 2024, el humo comenzó a aparecer en el horizonte, primero como una bruma lejana que muchos interpretaron como parte del ciclo agrícola normal de la región. Sin embargo, el tono del cielo fue cambiando con el paso de las semanas: del azul limpio al gris opaco, y finalmente a un anaranjado inquietante que teñía los amaneceres y los atardeceres. El olor a ceniza impregnaba el aire, los animales domésticos mostraban signos de agitación y la visibilidad se reducía hasta convertir las jornadas en una penumbra constante.

En el Alto Paraguará, comunidades como 15 de Agosto o San Antonio del Cerro observaron las llamas bordear las laderas cercanas. Aunque el fuego no llegó a consumir directamente las viviendas, la cercanía de las llamas generó una alarma permanente. Familias enteras comenzaron a organizar rondas de vigilancia nocturna, y los líderes comunitarios instruyeron a los hombres a abrir cortafuegos improvisados con machetes y ramas verdes. Las mujeres y los niños, mientras tanto, llenaban recipientes con agua de los atajados para humedecer los alrededores de las casas y reducir el riesgo de que el fuego avanzara.

En el Bajo Paraguará, la situación fue aún más crítica. Comunidades como Picaflor, Porvenir y Piso Firme enfrentaron el fuego sin acceso a equipos adecuados ni presencia inmediata de brigadas externas. El aislamiento geográfico se convirtió en su mayor enemigo: sin caminos transitables y con ríos que requerían largas horas de navegación, la llegada de ayuda era prácticamente imposible en los primeros días. Ante la falta de opciones, los comunarios se vieron obligados a convertirse en sus propios bomberos, organizándose en turnos para vigilar el avance del fuego y detenerlo como podían. En varias entrevistas, los habitantes recordaron aquellos días como una mezcla de miedo y resistencia: "El fuego no llegó a la casa, pero el humo entró en los pulmones de todos".

El humo fue, en muchos sentidos, más devastador que las propias llamas. Su presencia constante durante semanas provocó problemas respiratorios generalizados, especialmente en niños y ancianos. Los síntomas más comunes incluían tos persistente, irritación ocular, dolores de cabeza y en los casos más graves, crisis asmáticas que difícilmente podían ser tratadas en las pequeñas postas de salud. La vida cotidiana se interrumpió por completo: las clases escolares se suspendieron, los mercados comunitarios dejaron de funcionar y muchas familias se replegaron a espacios cerrados en un intento inútil de evitar el aire contaminado.

El impacto psicológico fue igualmente profundo. La incertidumbre sobre el avance del fuego y la falta de información oficial generaron ansiedad y sensación de abandono. Cada crujir en la distancia podía significar que el fuego se acercaba, y cada ráfaga de viento traía consigo el temor de que las llamas cambiaran de dirección. Esta angustia se mezclaba con el cansancio físico de las jornadas de vigilancia y trabajo comunitario, creando un estado de alerta constante que se prolongó durante meses.

Si algo definió la experiencia del Alto y Bajo Paraguará durante el incendio de 2024 fue la sensación de aislamiento absoluto. Este aislamiento no era nuevo para las comunidades; formaba parte de su vida cotidiana debido a la geografía y la falta de infraestructura. Sin embargo, durante el desastre, esta condición se volvió crítica, convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos para recibir ayuda o evacuar zonas de riesgo.

Los caminos que conectan estas regiones con la capital municipal de San Ignacio son de tierra y se deterioran rápidamente durante la temporada de lluvias. En pleno incendio, muchos tramos eran intransitables: los vehículos quedaban atascados en barro profundo o enfrentaban zanjas abiertas por las corrientes de agua de meses anteriores. El viaje, que en condiciones ideales ya podía tomar entre ocho y doce horas, se alargaba a catorce o más, con tramos donde solo era posible avanzar a pie o en motocicleta. Para el Bajo Paraguará, el acceso fluvial sumaba otra complejidad: navegar ríos como el Iténez o el Paraguará implicaba lidiar con corrientes fuertes, presencia de caimanes y una densa vegetación ribereña.

La incomunicación era otro factor que agravaba la crisis. En la mayoría de las comunidades no hay señal de telefonía móvil ni acceso a internet. La información sobre el avance del fuego circulaba de manera informal, transmitida de boca en boca o por mensajeros que viajaban durante horas para dar aviso a otras comunidades. Esto generó un clima de incertidumbre permanente: muchas familias no sabían si el fuego había sido controlado en zonas cercanas ni si debían prepararse para evacuar. La falta de comunicación también dificultó la coordinación de esfuerzos colectivos más amplios; cada comunidad actuó de manera aislada, dependiendo exclusivamente de sus propios recursos.

En este contexto de abandono institucional, la organización comunitaria se volvió vital. Los capitanes y caciques convocaron asambleas para distribuir tareas: unos se encargaban de abrir cortafuegos, otros de traer agua, otros de vigilar las zonas más cercanas al bosque durante la noche. Las mujeres asumieron roles clave en la logística, organizando alimentos, cuidando a los niños y participando en la recolección de agua. En algunas comunidades, como Piso Firme y Porvenir, las mujeres también se sumaron al combate directo del fuego, rompiendo roles de género tradicionales y convirtiéndose en figuras centrales en la respuesta comunitaria.

La resistencia no fue solo física, sino también emocional. Vivir semanas enteras en estado de alerta afectó el ánimo colectivo. El cansancio, la ansiedad y el miedo convivían con un sentido de solidaridad que se reforzaba en cada gesto de apoyo mutuo. Compartir alimentos, turnarse para las guardias nocturnas y consolar a los más pequeños se convirtió en una forma de resistencia silenciosa frente al desastre. En muchos testimonios, los comunarios expresan un sentimiento ambivalente: por un lado, orgullo por haber enfrentado el fuego sin depender de nadie; por otro, frustración por sentirse olvidados por las instituciones encargadas de su protección.

Este aislamiento también forzó a las comunidades a recurrir a saberes ancestrales para enfrentar las consecuencias del humo y el calor. Las plantas medicinales del monte se utilizaron para aliviar tos, irritaciones o quemaduras leves. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, volvió a cobrar protagonismo en un momento en el que los medicamentos convencionales escaseaban y las postas de salud eran inaccesibles.



El Bajo Paraguá, por su lejanía, fue el escenario donde esta soledad se sintió con más crudeza. Comunidades pequeñas, como Cachuela y Bella Vista, compuestas por apenas unas pocas familias, quedaron prácticamente fuera del radar institucional y mediático. Sus relatos muestran un nivel de resiliencia admirable, pero también una herida profunda: la sensación de que, en los mapas y en los discursos oficiales, simplemente no existen.

Cuando finalmente comenzaron a llegar las primeras ayudas externas, las comunidades del Alto y Bajo Paraguá ya habían soportado semanas de humo y aislamiento. El arribo de brigadas y donaciones, aunque esperado con ansiedad, reveló de inmediato las profundas desigualdades en la distribución de la asistencia. Las comunidades más cercanas a la capital municipal recibieron los primeros lotes de medicamentos, agua y víveres, mientras que las más alejadas —especialmente en el Bajo Paraguá— permanecieron invisibles para la mayoría de las acciones de emergencia.

El primer auxilio consistió en medicinas básicas: cajas de paracetamol para la fiebre, colirios para la irritación ocular y mascarillas simples para intentar mitigar los efectos del humo. Aunque estas medidas eran bien recibidas, resultaban insuficientes para enfrentar problemas respiratorios complejos, infecciones y el impacto prolongado en la salud de la población. Los testimonios recogidos durante los grupos focales revelan una constante: la percepción de que la ayuda oficial llegó tarde y en cantidades mínimas. “Nos trajeron unas pastillas y dijeron que aguantaríamos, pero los niños seguían tosiendo toda la noche”, relató una comunaria de Porvenir.

Las ONGs tuvieron un papel relevante en estas primeras semanas, aunque su presencia también se vio limitada por las condiciones logísticas. Algunas organizaciones llegaron con campañas de alimentos, agua y herramientas básicas para el combate de incendios; otras ofrecieron talleres sobre prevención y manejo de suelos afectados. Sin embargo, la falta de coordinación entre las diferentes entidades provocó superposición en algunos lugares y vacíos en otros. El resultado fue una respuesta fragmentada, donde algunas comunidades recibieron varias visitas y otras ninguna.

A nivel gubernamental, las promesas de apoyo a largo plazo no tardaron en surgir. Se anunciaron planes de reforestación, proyectos de infraestructura y programas de salud comunitaria. Sin embargo, al cierre del trabajo de campo, la mayoría de estas iniciativas seguían en fase de planificación o no se habían materializado en las comunidades afectadas. Esta brecha entre el discurso y la realidad reforzó el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones, un tema recurrente en los relatos de los comunarios: “Prometieron que volverían para ayudarnos a sembrar otra vez, pero no hemos visto a nadie desde que se apagó el fuego”, afirmó un capitán del Alto Paraguá.



Puerta del parque Noel Kempff,
(Piso Firme, San Ignacio de Velasco)

Secuelas inmediatas del desastre

Las consecuencias del incendio no terminaron cuando las llamas se extinguieron. De hecho, muchas de las secuelas más graves comenzaron a manifestarse en los meses posteriores. El humo prolongado dejó una estela de enfermedades respiratorias crónicas, afectando especialmente a niños y ancianos. Los centros de salud reportaron un aumento en los casos de bronquitis y asma, mientras que las postas comunitarias se vieron desbordadas por la falta de insumos y personal.

La seguridad alimentaria de las comunidades se deterioró rápidamente. Los cultivos de subsistencia —maíz, yuca, plátano— sufrieron pérdidas considerables por la caída de ceniza y la alteración de los ciclos de lluvia. Las huertas familiares, que complementaban la dieta con verduras frescas, quedaron inservibles durante meses. Al mismo tiempo, los animales silvestres desplazados por el fuego comenzaron a invadir los chacos en busca de alimento, generando conflictos y afectando aún más la producción agrícola.

Otra secuela visible fue la aparición de plagas y la contaminación del agua. Las cenizas arrastradas por las lluvias llegaron a los atajados y ríos, provocando infecciones estomacales generalizadas. Los comunarios reportaron síntomas como diarrea, fiebre y vómitos, especialmente entre los más pequeños. Sin acceso a agua potable ni a tratamientos adecuados, muchas familias dependieron de remedios tradicionales para sobrellevar estos problemas.

El impacto psicológico también fue profundo. La experiencia de vivir semanas enteras bajo la amenaza del fuego, la pérdida de animales y cultivos, y la sensación de abandono dejaron huellas emocionales duraderas. Varios comunarios relataron episodios de ansiedad, insomnio y miedo recurrente a que el fuego regrese cada temporada seca. Estas emociones no siempre se expresan abiertamente, pero están presentes en el tono de los testimonios y en la manera en que las comunidades recuerdan el incendio.





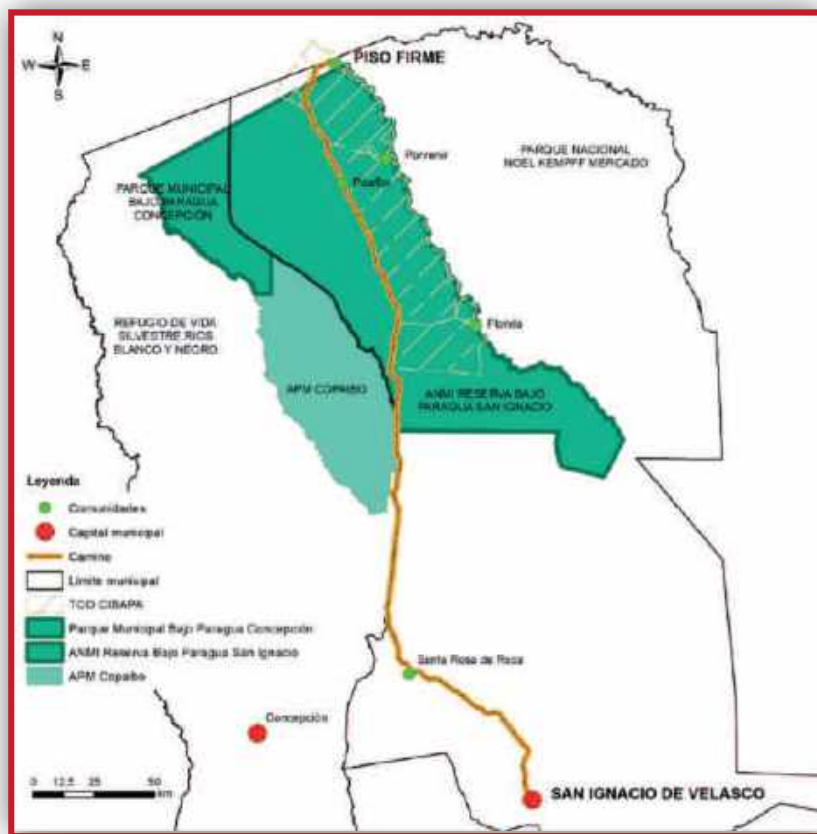
Aunque las llamas se extinguieron y el cielo recuperó su tono habitual con la llegada de las primeras lluvias de octubre, las secuelas del incendio de 2024 continuaron manifestándose de manera silenciosa en las comunidades del Alto y Bajo Paraguá. Estas huellas, menos visibles que los árboles calcinados o los campos ennegrecidos, son las que definen la verdadera magnitud del desastre: enfermedades persistentes, ansiedad colectiva, pérdida de confianza en las instituciones y cambios profundos en la relación de las personas con su territorio.

En los grupos focales realizados durante esta investigación, los comunarios coincidieron en describir una sensación de alerta permanente que no desapareció con el fin del fuego. La memoria del humo y el miedo a su regreso quedaron grabados en el imaginario colectivo, transformando la manera en que se percibe la temporada seca. Ahora, cada brisa caliente o columna de humo en la distancia se asocia de inmediato con la posibilidad de un nuevo desastre. Esta hiperalerta no solo afecta el bienestar emocional de los adultos, sino también el comportamiento de los niños, quienes, según los testimonios, preguntan con frecuencia si el fuego volverá.

En términos sociales, el incendio actuó como un catalizador que expuso desigualdades preexistentes. Las comunidades más alejadas, como Cachuela y Bella Vista en el Bajo Paraguá, fueron las que menos asistencia recibieron y las que más tiempo tardaron en recuperar cierta estabilidad. Esta disparidad reforzó la percepción de que, en los mapas institucionales, hay territorios que prácticamente no existen. La frase repetida en varias entrevistas —“aquí no llega nadie”— resume el sentimiento de abandono que acompaña a estas comunidades desde mucho antes del incendio, pero que el desastre de 2024 intensificó.

La resiliencia comunitaria, sin embargo, también se hizo evidente. Pese a las limitaciones y la soledad, las comunidades lograron organizarse, proteger sus casas y salvar vidas. Mujeres, hombres, ancianos y jóvenes asumieron roles inesperados y demostraron una capacidad de respuesta admirable frente a la adversidad. Este espíritu de resistencia, aunque forjado en la urgencia, abre la puerta a procesos de fortalecimiento comunitario que pueden ser la base para futuras estrategias de prevención y manejo de incendios.

El cierre de este capítulo no es el final del relato, sino la preparación para escuchar las voces que lo habitan. Hasta aquí, hemos descrito la magnitud del desastre desde una perspectiva contextual y analítica: las cifras, las causas, las respuestas y las secuelas. Pero entender verdaderamente lo que significó el fuego para el Alto y Bajo Paraguá requiere escuchar a quienes lo vivieron en primera persona. Sus testimonios no solo aportan humanidad a los datos; revelan emociones, miedos y esperanzas que ningún informe técnico puede reflejar por sí solo.



Capítulo 2

Capítulo 2

TESTIMONIOS DE FUEGO



El eco del fuego en las voces del territorio

El fuego no solo dejó árboles carbonizados y hectáreas arrasadas. Dejó huellas en la memoria de las personas, en sus cuerpos y en sus emociones. Comprender lo que vivieron las comunidades del Alto y Bajo Paraguará durante el desastre de 2024 requiere escuchar sus voces directamente. En esta investigación, los testimonios no se abordan como anécdotas aisladas, sino como piezas fundamentales para reconstruir la historia y entender el impacto humano de los incendios. El trabajo de campo realizado por el equipo de Cecasem se centró en registrar estos relatos de manera respetuosa y ética. Se llevaron a cabo entrevistas individuales y grupos focales en comunidades clave, incluyendo 15

de Agosto, Sañonama, San Rafaelito de Suponema y San Antonio del Cerro en el Alto Paraguá, así como Picaflor, Porvenir, Piso Firme, Cachuela y Bella Vista en el Bajo Paraguá. Estos espacios permitieron no solo recopilar información, sino también crear un ambiente seguro para que los comunarios compartieran experiencias dolorosas que, en muchos casos, aún están muy presentes.

Escuchar a quienes vivieron el fuego nos enfrenta a un tipo de conocimiento distinto al que ofrecen los satélites o las estadísticas. Es un conocimiento encarnado, cargado de emociones, que combina recuerdos concretos con sensaciones difusas: el sonido de las ramas ardiendo, el olor a ceniza en el aire, la tos persistente de los niños. Estos relatos son esenciales porque revelan dimensiones del desastre que no aparecen en los informes oficiales: el miedo a perderlo todo, la frustración por la ausencia del Estado, la solidaridad entre vecinos y la capacidad de resistencia que surge en los momentos más críticos.

Las voces recogidas en esta investigación también reflejan una diversidad interna que muchas veces pasa desapercibida. No todas las comunidades vivieron el fuego de la misma manera; incluso dentro de una misma comunidad, las experiencias de hombres y mujeres, de adultos y niños, difieren en matices y prioridades. Las mujeres hablan con frecuencia del impacto en la salud y en el cuidado de los niños; los hombres, del trabajo extenuante de abrir cortafuegos o proteger el ganado; los ancianos, de la pérdida del monte como parte de su memoria cultural. Esta pluralidad de perspectivas enriquece el análisis y permite comprender la complejidad del desastre en toda su dimensión.

Este capítulo se organiza en torno a los testimonios, pero no se limita a reproducirlos de manera literal. A través de fragmentos seleccionados y relatos integrados, buscamos mostrar patrones y temas comunes que emergieron en las distintas comunidades: el momento en que percibieron el peligro, las decisiones que tomaron, las pérdidas que sufrieron y los aprendizajes que extrajeron. Al mismo tiempo, respetamos la singularidad de cada voz, evitando homogenizar una experiencia que, aunque compartida, tiene matices propios en cada territorio.

En términos metodológicos, los testimonios se presentan acompañados de contexto: quién habla, de qué comunidad proviene, en qué circunstancias se dio la entrevista. Esto permite al lector situar las palabras en su entorno y entender mejor las condiciones en que se produjo la experiencia. Además, los fragmentos se complementan con análisis interpretativos que conectan las vivencias individuales con procesos más amplios, como las desigualdades estructurales o las fallas en la respuesta institucional.

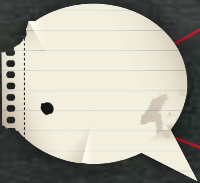
El objetivo de este capítulo no es solo documentar el dolor, sino también rescatar la resiliencia y las lecciones que las comunidades pueden enseñar para el futuro. Los relatos no son únicamente crónicas del sufrimiento; también son testimonios de fortaleza, de organización colectiva y de un profundo vínculo con la tierra que, a pesar de las llamas, sigue siendo su hogar.



“El fuego se apagó, pero el humo sigue en nuestros pulmones y en nuestra memoria.”



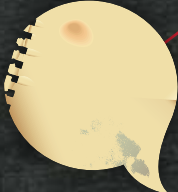
“Aprendimos a ser bomberos sin mangueras: con ramas, agua en baldes y la fuerza de todos juntos.”



“El bosque que se quemó no solo era monte: era agua, era comida, era nuestra vida entera.”



“Cuando el fuego llegó, nadie vino; cuando se apagó, nadie volvió.”



“Nos quitaron el verde, pero no pudieron apagar la esperanza que tenemos de volver a ver brotar la vida.”

Recuerdos del humo y el momento del incendio

El momento en que el fuego llegó a las comunidades del Alto y Bajo Paraguará no puede describirse solo con cifras o mapas. Para comprender su impacto, es necesario reconstruir la experiencia a través de quienes lo vivieron. Los testimonios recogidos muestran que el incendio no fue un evento repentino, sino una amenaza que se instaló poco a poco, hasta volverse imposible de ignorar. Cada voz ofrece una mirada distinta: algunos recuerdan el sonido del monte ardiendo, otros la angustia por los hijos pequeños, otros la impotencia de no tener más que ramas y baldes para enfrentar las llamas.

Las entrevistas realizadas en el Bajo Paraguará, especialmente en las comunidades de Picaflor y Piso Firme, coinciden en un punto: **el humo llegó mucho antes que el fuego**. Durante semanas, el aire se volvió irrespirable. Los niños tosían sin cesar, los ancianos sufrían dolores de pecho, y el cielo permanecía cubierto por una bruma espesa que no dejaba ver el sol. “Sabíamos que el fuego estaba cerca por el olor, pero no podíamos verlo todavía. Era como un enemigo invisible que se metía en las casas”, relató una mujer de Porvenir durante uno de los grupos focales.

En el Alto Paraguará, aunque las llamas no llegaron a devastar directamente las viviendas, el miedo era igual de intenso. Comunidades como 15 de Agosto y San Rafaelito de Suponema se organizaron para vigilar las colinas cercanas y abrir cortafuegos improvisados. Un cacique comunitario describió así aquellos días: “Pasábamos la noche escuchando el monte crujir. Si el viento cambiaba de dirección, sabíamos que al amanecer podíamos perderlo todo”. La incertidumbre constante desgastaba tanto como el trabajo físico: nadie dormía tranquilo, nadie sabía cuánto duraría la amenaza.

Un elemento que aparece repetidamente en los testimonios es la **ausencia de información clara**. En muchas comunidades no había señal de celular ni acceso a radio. El avance del fuego se conocía solo a través de rumores o mensajeros que viajaban a pie o en moto entre comunidades. Esta falta de comunicación generó decisiones difíciles: algunas familias evacuaron sin saber si el fuego llegaría; otras permanecieron por miedo a perder sus cultivos o animales. En ambos casos, el resultado fue una sensación de vulnerabilidad y desprotección.

La participación de mujeres y niños en las tareas de contención también marcó la memoria de las comunidades. Aunque tradicionalmente los hombres lideran el trabajo de campo y la defensa territorial, en esta crisis todos se involucraron. Niños cargaban agua en botellas recicladas; mujeres vigilaban el avance del fuego y organizaban turnos para alimentar a quienes combatían el

fuego. Una madre en Piso Firme lo resumió así: “No tuvimos tiempo de tener miedo. Todos hicimos lo que pudimos. Sabíamos que si esperábamos a que viniera ayuda, íbamos a perderlo todo”.

Otro aspecto relevante en estos relatos es la **mezcla de miedo y orgullo** que surgió después del incendio. Miedo por la magnitud del desastre y por las secuelas que aún persisten en la salud y la economía de las familias. Orgullo por haber enfrentado el fuego sin abandonar sus comunidades ni rendirse ante las dificultades. Este orgullo se refleja en frases como: “No vino nadie a salvarnos, pero tampoco nos rendimos”.

Los testimonios recogidos en esta sección son fragmentos que, cuando se leen juntos, forman un mosaico de emociones: ansiedad, coraje, tristeza, esperanza. Más allá de las diferencias entre comunidades y realidades, el fuego unió sus experiencias en un mismo relato colectivo: el de un pueblo que resiste en silencio y que busca ser escuchado.

Los incendios de 2024 no solo destruyeron hectáreas de bosque; también arrasaron con formas de vida que durante generaciones habían sostenido a las comunidades del Alto y Bajo Paraguará. Los testimonios recogidos en el trabajo de campo revelan un dolor compartido: el de perder animales, cultivos, fuentes de agua y en algunos casos, recuerdos que formaban parte de la identidad colectiva del territorio.

En el Bajo Paraguará, las comunidades de Picaflor y Piso Firme fueron las más golpeadas. Los relatos de sus habitantes describen el momento en que el fuego cruzó los cortafuegos improvisados y consumió los pastizales donde pastaba el ganado. “Cuando fuimos a buscar nuestras vacas, solo encontramos los cuernos en el suelo”, contó un comunario de Piso Firme, mientras mostraba la cicatriz que le dejó cargar animales heridos para salvarlos del humo. La pérdida del ganado no significó solo un golpe económico; para muchas familias, esos animales eran su única reserva de alimento y ahorro para emergencias.

La agricultura también sufrió un impacto devastador. Las chacras de yuca, maíz y plátano —base de la alimentación familiar— quedaron cubiertas de ceniza. En algunas zonas, la tierra tardó meses en recuperar su capacidad de producción.

Las mujeres, encargadas de los huertos familiares, describen la frustración de ver cómo las pocas verduras que habían sembrado para complementar la dieta de sus hijos desaparecían en cuestión de horas. “El fuego no eligió qué quemar”, dijo una comunaria de Picaflor. “Se llevó lo que teníamos para comer hoy y también lo que íbamos a comer mañana”.

El agua, que siempre ha sido un recurso escaso en estas regiones, se volvió aún más difícil de conseguir. Los atajados —pequeños reservorios que almacenan agua de lluvia— se llenaron de cenizas y hojas quemadas. En los días posteriores al incendio, los niños sufrían diarreas y fiebre por beber agua

contaminada. “No había otra opción”, explicó una madre en Piso Firme. “Sabíamos que estaba sucia, pero si no la tomábamos, nos moríamos de sed”. Sin embargo, entre tanta pérdida, las comunidades también rescataron algo invaluable: su capacidad de organización y solidaridad. En el Alto Paraguá, varias familias lograron salvar sus casas y parte de sus animales gracias a las rondas de vigilancia nocturna y al trabajo colectivo para mantener los contra fuegos. En San Antonio del Cerro, los comunarios improvisaron un sistema para trasladar agua en bidones de motocicleta y distribuirla entre las viviendas más cercanas al fuego. Estas acciones no solo evitaron una tragedia mayor; reforzaron los lazos comunitarios y demostraron que, incluso en el abandono, las comunidades tienen recursos internos para resistir.

Los testimonios también destacan los aprendizajes que surgieron de la crisis. Muchos comunarios reconocen que antes del incendio no existía una cultura de prevención organizada. Las quemados agrícolas se realizaban sin coordinación y sin medidas para controlarlas. Después del fuego, varias comunidades empezaron a discutir la necesidad de crear brigadas locales, capacitar a los jóvenes y establecer normas internas para regular el uso del fuego. “Si el fuego vuelve —dijo un líder en Porvenir—, esta vez no nos va a encontrar igual de desprevenidos”.

El contraste entre lo que se perdió y lo que se salvó refleja la doble cara del incendio: una tragedia que dejó cicatrices profundas, pero que también sembró semillas de organización y de conciencia colectiva. Estas semillas serán fundamentales para cualquier estrategia futura de prevención y respuesta, y constituyen uno de los principales legados que las comunidades quieren dejar a las nuevas generaciones.

Uno de los rasgos más poderosos que emergen de los testimonios recogidos en el Alto y Bajo Paraguá es la capacidad de las comunidades para organizarse frente al desastre. En un contexto donde la ayuda externa tardó en llegar —o directamente nunca llegó a las zonas más remotas—, fueron los propios comunarios quienes asumieron el rol de bomberos improvisados, poniendo en riesgo sus vidas para salvar sus hogares, animales y cultivos.

En el Bajo Paraguá, comunidades como Piso Firme y Porvenir describen cómo, ante la inminencia del fuego, las familias dejaron de lado sus rutinas para unirse en una sola tarea: detener las llamas. “No teníamos mangueras ni bombas, solo ramas verdes y baldes de agua”, recuerda un joven de Porvenir. “Nos turnábamos día y noche; cuando uno caía de cansancio, otro se levantaba”. Este esfuerzo colectivo no solo fue físico; también implicó coordinación, liderazgo y una sorprendente capacidad de adaptación a un escenario cambiante y hostil.

En el Alto Paraguá, la respuesta comunitaria tuvo un matiz diferente, pero igualmente efectivo. Allí, aunque el fuego no penetró en todas las viviendas, la amenaza constante obligó a establecer guardias permanentes en las laderas y puntos estratégicos. Las asambleas se multiplicaron: en ellas se definían rutas

de vigilancia, se organizaban los turnos y se decidía la distribución de los escasos recursos disponibles. “Aprendimos a escucharnos más”, dice un cacique de San Rafaelito de Suponema. “Si uno decía ‘el viento cambió’, nadie discutía: todos sabíamos qué hacer”.

Un elemento destacable en estos relatos es el **protagonismo de las mujeres** durante la emergencia. Aunque en el imaginario común la tarea de combatir el fuego se asocia a los hombres, en estas comunidades las mujeres jugaron un papel crucial no solo en la logística —preparando alimentos, cuidando a los niños, organizando víveres—, sino también en el frente mismo. Varias mujeres participaron activamente en la apertura de cortafuegos y en el traslado de agua. “Al principio nos decían que era peligroso y que no fuéramos”, cuenta una comunaria de Piso Firme, “pero ¿quién iba a dar de beber a los hombres que estaban allá si no éramos nosotras?”.

Los niños y jóvenes también asumieron roles inesperados. Algunos actuaron como mensajeros, llevando noticias entre comunidades vecinas a pie o en bicicleta. Otros ayudaron a cargar agua o a espantar animales para evitar que se acercaran a las zonas más peligrosas. Estos testimonios revelan que la respuesta al incendio no fue solo un esfuerzo individual o de líderes formales, sino una acción profundamente comunitaria que involucró a todos los miembros, sin importar su edad o género.

La resistencia se expresó también en los símbolos y rituales propios de las comunidades. En algunos grupos focales, las mujeres relataron cómo cantaban mientras abrían cortafuegos para darse ánimo; los ancianos, por su parte, recordaron oraciones tradicionales para pedir protección a los espíritus del monte, en otros casos a Dios. Estos elementos culturales, lejos de ser anecdóticos, muestran cómo la identidad colectiva se refuerza en momentos de crisis y cómo la espiritualidad se convierte en una herramienta de resistencia.

La organización que emergió durante el incendio ha dejado un legado que trasciende la emergencia. Varias comunidades han comenzado a formalizar lo aprendido: se han creado pequeños comités de respuesta, se ha propuesto capacitar a jóvenes como brigadistas locales y se discute la necesidad de establecer protocolos internos para futuras emergencias.

Este aprendizaje colectivo constituye uno de los mayores activos de las comunidades para el futuro. Aunque las pérdidas materiales y emocionales son incalculables, la experiencia del incendio ha fortalecido la cohesión interna y ha generado un sentido renovado de pertenencia y propósito. En medio de la tragedia, las comunidades descubrieron en sí mismas una fuerza que tal vez no sabían que tenían.

El fuego de 2024 dejó cicatrices visibles en el paisaje: árboles calcinados, chacos cubiertos de ceniza, casas con paredes ennegrecidas. Pero más

profundas aún son las huellas invisibles que persisten en las personas y que no desaparecieron con la primera lluvia que apagó las llamas. Los testimonios recopilados en el Alto y Bajo Paraguá muestran que la verdadera magnitud del desastre se mide en esas consecuencias silenciosas que acompañan a las comunidades mucho después del incendio.

Una de las secuelas más recurrentes es el **deterioro de la salud respiratoria**. En cada grupo focal surgieron relatos de niños que aún hoy tosen al correr o de ancianos que no pueden dormir por el dolor en el pecho. El humo prolongado, inhalado durante semanas, provocó brotes de bronquitis, asma y alergias que los pequeños puestos de salud no estaban en condiciones de tratar. “Mi hijo se cansaba solo de caminar a la escuela”, cuenta una madre de 15 de Agosto. “Antes jugaba a la pelota todo el día; ahora se sienta y me dice que le falta aire”.

El **impacto psicológico** es otra herida que aparece en los testimonios. Muchas familias describen un estado de alerta permanente: el más mínimo olor a humo o el sonido del viento levantando polvo genera ansiedad. Niños que lloran cuando ven quemar basura, adultos que duermen mal durante la temporada seca, ancianos que sueñan con el fuego acercándose a sus casas. “Aunque ya no hay llamas, el fuego sigue en la cabeza”, resume un comunario de Porvenir. Estas secuelas emocionales suelen pasar desapercibidas en los informes oficiales, pero son parte fundamental del proceso de recuperación.

La **pérdida de recursos naturales** también continúa afectando la vida cotidiana. La caza escasea porque los animales huyeron o murieron; los ríos siguen contaminados con ceniza; las plantas medicinales del monte, que eran la primera respuesta ante cualquier enfermedad, tardarán años en regenerarse.

Esto no solo compromete la alimentación y la salud de las comunidades, sino también su relación cultural con el territorio. “Ya no podemos caminar al monte como antes”, dicen en San Rafaelito de Suponema. “Ahora todo está abierto, no hay sombra, y los animales que veíamos se han ido”.

Las **dinámicas comunitarias** cambiaron después del incendio. En algunos lugares, la crisis fortaleció la solidaridad y la organización; en otros, las tensiones aumentaron por la distribución desigual de la ayuda y por el agotamiento emocional. Hay familias que se plantearon migrar hacia centros urbanos, mientras que otras redoblaron su compromiso con el territorio para no dejar que el fuego las desplace. Esta mezcla de fragmentación y cohesión muestra que el incendio no solo quemó bosque: reconfiguró la vida social de las comunidades.

Otra secuela importante es la **pérdida de confianza en las instituciones**. Los comunarios relatan cómo la ayuda llegó tarde o en cantidades insuficientes, y cómo muchas promesas de apoyo para la reconstrucción quedaron en el aire. Este sentimiento de abandono refuerza una narrativa que se repite en distintas entrevistas: “Cuando el fuego llegó, nadie vino; cuando se apagó, nadie volvió”. La desconfianza hacia el Estado y hacia las ONG que operan en la zona plantea

un desafío para cualquier iniciativa futura: reconstruir no solo el bosque, sino también la credibilidad.

Las secuelas invisibles del incendio de 2024 muestran que la recuperación no puede medirse únicamente en hectáreas reforestadas o casas reconstruidas. Requiere atender el bienestar emocional, la salud a largo plazo, la seguridad alimentaria y la reconstrucción del tejido comunitario. Los testimonios de las comunidades no solo denuncian lo que se perdió, sino que señalan lo que aún falta por hacer para que el territorio vuelva a ser habitable y seguro.

El incendio de 2024 no solo dejó pérdidas y cicatrices; también generó reflexiones profundas en las comunidades del Alto y Bajo Paraguará. Los testimonios recogidos muestran que, en medio de la tragedia, surgieron aprendizajes valiosos sobre la organización, la prevención y la relación con el territorio. Estos aprendizajes, sin embargo, conviven con una serie de demandas urgentes hacia las instituciones estatales y organizaciones que trabajan en la región.

Uno de los aprendizajes más repetidos en las entrevistas es la **importancia de la prevención comunitaria**. Antes del incendio, el manejo del fuego se daba de manera individual y sin coordinación. Cada familia realizaba sus chequeos en diferentes momentos, sin cortafuegos ni protocolos comunes. Tras la experiencia de 2024, varias comunidades comenzaron a organizar reuniones para establecer calendarios compartidos y normas internas sobre el uso del fuego. “Si nos hubiéramos organizado antes, no habría sido tan grave”, reflexiona un comunario de San Antonio del Cerro. “Ahora sabemos que el fuego se apaga en equipo, no solos”.

Otro aprendizaje clave es la **revalorización del conocimiento tradicional**. En muchas comunidades, los remedios naturales y las técnicas ancestrales para leer el comportamiento del viento o identificar rutas de escape resultaron vitales durante la crisis. Estos saberes, transmitidos por los ancianos, adquirieron un nuevo reconocimiento en la memoria colectiva y hoy son vistos como un recurso estratégico para la gestión de futuras emergencias. “Mi abuela decía que cuando el cielo se pone amarillo, el fuego está cerca”, cuenta una joven de Porvenir. “Ese día, todos nos preparamos”.

A pesar de estos avances internos, los testimonios coinciden en que las comunidades no pueden enfrentar solas los incendios que año tras año amenazan la Chiquitanía. Sus demandas son claras y urgentes: **mayor presencia institucional, infraestructura adecuada, formación de brigadas locales, acceso a salud y agua potable**. Piden que las promesas de reforestación y apoyo económico se concreten en acciones visibles y sostenidas, y que las políticas públicas reconozcan su realidad en lugar de tratarlos como periferias invisibles.

Estas demandas no son solo reclamos; son también propuestas concretas. Comunarios y líderes sugieren programas de capacitación para jóvenes, creación de sistemas de alerta temprana, y establecimiento de fondos de emergencia que permitan actuar antes de que el fuego se des controle. “No queremos que nos regalen nada”, afirma una cacique de Piso Firme. “Queremos las herramientas para cuidarnos nosotros mismos”.

El capítulo concluye mostrando que los testimonios no son únicamente relatos de dolor: son también llamados a la acción. Las comunidades del Alto y Bajo Paraguá no buscan compasión, sino reconocimiento y colaboración para proteger un territorio que consideran su hogar y su herencia. Escucharlas no es solo un acto de justicia histórica; es el primer paso para construir estrategias de prevención y respuesta verdaderamente efectivas.



Recolección de datos, (Piso Firme,
Porvenir, Picaflor - San Ignacio de Velasco)

Capítulo 3

Capítulo 3

HUELLAS VIVAS, EL IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL INCENDIO



Situación económica, política y social post quema

Los incendios de 2024 dejaron marcas que no se borran con las primeras lluvias ni con la regeneración paulatina del monte. Las comunidades del Alto y Bajo Paraguá, que durante meses resistieron el fuego y el humo, cargan hoy cicatrices que no siempre son visibles en el paisaje. Se encuentran en el aire que todavía irrita los pulmones, en los silencios que siguen cada vez que el viento cambia de dirección, en los niños que se detienen a mirar el cielo con miedo cuando huelen a quemado. Las huellas sociales del desastre no se limitan a los daños inmediatos; son transformaciones profundas en la vida cotidiana, en los vínculos comunitarios y en la relación de las personas con su territorio.

El impacto en la salud es uno de los relatos más constantes entre los comunarios. Semanas enteras respirando humo dejaron consecuencias que todavía se sienten. Los niños son quienes más lo resienten: tos que no desaparece, cansancio al correr, dolores en el pecho que antes no tenían. En los grupos focales, las madres repiten un mismo gesto al hablar: se llevan la mano al pecho o al rostro, como si revivieran el malestar. “El fuego pasó, pero el humo se quedó”, dijo una mujer de Piso Firme. A falta de médicos y medicinas, muchas familias recurrieron al conocimiento ancestral: infusiones de plantas, baños de vapor, remedios transmitidos por los abuelos que, en medio de la emergencia, se volvieron el único recurso disponible. Este uso del saber tradicional no nace del romanticismo sino de la necesidad: en la mayor parte del Bajo Paraguá no existen postas de salud y llegar a San Ignacio de Velasco puede significar horas o días de viaje por caminos imposibles.

La educación también se vio trastocada. Durante semanas, las escuelas cerraron por el humo y el peligro de desplazarse. En el Bajo Paraguá, donde no hay señal de celular ni internet, las clases virtuales nunca fueron una opción. Muchos niños perdieron meses de aprendizaje y al regresar, se encontraron con maestros que debían improvisar entre la falta de materiales y el cansancio emocional de sus estudiantes. En algunos casos, la emergencia transformó las aulas en refugios comunitarios: allí se guardaban víveres, se organizaban reuniones o se cuidaba a los niños mientras los adultos combatían el fuego. La escuela, más que un espacio educativo, se convirtió en un centro de resistencia.

En medio del caos, los roles dentro de las comunidades cambiaron. Las mujeres, que tradicionalmente se ocupaban de los niños y los huertos, pasaron a la primera línea: abrieron contra fuegos, transportaron agua, organizaron turnos para vigilar las laderas y tomaron decisiones en las asambleas comunitarias. Esta participación no solo salvó vidas y casas; transformó la manera en que se percibe el liderazgo local. En comunidades como Porvenir y Piso Firme, varias mujeres emergieron como voces clave para la organización, rompiendo barreras que antes limitaban su participación. “Antes nos escuchaban poco”, contó una comunaria. “Ahora nos piden opinión porque saben que estuvimos ahí cuando el fuego llegó”. Este cambio no estuvo exento de tensiones: muchas mujeres cargaron con el doble trabajo de sostener la casa y enfrentar la emergencia, una carga que aún se siente en sus cuerpos y en su ánimo.

La cohesión comunitaria se fortaleció en muchos sentidos, pero también se fracturó en otros. Durante la emergencia, la solidaridad fue el motor principal: familias compartiendo agua, vigiliando nocturnas colectivas, vecinos cuidando a los hijos de quienes estaban en el monte. Sin embargo, una vez que pasó la crisis más aguda, afloraron tensiones por la distribución desigual de la ayuda externa. Algunas comunidades recibieron apoyo de ONGs o del gobierno; otras, especialmente en el Bajo Paraguá, se sintieron invisibles. Este desequilibrio dejó resentimientos que, si no se atienden, pueden complicar los procesos de

reconstrucción a largo plazo. El incendio no solo alteró el bosque; también reorganizó las relaciones entre quienes lo habitan.

Las huellas sociales del fuego revelan una paradoja: en medio de la pérdida, surgieron aprendizajes y nuevas formas de organización. Las comunidades que resistieron el incendio aprendieron a trabajar juntas, a crear turnos, a escuchar a sus líderes —y por primera vez en muchos casos a sus lideresas— y a valorar el conocimiento de los mayores. Esta experiencia ha sembrado la idea de prepararse mejor para el futuro, de crear brigadas locales y de establecer acuerdos internos sobre el uso del fuego en la agricultura. “No queremos volver a pasar lo mismo”, repiten en distintas comunidades. El desafío ahora es que ese aprendizaje no se pierda y que las instituciones sepan escucharlo y fortalecerlo.

La economía del Alto y Bajo Paraguará ya era frágil antes del incendio. Las comunidades vivían principalmente de la agricultura de subsistencia, la pesca, la ganadería a pequeña escala y la recolección de frutos del bosque como el asaí. No había excedentes significativos ni ahorros que sirvieran de colchón para una crisis. Cuando el fuego llegó, esta precariedad se convirtió en vulnerabilidad extrema: las pocas fuentes de ingreso y alimentos desaparecieron en cuestión de días, dejando a las familias sin seguridad alimentaria ni alternativas de supervivencia inmediatas.

La ganadería, aunque limitada, también sufrió estragos. En el Bajo Paraguará, donde algunas familias mantenían unas pocas cabezas de ganado como reserva de valor y fuente de leche, el fuego destruyó los pastizales y mató a varios animales. En Picaflor y Porvenir, comunarios relatan haber encontrado restos de vacas calcinadas en medio del monte. Para quienes perdieron su ganado, la tragedia no se mide solo en términos económicos, sino también en la pérdida de una red de seguridad que garantizaba leche para los niños y posibilidad de intercambio con otras comunidades.

El asaí, recurso clave en varias comunidades del Bajo Paraguará, también se vio afectado. Aunque las palmeras resistieron mejor que otros cultivos, la interrupción de los caminos y la contaminación de los ríos dificultaron su recolección y transporte hacia los mercados. Los productores comunitarios, que en años anteriores habían logrado vender su asaí a intermediarios en San Ignacio o Santa Cruz, vieron interrumpida esa cadena de comercio. La pérdida no fue solo inmediata; significó también la ruptura de relaciones comerciales que tardarán en restablecerse.

La economía familiar, ya debilitada, enfrentó además el desafío de la migración temporal. Algunos hombres, al perder sus cultivos y animales, se vieron obligados a viajar a San Ignacio o incluso a Santa Cruz en busca de trabajo eventual. Esta migración, aunque necesaria para generar ingresos, dejó a las mujeres con la carga completa de sostener los hogares y atender las secuelas del incendio. En el Alto Paraguará, varios testimonios coinciden en describir cómo las mujeres se convirtieron en el pilar económico y social durante los meses posteriores, combinando la recolección de frutos con el cuidado de los niños y ancianos.

El incendio no solo generó pérdidas inmediatas; profundizó una desigualdad estructural. Las comunidades más cercanas a la capital municipal recibieron ayuda más rápida y pudieron retomar actividades agrícolas en pocos meses.

Las más remotas, especialmente en el Bajo Paraguá, quedaron rezagadas: sin caminos transitables, sin acceso a semillas ni herramientas, y sin presencia constante del Estado. Este desequilibrio refuerza una dinámica histórica en la que la periferia queda olvidada y debe depender de su propia capacidad de resistencia.

Sin embargo, en medio del desastre surgieron también iniciativas comunitarias para reconstruir la economía local. En Porvenir y Piso Firme, grupos de mujeres organizaron mingas para limpiar chacos, compartir semillas y resembrar huertos colectivos. En Porvenir, los jóvenes formaron brigadas para reparar caminos y facilitar el transporte de asaí hacia los mercados. Estas acciones, aunque pequeñas, muestran un potencial para la resiliencia que podría fortalecerse con apoyo técnico y recursos adecuados.

Las huellas económicas de los incendios de 2024 son, en última instancia, un reflejo de las desigualdades históricas que enfrentan las comunidades del Alto y Bajo Paraguá. El fuego no creó la pobreza, pero la profundizó y la visibilizó ante quienes hasta entonces ignoraban la fragilidad de esta región. Reconstruir la economía no será solo cuestión de resembrar cultivos o reponer ganado; implicará también repensar modelos de producción que equilibren la seguridad alimentaria con la conservación del bosque y la justicia social.

Los incendios no solo dejaron al descubierto la vulnerabilidad ecológica y económica del Alto y Bajo Paraguá; también reveló con crudeza las debilidades del sistema político e institucional encargado de prevenir y responder a emergencias en Bolivia. Las comunidades afectadas no solo sufrieron las llamas: sufrieron la sensación de haber sido abandonadas por un Estado que llegó tarde, actuó de manera fragmentada y en muchos casos se limitó a promesas que nunca se concretaron.

La respuesta estatal, cuando finalmente llegó, fue desigual. En el Alto Paraguá, por su relativa cercanía a la capital municipal y mejores condiciones de acceso, las brigadas departamentales y militares lograron establecer algunos puntos de control y entregar medicamentos básicos como paracetamol y colirios. En el Bajo Paraguá, en cambio, el aislamiento geográfico convirtió la asistencia en una carrera contra el tiempo que pocas veces se ganó. Comunidades como Porvenir y Piso Firme relatan haber recibido ayuda solo semanas después de que las llamas se extinguieran, y en cantidades insuficientes para atender la magnitud del daño.

El incendio también puso en evidencia la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Mientras el gobierno nacional responsabilizaba a las gobernaciones y estas a los municipios, las comunidades quedaban atrapadas en una cadena de

acusaciones cruzadas que nunca se traducían en acciones concretas. Las reuniones de emergencia se multiplicaron en las ciudades, pero pocas de esas decisiones llegaron a las zonas más remotas. Esta desconexión entre discurso y realidad alimentó la desconfianza de las comunidades hacia las autoridades, una desconfianza que ya venía gestándose por años de promesas incumplidas en temas de infraestructura, salud y desarrollo.

Otro punto clave es la ausencia de políticas preventivas efectivas. El incendio de 2019 ya había expuesto la urgencia de crear brigadas comunitarias, establecer sistemas de alerta temprana y regular las quemas agrícolas. Sin embargo, en 2024 las condiciones eran prácticamente las mismas. La normativa vigente —incluyendo la Ley 741, que autoriza el desmonte controlado hasta 20 hectáreas por predio— continúa generando tensiones: para las comunidades, el fuego es una herramienta ancestral de cultivo; para el Estado, una práctica que debe limitarse en nombre de la conservación, pero sin ofrecer alternativas reales para la producción de alimentos.

Este vacío de políticas preventivas se agrava con la falta de inversión sostenida en la región. San Ignacio de Velasco, pese a su importancia estratégica y ecológica, sigue siendo tratado como periferia en la agenda nacional. La ausencia de infraestructura vial adecuada, centros de salud equipados y sistemas de comunicación eficientes no solo dificulta la vida cotidiana, sino que convierte cualquier emergencia en una crisis de dimensiones mayores. En el Bajo Paraguará, por ejemplo, un viaje hasta la capital municipal puede tomar más de doce horas en condiciones normales; durante el incendio, con caminos cortados y humo denso, el aislamiento se volvió casi absoluto.

En medio de esta debilidad institucional, el liderazgo comunitario cobró protagonismo. Los capitanes y caciques se convirtieron en los principales gestores de la respuesta local: organizaron guardias, coordinaron la distribución de agua y alimentos, y actuaron como interlocutores frente a las pocas brigadas que llegaron. En varias comunidades, especialmente en el Bajo Paraguará, este liderazgo se combinó con el protagonismo de mujeres que emergieron como figuras centrales en la resistencia. Este fenómeno, más allá de la emergencia, podría marcar el inicio de un cambio en las dinámicas políticas locales: un liderazgo más inclusivo, basado en la experiencia y no solo en la tradición.

Las huellas políticas del incendio de 2024, por tanto, van más allá de la respuesta inmediata. Revelan un sistema de gestión de riesgos fragmentado, una desconexión histórica entre el Estado y sus periferias y una oportunidad latente para fortalecer el liderazgo comunitario. El desafío ahora es transformar la indignación en incidencia: convertir los testimonios de abandono en propuestas de política pública que reconozcan la realidad del Alto y Bajo Paraguará y que construyan, junto con las comunidades, un modelo de prevención y respuesta más justo y efectivo.

Alto y Bajo Paraguá, dos realidades, una misma herida

El incendio de 2024 atravesó por igual a todo el municipio de San Ignacio de Velasco, pero sus efectos no fueron homogéneos. El análisis de los testimonios y de la información recogida en campo muestra que las comunidades del **Alto Paraguá** y del **Bajo Paraguá**, aunque unidas por el mismo desastre, vivieron experiencias distintas determinadas por su geografía, acceso a servicios, vínculos institucionales y formas de organización interna.

En el **Alto Paraguá**, la cercanía relativa a la capital municipal permitió una respuesta un poco más rápida y un contacto mayor con las brigadas estatales y de ONGs. Varias comunidades lograron establecer contra fuegos más organizados y recibieron medicinas y víveres en las primeras semanas del incendio.

Esto no significa que la ayuda haya sido suficiente, pero sí marcó una diferencia en la capacidad de recuperación posterior: en el **Alto Paraguá**, las chacras se resembraron con mayor rapidez y los caminos, aunque dañados, se mantuvieron transitables para el intercambio de productos y apoyo externo.

En contraste, el **Bajo Paraguá** vivió el incendio en condiciones de aislamiento casi total. Las comunidades ribereñas, dispersas y con acceso únicamente fluvial, quedaron incomunicadas durante semanas. La ayuda llegó tarde y en cantidades insuficientes, lo que profundizó las pérdidas en cultivos, ganado y fuentes de agua. El humo afectó la salud de niños y ancianos sin que hubiera forma de trasladarlos a centros médicos. En los testimonios, la sensación de abandono es más marcada: "Éramos como un punto perdido en el mapa", relata una comunaria de Porvenir. "Sabíamos que había fuego en todos lados, pero nadie sabía que estábamos aquí".



Comparación: Alto Paragúá vs Bajo Paragúá

ALTO PARAGÚA

- Mayor cercanía a la capital municipal (San Ignacio de Velasco)
- Presencia limitada de caminos transitables todo el año
- Recibió ayuda estatal y de ONGs en las primeras semanas
- Re-siembra de chacras más rápida; menores pérdidas de ganado
- Mayor acceso a postas de salud, aunque con recursos limitados
- Organización comunitaria apoyada por líderes tradicionales y municipales

BAJO PARAGÚA

- Ubicación remota; acceso principalmente por vía fluvial
- Incomunicación total durante las primeras semanas del incendio
- Ayuda tardía y en cantidades mínimas; comunidades olvidadas en el mapa institucional
- Pérdida casi total de cultivos, ganado y fuentes de agua
- Ausencia de infraestructura sanitaria; dependencia de remedios tradicionales
- Liderazgo comunitario emergente, especialmente de mujeres, ante ausencia estatal

Estas diferencias no solo se explican por la geografía. También reflejan desigualdades históricas en el acceso a infraestructura y en la atención institucional. El Alto Paragúá, aunque igualmente vulnerable, cuenta con algunos caminos y postas de salud que facilitan la llegada de apoyo; el Bajo Paragúá, en cambio, sigue siendo tratado como una periferia dentro de la periferia: sin carreteras, sin señal de comunicación, sin presencia constante de autoridades. El incendio no creó esta brecha, pero la hizo más evidente y dolorosa.

Sin embargo, en ambos territorios se observa un patrón común de resiliencia. Tanto en el Alto como en el Bajo Paragúá, las comunidades se organizaron sin esperar al Estado: formaron guardias, compartieron agua, abrieron contra fuegos con machetes y palas improvisadas. En ambos casos, las mujeres asumieron un protagonismo inesperado, liderando acciones y tomando decisiones clave para la supervivencia colectiva. Este hallazgo es central: el liderazgo femenino, aunque emergió de la urgencia, podría convertirse en una fuerza transformadora para los procesos de reconstrucción y prevención a futuro.

La comparación también revela aprendizajes compartidos. Tras el incendio, tanto en el Alto como en el Bajo Paragúá surgieron discusiones sobre la necesidad de brigadas locales, sistemas de alerta temprana y normas comunitarias para el uso del fuego en la agricultura. Estas conversaciones, aunque incipientes, muestran una oportunidad para fortalecer la autonomía de las comunidades y reducir su dependencia de respuestas externas que, como se evidenció en 2024, llegan tarde o no llegan.

Cuadro comparativo del marco legal boliviano

Ley Norma	Fortalezas	Debilidades
Ley 1333 de Medio Ambiente	Marco integral de protección ambiental; establece planes de uso de suelo y licencias ambientales	Desconocida por comunidades; escasa fiscalización en territorios remotos
Constitución Política del Estado (2009)	Reconoce los derechos de la Madre Tierra y el principio del Vivir Bien	Visión progresivo, pero sin mecanismos claros de aplicación ni presupuestos
Ley 602 de Gestión de Riesgos	Crea el sistema SISRADE para coordinar gestión de riesgos y emergencias	Planes municipales y departamentales inexistentes o débiles; falta de equipamiento
Ley 741 de Uso del Fuego	Permite el uso del fuego en pequeña escala para producción agrícola comunitaria	Autorizaciones de chequeos facilitan incendios en sequías; ausencias de monitoreo
Normativa de Áreas Protegidas (SERNAP)	Define límites y régimen especial para parques como el Noel Kempff	Dependencia de pocos guardaparques y falta de articulación con comunidades

El análisis comparativo, por tanto, no busca subrayar solo las diferencias, sino también las convergencias. Las comunidades del Alto y Bajo Paragwá comparten un sentido profundo de pertenencia al territorio y un compromiso con su preservación. Comparten también el dolor por lo perdido y la determinación de no volver a pasar por lo mismo.

Con esta parte de la investigación se ha recorrido las huellas sociales, económicas y políticas que dejó el incendio de 2024 en San Ignacio de Velasco. Ha mostrado que el fuego no solo quemó hectáreas: alteró vidas, evidenció desigualdades y abrió la puerta a nuevas formas de organización comunitaria. Las comunidades del Alto y Bajo Paragwá, aunque diferentes en su geografía y acceso a servicios, comparten un mismo desafío: reconstruir sin repetir el ciclo de abandono y vulnerabilidad que las ha marcado históricamente.

Esta reconstrucción no será sencilla. Requiere más que reforestación o entrega de viveres; demanda un cambio estructural en la manera en que el Estado y la sociedad miran a la Chiquitanía. Requiere políticas de prevención que partan del conocimiento local, infraestructura que rompa el aislamiento, programas de salud que atiendan las secuelas físicas y emocionales, y un reconocimiento real al liderazgo emergente de las mujeres y jóvenes en estos territorios.

Capítulo 4

Capítulo 4

PROPUESTAS Y ACCIONES DE CAMBIO



Del dolor al propósito

Los incendios de 2024 no solo dejaron cenizas en el bosque y en las chacras; también encendieron una pregunta urgente en las comunidades del Alto y Bajo Paraguá: ¿cómo evitar que esto vuelva a suceder? La memoria de las noches sin dormir, del humo que ahogaba a los niños y del silencio del Estado en los momentos más críticos no se borra con el paso del tiempo. Sin embargo, en medio de la pérdida también brotaron ideas, aprendizajes y una determinación nueva: la de convertir la experiencia en un punto de inflexión hacia un futuro más seguro y digno.

Este capítulo recoge ese espíritu. A partir de los hallazgos y testimonios presentados en los capítulos anteriores, se propone un camino hacia la prevención y la reconstrucción, con acciones concretas que nacen de la voz de las comunidades y se articulan con el conocimiento técnico e institucional

disponible. No se trata de recetas impuestas desde afuera, sino de **propuestas construidas desde el territorio y para el territorio**, que reconocen las realidades del Alto y Bajo Paraguá: su aislamiento, su diversidad cultural, su dependencia del bosque y sobre todo su capacidad de organización frente a la adversidad.

La transición que se plantea es fundamental. Pasamos de describir el impacto del incendio —las huellas en la salud, en la economía y en la confianza política— a imaginar y diseñar el futuro deseado. Es un cambio de mirada: del diagnóstico a la acción, del lamento a la esperanza. Las comunidades no buscan compasión, buscan herramientas para cuidarse a sí mismas; no esperan salvadores externos, sino aliados que respeten su conocimiento y acompañen sus procesos.

Las propuestas que se presentan aquí están organizadas en tres dimensiones principales: **social, económica y política/institucional**. Cada una responde a desafíos específicos identificados en el análisis: la necesidad de fortalecer la salud comunitaria y la educación, diversificar los medios de vida y mejorar la seguridad alimentaria, y garantizar una respuesta estatal más rápida y coordinada que reconozca la realidad de las comunidades remotas. Además, se plantea un **plan de acción integral** que combina medidas inmediatas —para atender las secuelas aún presentes del incendio— con estrategias de mediano y largo plazo orientadas a la resiliencia.

En estas páginas, el lector encontrará propuestas que no solo buscan reparar el daño, sino **transformar las causas que lo hicieron posible**. Porque el fuego de 2024 fue un desastre, pero también una oportunidad para repensar la relación con el bosque, con el territorio y con las políticas públicas que hasta ahora han dejado a estas comunidades en los márgenes. El desafío es grande, pero también lo es la voluntad de las familias que, a pesar de todo, siguen habitando y defendiendo estos territorios.

En las semanas posteriores al incendio, cuando las llamas se apagaron y el humo comenzó a disiparse, las comunidades del Alto y Bajo Paraguá se enfrentaron a una nueva etapa: comprender lo que había ocurrido y preguntarse qué debía cambiar para que el fuego no las sorprendiera otra vez. En los grupos focales y entrevistas, esta reflexión fue un punto común: cada comunario, cada mujer, cada anciano tenía claro que el incendio no podía repetirse en los mismos términos.

Una de las lecciones más repetidas es la **urgencia de la prevención comunitaria**. Antes de 2024, las quemas agrícolas se realizaban de manera individual y descoordinada; cada familia limpiaba su terreno cuando le parecía conveniente, sin acordar horarios ni medidas de control conjuntas. El incendio dejó en claro que esta práctica, en un contexto de sequías prolongadas y vientos cada vez más impredecibles, es insostenible. Hoy, las comunidades reconocen que la prevención debe ser colectiva: establecer calendarios comunes, crear cortafuegos compartidos y formar brigadas locales que puedan actuar de inmediato.

Otra enseñanza fundamental es la **revalorización del conocimiento ancestral**. En medio de la crisis, muchas familias recurrieron a señales transmitidas por sus abuelos para anticipar el avance del fuego: el cambio de color en el cielo, el comportamiento de los animales, el silbido del viento en ciertas horas del día.

Estos saberes, que habían sido relegados en favor de técnicas más modernas, demostraron su vigencia. Las comunidades ahora entienden que combinar estas señales con herramientas tecnológicas —como radios comunitarios o aplicaciones de alerta— puede marcar la diferencia en futuras emergencias.

La experiencia del incendio también llevó a un **redescubrimiento del poder de la organización**. Si algo quedó grabado en los testimonios es que, sin esperar a nadie, las comunidades se unieron para salvar sus casas, sus chacos y sus vidas. Hombres, mujeres, niños y ancianos participaron en guardias, cargaron agua, abrieron cortafuegos. Ese esfuerzo colectivo no solo les permitió resistir; también cambió la manera en que se perciben a sí mismos. “Ahora sabemos que, si nos organizamos, podemos hacer más que esperar a que llegue ayuda”, resumió un comunario de Piso Firme.

El liderazgo femenino emergente es otra lección valiosa. Las mujeres, que tradicionalmente se ocupaban de la alimentación y el cuidado de los niños, asumieron roles protagónicos durante el incendio: coordinando tareas, tomando decisiones y hasta enfrentando las llamas en el terreno. Este cambio fue reconocido incluso por los propios líderes masculinos, quienes en varias comunidades empezaron a incluir a las mujeres en las asambleas y espacios de decisión. “Nos dimos cuenta de que ellas estaban en todo”, confesó un cacique del Alto Paraguá. “Sin ellas, no habríamos resistido”.

Finalmente, las comunidades comprendieron que **no pueden enfrentar solos futuros desastres, y tampoco deberían hacerlo**. La experiencia de 2024 confirmó lo que ya sospechaban: la ayuda institucional llega tarde y muchas veces, mal coordinada. Por eso, piden acompañamiento constante, no solo en momentos de crisis. Quieren capacitación para prevenir y combatir incendios, acceso a herramientas adecuadas y canales de comunicación que funcionen incluso en la zona más aislada. No buscan depender del Estado ni de las ONGs; buscan alianzas que respeten su autonomía y potencien su capacidad de respuesta.

Estas lecciones son la base de las propuestas que se presentan en los apartados siguientes. Reflejan una comprensión profunda del territorio y una voluntad de cambio que no nace de discursos externos, sino de la experiencia directa de quienes enfrentaron el fuego. Son, en otras palabras, el punto de partida para construir soluciones que no solo prevengan nuevos desastres, sino que fortalezcan a las comunidades para vivir mejor en armonía con su entorno.

Propuestas sociales, el fortalecimiento del tejido comunitario

Las heridas que dejaron los incendios de 2024 no se limitan al paisajes quemados ni a los cultivos perdidos; se sienten en los cuerpos, en las mentes y en los vínculos comunitarios. Las familias del Alto y Bajo Paraguá cargan con problemas respiratorios que persisten meses después, con el miedo que vuelve cada vez que sopla el viento caliente y con escuelas que aún intentan recuperar el tiempo perdido. Reconstruir lo social no es solo cuestión de reabrir aulas o distribuir medicamentos: es crear las condiciones para que las comunidades puedan vivir con dignidad y sin temor a los próximos incendios.

Una de las prioridades señaladas por los propios comunarios es el **acceso a salud integral**, que incluya tanto la atención física como la mental. La experiencia del incendio mostró la fragilidad de las postas sanitarias en la región: escasas, mal equipadas y sin personal especializado. Las comunidades proponen, y esta investigación respalda, la creación de **brigadas comunitarias de salud** capacitadas en primeros auxilios, manejo de inhalaciones por humo y apoyo psicológico básico. Estas brigadas, integradas por miembros de las mismas comunidades, podrían actuar de inmediato ante nuevas emergencias y complementar la labor de los pocos profesionales que llegan a la zona. A largo plazo, se plantea la instalación de **puestos de salud móviles** que roten entre comunidades del Bajo y Alto Paraguá, llevando medicamentos y atención especializada en épocas críticas.

La salud mental merece especial atención. Los testimonios revelan un trauma colectivo: niños que lloran al ver humo, adultos con insomnio y ansiedad. Frente a esto, se propone implementar **espacios comunitarios de apoyo emocional** dirigidos por facilitadores locales, con acompañamiento de psicólogos itinerantes. Estos espacios no solo servirían para tratar el impacto del incendio, sino para fortalecer la resiliencia emocional ante futuros desastres.

En el ámbito educativo, el incendio dejó en evidencia la **vulnerabilidad del sistema escolar rural**. La suspensión de clases durante semanas interrumpió procesos de aprendizaje ya frágiles, y muchos niños no lograron retomar el ritmo.

Para prevenir que esto se repita, se sugiere la creación de **protocolos educativos de emergencia**: planes que permitan a las escuelas adaptarse ante situaciones de crisis, combinando clases presenciales y materiales autoestudio, y priorizando el bienestar emocional del alumnado. Además, se recomienda incorporar contenidos sobre **prevención de incendios y cuidado del entorno** en la currícula escolar, aprovechando la experiencia vivida como una oportunidad pedagógica.

Otra propuesta clave es el **fortalecimiento de la cohesión comunitaria**. El incendio demostró que la solidaridad fue el mayor recurso para resistir, pero también dejó tensiones por la distribución desigual de la ayuda externa. Para evitar que estas fracturas persistan, se plantea la formación de **comités comunitarios mixtos** (con participación equitativa de mujeres y jóvenes) que gestionen la preparación y respuesta ante emergencias. Estos comités, además de coordinar la prevención del fuego, podrían servir como espacios de diálogo para resolver conflictos internos y planificar acciones conjuntas de desarrollo local.

La **participación activa de las mujeres** debe consolidarse como parte central de estas propuestas. Durante el incendio, ellas lideraron guardias, cocinaron para las brigadas, cuidaron a los niños y hasta enfrentaron las llamas. Hoy, piden que ese liderazgo se reconozca y se traduzca en mayor voz en las decisiones comunitarias. Se sugiere la creación de **escuelas de liderazgo femenino** adaptadas a la realidad rural, que fortalezcan sus capacidades y generen redes entre comunidades para compartir experiencias y estrategias.

Por último, la reconstrucción social no puede desvincularse del respeto a la **cultura y al conocimiento ancestral**. Cualquier intervención debe valorar las prácticas tradicionales de manejo del fuego, la medicina natural y las formas comunitarias de organización. Lejos de imponer soluciones externas, el camino es **integrar el saber local con herramientas modernas**: radios comunitarias para alertas tempranas, capacitación en técnicas de control de incendios, aplicaciones con Inteligencia Artificial (IA), sensores y drones, y el reconocimiento del rol de los ancianos como guardianes de la memoria y la sabiduría del territorio.

Estas propuestas sociales buscan más que sanar las heridas del pasado; apuntan a **crear comunidades más fuertes, preparadas y unidas** para enfrentar el futuro. Si el fuego de 2024 reveló las vulnerabilidades de muchos territorios, también mostró su capacidad de resiliencia. Es hora de convertir esa resiliencia en una estrategia duradera.



Propuestas económicas, la reactivación de la vida y el sustento

El fuego no solo consumió árboles y chacras; también alteró los cimientos económicos de muchas comunidades. La pérdida de cultivos, animales y fuentes de agua dejó a muchas familias sin su principal medio de subsistencia, obligándolas a depender de la ayuda externa o a migrar a otros territorios. La reconstrucción económica, por lo tanto, no puede limitarse a reemplazar lo perdido: requiere repensar los sistemas productivos para que sean más resilientes, diversificados y sostenibles frente a futuras crisis.

Una de las prioridades inmediatas es la reactivación agrícola, pero con un enfoque diferente al que existía antes del incendio. Las comunidades proponen resembrar maíz, asái, yuca y plátano —sus principales alimentos—, pero combinando estos cultivos con especies nativas resistentes al fuego y útiles para la alimentación y la medicina. Se sugiere impulsar sistemas agroforestales que integren árboles frutales, hortalizas y plantas medicinales, lo que no solo diversificaría la dieta y los ingresos, sino que también ayudaría a restaurar el suelo degradado por las cenizas.

El asái, uno de los recursos más valiosos del Bajo Paraguará, merece una estrategia particular. Aunque las palmeras resistieron mejor que otros cultivos, su recolección se vio afectada por la destrucción de los caminos y la contaminación de los ríos. Para recuperar esta cadena de valor, se propone mejorar la infraestructura de transporte fluvial y crear cooperativas de productores de asái que puedan negociar mejores precios y acceder a mercados más estables, reduciendo la dependencia de intermediarios.

La ganadería, aunque limitada, sigue siendo un pilar económico para muchas familias del Alto Paraguará. En lugar de expandirla sin control, la propuesta es hacerla más eficiente y sostenible: mejorar el manejo de pasturas, introducir prácticas de rotación de potreros y capacitar a las comunidades en técnicas que reduzcan el riesgo de incendios asociados al desmonte para pastoreo. Además, se recomienda establecer fondos comunitarios de emergencia que permitan reponer animales en caso de pérdidas futuras, evitando que las familias queden completamente desprotegidas.

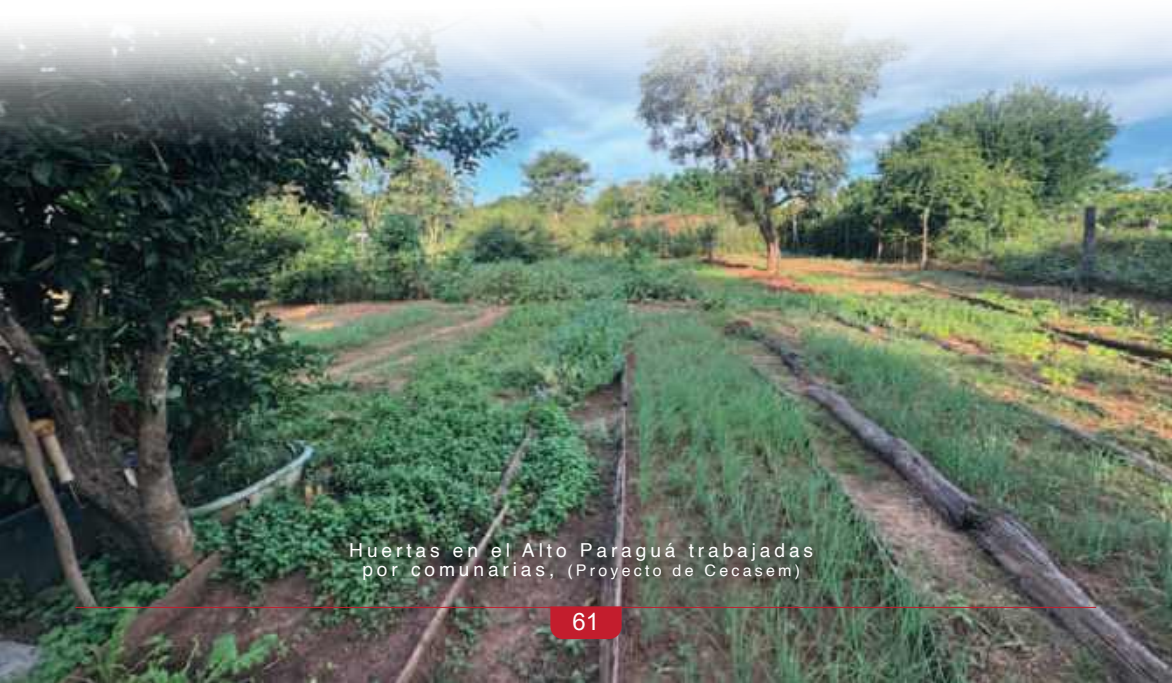
La pesca, que fue gravemente afectada por la contaminación de los ríos con cenizas, puede convertirse en otra vía para diversificar los ingresos si se implementan prácticas de manejo comunitario. Esto incluye el monitoreo de la calidad del agua, la siembra controlada de especies nativas y el establecimiento de acuerdos para evitar la sobreexplotación. De esta manera, la pesca puede recuperarse no solo como fuente de alimento, sino como parte del equilibrio ecológico del territorio.

Un eje central de estas propuestas es la seguridad alimentaria. Los incendios mostrarán que la dependencia de pocos cultivos vuelve vulnerables a las comunidades. Por eso, se plantea combinar huertos familiares diversificados con almacenamiento comunitario de alimentos para enfrentar periodos de crisis. Estas iniciativas pueden apoyarse en capacitaciones en nutrición y conservación de alimentos, aprovechando el conocimiento local sobre frutos y plantas silvestres comestibles.

También es fundamental aprovechar las oportunidades del mercado local y regional. La producción agroecológica, el turismo comunitario y los productos forestales no maderables (como miel, resinas o plantas medicinales) pueden abrir nuevas fuentes de ingreso si se conectan con ferias locales y programas de consumo responsable en ciudades cercanas. En este punto, Cecasem y otras organizaciones pueden jugar un rol clave como facilitadores, ayudando a las comunidades a acceder a capacitación, certificaciones y canales de comercialización.

Por último, la reconstrucción económica debe considerar la reducción de desigualdades internas. El Bajo Paraguá, históricamente más aislado, requiere inversiones específicas en infraestructura y logística para equilibrar las oportunidades con el Alto Paraguá. Esto implica priorizar caminos de acceso, transporte fluvial seguro y acceso a tecnologías básicas que permitan una integración real al mercado y a las políticas de desarrollo.

Estas propuestas económicas no solo buscan restaurar lo perdido, sino crear resiliencia: que cada comunidad pueda sostener su vida y su cultura incluso frente a futuras crisis. El bosque sigue siendo su fuente de sustento; la clave está en aprovecharlo de manera sostenible y justa.



Huertas en el Alto Paraguá trabajadas por comunarias, (Proyecto de Cecasem)

Propuestas políticas e institucionales, del abandono a la presencia efectiva

La catástrofe de 2024 evidenció algo que las comunidades del Alto y Bajo Paraguá ya sabían desde hace años: la ausencia del Estado en los territorios más remotos. Las semanas en que el fuego avanzaba sin que llegaran brigadas, la falta de información sobre rutas de evacuación y la distribución desigual de la ayuda mostraron fallas profundas en la gestión de riesgos del país. Para que la reconstrucción sea sostenible y las comunidades no vivan cada año con el temor de otro desastre, es necesario repensar las políticas y el papel de las instituciones en todos los niveles.

Una de las propuestas centrales es la creación de un Sistema Comunitario de Alerta y Respuesta Temprana. Este sistema, coordinado por las propias comunidades y apoyado por el municipio y la gobernación, integraría radios de comunicación utilizando APP's, puntos de vigilancia en áreas estratégicas y protocolos claros para actuar ante los primeros focos de calor. No se trata solo de reaccionar más rápido, sino de anticiparse: formar a los comunarios para identificar señales de riesgo, reportarlas y activar cortafuegos antes de que el fuego se descontrola.

En paralelo, se requiere una mayor presencia del Estado en las comunidades aisladas, no solo durante la emergencia, sino de manera permanente. Esto implica instalar brigadas de gestión de riesgos de carácter itinerante que recorran periódicamente el Bajo y Alto Paraguá para realizar capacitaciones, simulacros y evaluaciones de vulnerabilidad. Estas brigadas podrían integrarse con equipos de salud y educación, optimizando recursos y fortaleciendo la confianza entre las instituciones y la población.

Las políticas preventivas también deben revisarse. Normas como la Ley 741, que permite desmontes controlados de hasta 20 hectáreas, necesitan ser evaluadas a la luz de su impacto en zonas frágiles como la Chiquitanía y otras que no están mencionadas en la presente investigación. La propuesta no es prohibir las prácticas agrícolas tradicionales, sino regularlas y acompañarlas con alternativas sostenibles: sistemas agroforestales, capacitación en técnicas sin fuego y subsidios para herramientas que reduzcan el riesgo de incendios. En este sentido, la coordinación entre ministerios (Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Salud y otros) y gobiernos departamentales y municipales es clave para evitar vacíos y contradicciones en la normativa.

Otro eje esencial es la transparencia y la rendición de cuentas en la ayuda post desastre. Las comunidades expresaron su frustración por la distribución desigual de los víveres y medicamentos, y por promesas que nunca se

cumplieron. Se propone establecer mecanismos comunitarios de monitoreo que registren qué ayuda llega, a quiénes y en qué plazos, de manera que las propias comunidades puedan supervisar y exigir cumplimiento a las autoridades y a las ONGs.

El fortalecimiento del liderazgo local es otro pilar de las propuestas institucionales. Los capitanes, caciques, lideresas, o cualquier autoridad, que emergieron durante los incendios deben ser parte activa en la planificación y ejecución de políticas públicas. Se plantea la creación de Consejos Comunitarios de Gestión de Riesgos, con representación equitativa de mujeres y jóvenes, que sirvan de puente entre las comunidades y las instancias municipales y departamentales. Estos consejos no solo mejorarían la respuesta ante emergencias, sino que podrían incidir en planes de desarrollo más amplios.

Finalmente, es indispensable integrar a las comunidades en la toma de decisiones nacionales sobre la Chiquitanía. El Alto y Bajo Paraguá no pueden seguir siendo vistos como periferias invisibles. Su experiencia, su conocimiento del territorio y su relación histórica con el bosque deben guiar las políticas de conservación y desarrollo en la región. Esto significa que las mesas de diálogo y los planes nacionales de reforestación, cambio climático y seguridad alimentaria incluyan a representantes directos de estas comunidades.

Estas propuestas institucionales buscan pasar de la reacción improvisada al compromiso sostenido. No basta con llegar cuando el fuego ya se desató; el desafío es construir una presencia estatal y comunitaria que proteja el territorio antes, durante y después de cualquier emergencia. Solo así se podrá romper el ciclo de abandono y vulnerabilidad que marcaron los incendios de 2024.



Plan de acción integral hacia comunidades resilientes

Las quemados de 2024 dejaron claro que las soluciones parciales no son suficientes. No se puede reconstruir solo el bosque si la gente sigue sin acceso a salud; no sirve resembrar cultivos si no hay caminos para transportarlos; no bastan las brigadas de emergencia si el Estado sigue ausente el resto del año.

Las comunidades del Alto y Bajo Paraguá necesitan un plan que combine lo social, lo económico y lo político, con acciones escalonadas que respondan a las urgencias inmediatas y, al mismo tiempo, sienten las bases para un cambio estructural.

El Plan Contra Fuegos se articula en tres niveles de tiempo:

1. Corto plazo (0-12 meses)

En esta fase se busca responder a las secuelas inmediatas del incendio y estabilizar la vida de las comunidades.

- Salud y bienestar: campañas médicas itinerantes para atender problemas respiratorios y apoyo psicológico comunitario para niños y adultos.
- Seguridad alimentaria: entrega de semillas, herramientas y apoyo técnico para resembrar cultivos básicos y rehabilitar huertos familiares.
- Agua y saneamiento: limpieza y seguimiento de atajados contaminados y provisión de filtros o sistemas básicos de potabilización.
- Formación inicial: talleres sobre manejo del fuego, apertura de cortafuegos y primeros auxilios comunitarios.

2. Mediano plazo (1-3 años)

En este periodo se busca consolidar capacidades comunitarias y diversificar los medios de vida.

- Sistemas agroforestales: implementación de chacras mixtas con árboles frutales y hortalizas para mejorar la dieta y la resiliencia del suelo.
- Cooperativas de asaí y productos del bosque: para mejorar la comercialización y obtener precios justos en el mercado.
- Brigadas comunitarias permanentes: equipos locales equipados para responder a incendios y prevenir quemados descontrolados.
- Escuelas de liderazgo: formación para mujeres y jóvenes en gestión de riesgos comunitaria y negociación con instituciones.
- Infraestructura básica: mejoras urgentes en caminos de acceso y transporte fluvial para reducir el aislamiento del Bajo Paraguá.

3. Largo plazo (3-10 años)

El objetivo es transformar el modelo de desarrollo y gestión del territorio, integrando a las comunidades en la toma de decisiones nacionales y regionales.

- Sistema regional de alerta temprana: conectado con datos satelitales, aplicaciones, sensores y radios comunitarias, gestionado en conjunto por municipios y comunidades.
- Política pública adaptada a la Chiquitanía: que regule el uso del fuego, promueva alternativas sostenibles y reconozca el valor cultural y ecológico del territorio.
- Centros comunitarios de resiliencia: espacios permanentes de formación, salud, acopio y respuesta a emergencias.
- Reforestación participativa: con especies nativas y en áreas estratégicas para restaurar corredores ecológicos y fuentes de agua.
- Inclusión plena de las comunidades en mesas nacionales de cambio climático y seguridad alimentaria, garantizando que su voz incida en políticas de alto nivel.

Cecasem puede desempeñar un papel clave como articulador y facilitador de este plan: conectando a las comunidades con otros actores (Estado, ONGs, cooperación internacional), brindando formación técnica y visibilizando sus demandas en espacios de incidencia nacional e internacional. Más que liderar, su misión será acompañar y fortalecer los liderazgos locales que surgieron en la crisis.

Este plan de acción integral es el puente entre el diagnóstico y el futuro. Resume no solo lo que las comunidades necesitan, sino lo que ya han demostrado que pueden hacer si se les brinda apoyo adecuado: organizarse, cuidarse mutuamente y defender su territorio. Convertir estas propuestas en realidad exige voluntad política, inversión sostenida y, sobre todo, el reconocimiento de que la Chiquitanía no es un territorio periférico, sino un corazón vital para el equilibrio ambiental y cultural no solo del país, sino del mundo.

El camino recorrido en esta parte de la investigación ha mostrado que la reconstrucción del Alto y Bajo Paraguá no puede limitarse a reparar lo que el fuego destruyó; debe transformar la relación histórica de estas comunidades con el territorio y con el Estado. Las propuestas sociales, económicas y políticas aquí presentadas no son un listado de aspiraciones idealizadas: nacen de la experiencia concreta de quienes enfrentaron el incendio y conocen, mejor que nadie, las fragilidades y potencialidades de su propio hogar.

Las soluciones planteadas buscan sanar las heridas visibles e invisibles que dejó el fuego: desde los pulmones dañados por el humo, hasta la confianza rota en las instituciones. Se proponen sistemas de salud comunitaria y apoyo emocional, educación adaptada a la realidad rural y fortalecimiento del tejido

social que permitió resistir en los días más oscuros. En el plano económico, se prioriza la diversificación productiva y la seguridad alimentaria mediante prácticas sostenibles que respeten el bosque y mejoren la calidad de vida. Y en el ámbito político, se plantea una transformación de fondo: pasar de una presencia estatal intermitente a una alianza permanente con las comunidades, basada en la prevención, la transparencia y el liderazgo local.

Este plan integral no es solo una hoja de ruta para el Bajo y Alto Paraguá; es un modelo que puede inspirar otras regiones de Bolivia y de la Amazonía que enfrentan desafíos similares. Su éxito dependerá de la voluntad de las autoridades para escuchar a las comunidades y de la capacidad de estas para sostener la organización y el aprendizaje que el incendio les dejó. Cecasem y otras organizaciones pueden jugar un rol clave como puente entre ambos mundos, facilitando procesos y visibilizando realidades que, durante demasiado tiempo, han permanecido en los márgenes.

Pero esta historia no estaría completa sin mirar hacia uno de los tesoros más valiosos y silenciosos de la región: el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Su biodiversidad única y su rol en el equilibrio climático lo convierten en un actor silencioso del que dependen no solo las comunidades del Bajo Paraguá, sino todo el país y gran parte del continente. Proteger el parque es proteger el futuro. Por eso, el siguiente capítulo lo dedicaremos a explorar su importancia, las amenazas que enfrenta y las oportunidades que ofrece para construir una Chiquitanía más resiliente y justa.



Comunarias de Sañonama
(San Ignacio de Velasco)

Capítulo Extra

CAPÍTULO EXTRA

“En los capítulos anteriores hemos analizado el impacto del incendio de 2024 en las comunidades del Alto y Bajo Paraguará, sus huellas sociales, económicas y políticas, y las propuestas para una reconstrucción sostenible. Sin embargo, al recorrer el territorio en el trabajo de campo y escuchar a sus habitantes, se hizo evidente que había un elemento que no podíamos tratar como un simple dato más: el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Este espacio, aunque no fue arrasado por el fuego, se convirtió en el corazón de las conversaciones comunitarias, en el eje silencioso que sostiene la vida del Bajo Paraguará y en el símbolo de lo que está en juego para Bolivia y el mundo. Por esa razón, este capítulo se presenta como un episodio especial dentro de la investigación: una pausa para mirar al parque no solo como área protegida, sino como parte vital de las comunidades que hemos acompañado en esta investigación.”

El santuario en el límite del mundo

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado se extiende como una inmensa mancha verde en el noreste de Bolivia, en el extremo de la provincia Ángel Sandoval, donde la Chiquitanía se funde con la Amazonía y el río Iténez marca la frontera natural con Brasil. Desde el aire, su vastedad parece infinita: un mosaico de bosques secos chiquitanos, selvas amazónicas, sabanas inundables y ríos serpenteantes que se abren paso entre cañones y cascadas milenarias. Con más de 1,5 millones de hectáreas, es uno de los parques más grandes de Sudamérica y desde el año 2000 forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Llegar a él, sin embargo, es una prueba de resistencia. El acceso por el Bajo Paraguará es complejo: caminos de tierra que se pierden en la temporada de lluvias, tramos que solo pueden cruzarse en motocicleta o a pie, y un aislamiento que hace que muchas de sus comunidades apenas aparezcan en los mapas oficiales. Esta geografía difícil es, al mismo tiempo, su fortaleza y su condena: lo ha protegido de la deforestación masiva que afecta otras zonas de la Amazonía, pero también lo ha mantenido en el olvido para las autoridades y, en parte, para el resto del país.

Para **Cecasem**, entrar al Noel Kempff y a las comunidades que lo circundan significó más que un viaje de trabajo: fue una confrontación directa con la magnitud de lo que está en juego. Tras recorrer el Alto y Bajo Paraguará documentando los impactos del incendio de 2024, el equipo se internó en esta

región para entender no solo las secuelas del fuego, sino también el valor de lo que se salvó y lo que aún se puede perder. Los testimonios recogidos en Piso Firme, Porvenir, Cachuela y Bella Vista —comunidades que viven a las puertas del parque— revelan una relación íntima y compleja con este territorio: el parque es para ellos fuente de vida, orgullo y sustento, pero también un recordatorio constante de las promesas incumplidas de protección y desarrollo.

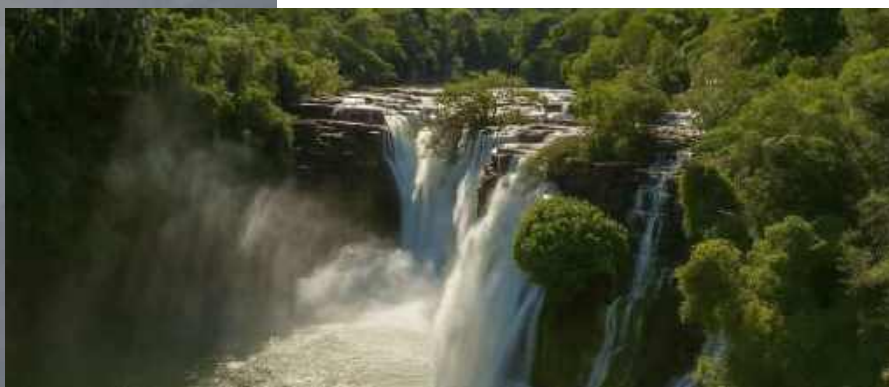
La primera imagen que impacta al visitante es la sensación de **inmensidad intacta**. Tras horas de viaje por caminos polvorientos y baches inundados, el bosque se abre en un horizonte sin límites. La vegetación se eleva en múltiples capas: desde las copas altas donde anidan los guacamayos jacinto, hasta el sotobosque donde se ocultan armadillos, perezosos y jaguares. El aire es denso y húmedo, cargado de sonidos que no se encuentran en ninguna ciudad: el zumbido de los insectos, el canto de aves desconocidas, el rugido lejano del agua cayendo en las cascadas Ahlfeld y Arcoíris, monumentos naturales que parecen fuera del tiempo.

Los comunarios describen el parque como **“el monte grande”**, un espacio que sienten propio aunque esté bajo administración estatal. Para ellos, sus ríos y senderos son tan familiares como las chacras donde siembran yuca o maíz. “Aquí todo se encuentra: remedios, agua, comida. Pero también respeto”, nos dijo la cacique de la Chiquitanía. “El parque no se toca porque es sagrado. Solo se cuida”. Esta percepción contrasta con la visión externa que muchas veces lo reduce a un “recurso natural” o “atractivo turístico”, sin reconocer el entramado cultural y espiritual que lo sustenta.

En la entrada al parque, las huellas del incendio de 2024 son menos evidentes que en otras zonas del Bajo Paraguá, pero no por ello menos significativas. El fuego bordeó las áreas de amortiguamiento y aunque las llamas no penetraron el corazón del parque, el humo cubrió sus cielos durante semanas. Comunarios de Porvenir recuerdan cómo los animales silvestres huyeron en masa hacia el interior del parque: tapires cruzando los ríos, venados buscando refugio en las quebradas, monos que dejaron de gritar por días enteros. Esa migración forzada alteró los patrones de caza y pesca de las comunidades y dejó claro que el parque, aunque protegido por decreto, **no es inmune al fuego que avanza desde sus bordes**.



Parque Nacional Noel Kempff Mercado



Un pulmón para Bolivia y el mundo

Más allá de su belleza y biodiversidad, el Noel Kempff cumple un rol vital como pulmón ecológico de Bolivia y de toda Latinoamérica. Sus bosques almacenan millones de toneladas de carbono, regulan el ciclo del agua que alimenta a la cuenca del Amazonas y sostienen procesos ecológicos que trascienden fronteras. La pérdida de este parque tendría consecuencias que van mucho más allá del Bajo Paragwá: afectaría la estabilidad climática regional y global, comprometiendo la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas.

Sin embargo, este valor global contrasta con la realidad local de abandono. Las comunidades que conviven con el parque enfrentan pobreza, falta de acceso a salud y educación, y un aislamiento que las deja vulnerables frente a incendios, sequías y otras amenazas. “Dicen que este parque es Patrimonio del Mundo”, nos comentó una líderesa de Cachuela, “pero el mundo no sabe cómo vivimos aquí”. Esta contradicción —entre el reconocimiento internacional y el olvido nacional— atraviesa todo el capítulo y plantea la pregunta central: ¿cómo proteger un santuario global sin sacrificar la dignidad de quienes lo habitan?

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado es uno de los lugares de mayor diversidad biológica en el planeta. En sus más de 1,5 millones de hectáreas se superponen tres grandes ecosistemas: el bosque seco chiquitano, la selva amazónica y las sabanas inundables del Pantanal. Esta confluencia única crea un mosaico de hábitats que alberga miles de especies, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción, y convierte al parque en un corredor vital para la conectividad ecológica de toda la región amazónica.

Desde el punto de vista científico, el parque es un laboratorio natural. En él se han registrado más de 4.000 especies de plantas, algunas aún sin clasificar; 600 especies de aves, que incluyen íconos como el guacamayo jacinto y el águila harpía; 130 especies de mamíferos, entre ellos el jaguar, el tapir y el oso hormiguero gigante; además de innumerables anfibios, reptiles y peces que dependen de la pureza de sus ríos. Cada rincón del parque cuenta una historia evolutiva distinta: desde los cañones de piedra arenisca de la Serranía de Caparuch hasta las cascadas monumentales del río Paucerna, donde el agua se precipita desde alturas de más de 80 metros.

Pero más allá de los datos, la biodiversidad del parque es parte del imaginario y del sustento cotidiano de las comunidades del Bajo Paragwá. Durante los grupos focales realizados por Cecasem, los comunarios compartieron relatos sobre animales que consideran señales o presagios: el canto del urucú (ave amazónica) que anuncia lluvias, la aparición del jaguar como símbolo de fuerza y respeto, o el vuelo en círculos del águila que, según ellos, indica abundancia de presas. Estas narraciones no son meros mitos; son expresiones de un conocimiento ecológico ancestral que ha permitido a las comunidades convivir con el bosque durante generaciones.

El bosque del Noel Kempff no solo es imponente por su tamaño; es vital por lo que provee. Las comunidades recolectan frutos como el asaí, el motacú y el cupuaçú, que no solo forman parte de su dieta, sino que también representan una fuente potencial de ingreso si se gestionan de manera sostenible. De sus árboles extraen cortezas y resinas utilizadas en remedios tradicionales: infusiones para aliviar la tos, bálsamos para curar heridas o extractos que usan en rituales de sanación. “En el monte no falta nada”, nos dijo una mujer en Porvenir. “Solo hay que saber buscar”.

La fauna del parque es tan diversa como esquiva. El jaguar, máximo depredador del ecosistema, es al mismo tiempo temido y venerado por los comunarios; su presencia es vista como un indicador de que el bosque está sano. El guacamayo jacinto, con su plumaje azul intenso, sobrevuela las palmeras del Pantanal en bandadas que tiñen el cielo al amanecer. Los ríos del parque albergan delfines rosados, una rareza amazónica que fascina a los niños de las comunidades ribereñas. Para los ancianos, cada especie tiene un propósito: “El monte te habla si lo sabes escuchar”, explican.

Lo que hace único al Noel Kempff no es solo su biodiversidad, sino su papel como puente entre ecosistemas y culturas. Sus ríos alimentan al Bajo Paraguá, cuyas comunidades dependen del agua para pescar, regar chacras y beber en tiempos de sequía. Las plantas que crecen en sus bordes son materia prima para artesanías y rituales que forman parte de la identidad chiquitana. Y, para las generaciones más jóvenes, el parque es también un símbolo de orgullo: “Dicen que aquí vienen científicos de otros países a estudiar”, comentaba un adolescente en Porvenir. “Eso quiere decir que lo que tenemos es importante”.

Aunque el incendio de 2024 no penetró el núcleo del parque, su impacto fue indirecto pero profundo. Los comunarios reportaron migración de fauna hacia el interior durante las semanas de humo intenso: tapires, venados y monos huyendo del fuego que avanzaba desde los bordes del Bajo Paraguá. Esto alteró temporalmente las cadenas alimenticias y generó una mayor presión de caza en zonas internas del parque, donde las comunidades buscan sustento en tiempos de escasez. La regeneración del bosque, aunque lenta, demuestra la resiliencia del ecosistema; pero también advierte que un evento de mayor magnitud podría tener consecuencias irreversibles.

El Parque Noel Kempff Mercado no es un espacio vacío para quienes viven en sus fronteras. Para las comunidades del Bajo Paraguá, el parque es parte de su historia y de su cotidianidad; es el bosque al que recurren cuando falta alimento, el río del que sacan agua y peces, el lugar donde se esconden animales que han seguido sus senderos durante generaciones. A diferencia de quienes lo ven desde afuera como un santuario intocable, los comunarios lo entienden como un territorio vivo que requiere respeto, cuidado y al mismo tiempo interacción constante para sobrevivir.

Durante las visitas de Cecasem a las comunidades de Porvenir, Piso Firme, Cachuela y Bella Vista, los relatos se repitieron con matices propios de cada

familia: “El parque nos da lo que necesitamos, pero hay que saber pedir”. Esta frase, compartida por una anciana en Piso Firme, resume una cosmovisión donde la naturaleza es vista como un ser con el que se dialoga y al que se debe gratitud. En los grupos focales, las mujeres hablaban de las plantas medicinales que recolectan en el borde del parque —hojas para infusiones que alivian la tos, cortezas que curan heridas— mientras los hombres relataban los largos recorridos para cazar o pescar, cuidando siempre de no “asustar al monte”.

Históricamente, los pueblos chiquitanos y las familias campesinas que habitan el Bajo Paraguará han mantenido una relación de subsistencia con el bosque: caza controlada, pesca en los ríos estacionales, recolección de frutos como el asái y el plátano. Estos usos tradicionales han coexistido durante siglos con la regeneración natural del ecosistema, creando un equilibrio que solo se rompió en las últimas décadas con el avance de actividades externas —colonización agrícola, minería ilegal, apertura de caminos— que transformaron las dinámicas locales.

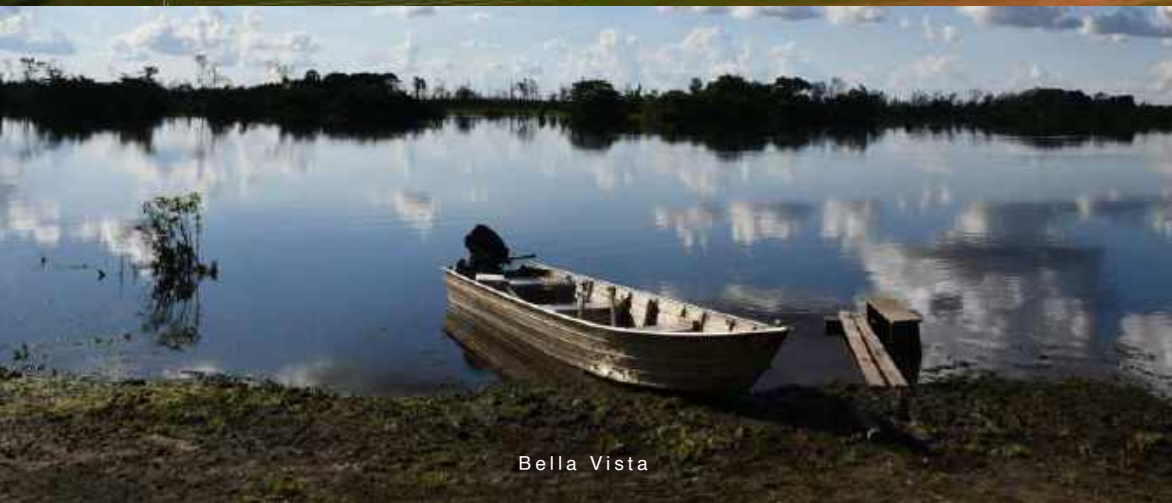
La declaración del parque como área protegida en 1979 y su posterior reconocimiento como Patrimonio Mundial en 2000 marcaron un cambio profundo. Para las comunidades, significó el inicio de nuevas reglas: restricciones para ingresar a ciertas zonas, limitaciones a la caza y la pesca, y la llegada esporádica de guardaparques y científicos. Muchos comunarios lo aceptaron como una medida necesaria para conservar el bosque, pero otros lo vivieron como una imposición que no siempre consideraba sus necesidades. “Nos dicen que no entremos, pero cuando el fuego llega, somos los primeros en apagarlo”, reclamó un joven de Porvenir durante una de las entrevistas.

Pese a las tensiones, el sentimiento predominante hacia el parque es de orgullo. Los comunarios saben que su territorio es especial y lo expresan con frases como “aquí vienen de otros países a ver lo que tenemos”. El reconocimiento internacional del Noel Kempff como uno de los grandes pulmones de América Latina les da un sentido de pertenencia y dignidad: sienten que su tierra es valiosa para el mundo. Sin embargo, este orgullo convive con una sensación de abandono: “Si es tan importante, ¿por qué seguimos sin caminos, sin salud, sin ayuda cuando hay fuego?”, cuestionó una lideresa de Piso Firme. Esta paradoja —ser guardianes de un tesoro global mientras se lucha por necesidades básicas— atraviesa la vida en el Bajo Paraguará.

El incendio de 2024 reforzó el vínculo entre las comunidades y el parque. Aunque las llamas no penetraron el núcleo protegido, el humo y el avance del fuego por las zonas de amortiguamiento unieron a los comunarios en un esfuerzo por proteger no solo sus chacras y casas, sino también el bosque del que dependen. En los relatos recogidos durante los grupos focales, muchos recordaban cómo los animales huyeron hacia el interior del parque y cómo ellos mismos actuaron como una primera barrera de contención: cavando cortafuegos, vigilando las laderas y compartiendo agua escasa para salvar lo que podían. “Si se quema el parque, se quema nuestra vida”, resumió un capitán comunitario.



Piso Firme



Bella Vista



Catarata Federico Ahlfeld

Amenazas y vulnerabilidades actuales

El Parque Noel Kempff Mercado, a pesar de su estatus de Patrimonio Mundial y su aparente aislamiento, no está a salvo de las fuerzas que transforman la Amazonía y la Chiquitanía. Su riqueza biológica y su ubicación estratégica lo convierten en un punto crítico tanto para la conservación como para las presiones económicas que se expanden desde el sur y el oeste. Durante las visitas realizadas por Cecasem al Bajo Paraguá, fue imposible ignorar cómo las comunidades describían estas amenazas no como riesgos abstractos, sino como realidades que ya han comenzado a alterar su vida diaria.

La primera amenaza es la expansión agrícola descontrolada. Aunque el núcleo del parque está protegido por ley, sus zonas de amortiguamiento —especialmente hacia el Bajo Paraguá— se han convertido en una frontera en disputa. En las últimas dos décadas, la presión por ampliar áreas de cultivo de soya y ganadería ha ido acercándose al parque, abriendo caminos informales y provocando fragmentación del bosque. “El monte se va abriendo poquito a poquito”, comentó un comunario de Porvenir. “Un camino hoy, otro mañana, y cuando ves ya no hay monte”.

Esta expansión no solo reduce la cobertura forestal; también aumenta el riesgo de incendios. Las quemas agrícolas tradicionales, utilizadas para limpiar chacras o renovar pasturas, se han vuelto más peligrosas en un contexto de sequías prolongadas y vientos fuertes. El incendio de 2024 fue un recordatorio doloroso: aunque no penetró a profundidad al parque, bordeó sus límites, intentando acceder cada vez más, demostrando que una sola chispa en la zona de amortiguamiento puede escalar hasta amenazar el corazón del área protegida.

La cacería furtiva también preocupa a los guardaparques y a las comunidades. Aunque la caza de subsistencia es una práctica ancestral y regulada por normas comunitarias, el ingreso de cazadores externos en busca de especies valiosas —como el jaguar, codiciado por su piel y colmillos— amenaza el equilibrio del ecosistema. El propio jaguar, símbolo de la salud del bosque, se encuentra ahora en el centro de una disputa: para los comunarios representa respeto y abundancia, pero para redes ilegales es una mercancía.

El cambio climático es la amenaza transversal que intensifica todas las demás. En los últimos años, el Bajo Paraguá y la región del parque han experimentado sequías más largas y severas, alterando los ciclos de los ríos y la disponibilidad de agua para comunidades y fauna. Esta sequedad convierte al bosque en un combustible listo para arder y aumenta la frecuencia de los incendios. Durante el recorrido de Cecasem en 2024, los comunarios relataban cómo “antes el humo era cosa de un mes, ahora son tres o cuatro”, reflejando la nueva normalidad de crisis prolongadas.

El cambio climático también está desplazando a la fauna. Los comunarios han notado la migración de animales que antes eran abundantes en las zonas de borde: monos que se internan más en el parque, aves que cambian sus rutas y peces que desaparecen en épocas de sequía extrema. Estos cambios no solo afectan la biodiversidad; repercuten directamente en la seguridad alimentaria de las comunidades, que dependen de la pesca y la caza para complementar su dieta.

A todo esto se suma la falta de presencia institucional sostenida. Si bien el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) cuenta con guardaparques en el Noel Kempff, su número es reducido y sus recursos limitados para cubrir un territorio tan vasto. Las comunidades expresaron frustración por esta situación: “Cuando hay problemas, somos nosotros los que damos la cara. Los guardaparques vienen después, si es que vienen”, explicó un cacique de Piso Firme. Esta realidad convierte a los comunarios en guardianes involuntarios del parque, muchas veces sin capacitación ni apoyo.

El aislamiento geográfico agrava estos problemas. Los caminos son escasos y las vías fluviales dependen de la temporada de lluvias, lo que dificulta no solo el monitoreo del parque, sino también la respuesta ante emergencias como los incendios o la minería ilegal. Esta combinación de amenazas —presión agrícola, actividades ilegales, cambio climático y debilidad institucional— sitúa al Noel Kempff en una encrucijada: su valor ecológico es inmenso, pero su protección es frágil.

A pesar de las amenazas que enfrenta, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado también encierra una oportunidad única: la posibilidad de convertirse en un modelo donde la conservación ambiental y el desarrollo comunitario caminen de la mano. Lejos de ser un conflicto, la relación entre las comunidades del Bajo Paraguará y el parque puede ser la clave para asegurar su protección a largo plazo y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de quienes lo habitan.

Una de las oportunidades más claras es el turismo comunitario, basado en la riqueza natural y cultural del parque. Las cascadas Ahlfeld y Arcoíris, la Serranía de Caparuch y los ríos del Iténez y el Paucerna son escenarios de una belleza inigualable que podrían atraer visitantes de todo el mundo interesados en experiencias auténticas y sostenibles. Los comunarios mismos mencionaron durante las entrevistas con Cecasem que, aunque han visto pasar grupos pequeños de turistas y científicos, nunca se ha consolidado una estrategia que los involucre directamente: “Vienen, miran y se van; no sabemos quién los trae ni a dónde van después”, dijo un cacique de Porvenir.

La propuesta no es abrir el parque al turismo masivo, sino crear circuitos pequeños y bien gestionados donde los visitantes puedan conocer la biodiversidad del parque y al mismo tiempo aprender sobre la cultura y el modo de vida de las comunidades chiquitanas. Esto permitiría generar ingresos complementarios para las familias, fortalecer su sentido de orgullo y sobre todo vincular su bienestar económico con la protección del bosque. Experiencias

similares en otros parques amazónicos han demostrado que cuando las comunidades perciben beneficios tangibles de la conservación, se convierten en sus defensores más firmes.

Otra vía prometedora es el monitoreo participativo de biodiversidad. El Noel Kempff es un imán para investigadores nacionales e internacionales, pero muchas veces su trabajo no incluye a los habitantes locales. Incorporar a las comunidades en tareas de registro de fauna, control de incendios y vigilancia de actividades ilegales puede generar un doble beneficio: mejorar la información científica y crear capacidades locales. “Nosotros sabemos dónde cruzan los animales y cuándo cambian los ríos”, explicó un comunario de Bella Vista. Integrar este conocimiento con tecnologías como cámaras trampa, GPS o drones de bajo costo permitiría crear sistemas de alerta y monitoreo más efectivos y económicos.

El trabajo de Cecasem en la región ha mostrado que los jóvenes son un recurso subutilizado para la conservación. Muchos adolescentes expresaron interés en aprender sobre el parque y participar en actividades, pero carecen de oportunidades de formación. Crear programas de educación ambiental y liderazgo juvenil que combinen saberes tradicionales con ciencia moderna podría generar una nueva generación de guardianes del parque, capaces de articular sus comunidades con actores externos como ONGs, universidades y organismos internacionales.

Si bien el parque en sí está bajo régimen de protección, sus zonas de amortiguamiento y las comunidades aledañas necesitan alternativas de sustento que reduzcan la presión sobre el bosque. Esto incluye sistemas agroforestales diversificados, producción de miel nativa, aprovechamiento sostenible de frutos amazónicos como el asaí y el copoazú, y técnicas de pesca regulada. Integrar estas actividades en cadenas de valor con certificación ecológica puede abrir mercados especializados y al mismo tiempo mejorar la dieta y la resiliencia económica de las familias.

Ninguna de estas iniciativas puede funcionar en aislamiento. Se necesita una alianza amplia entre comunidades, Estado, ONGs y cooperación internacional para coordinar esfuerzos y garantizar que los beneficios lleguen realmente a la gente local. Cecasem, con su experiencia en terreno y su capacidad para generar redes, puede jugar un papel de articulador clave: facilitando formación, promoviendo proyectos piloto y asegurando que las voces de las comunidades sean escuchadas en las mesas de decisión.

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado se erige como una paradoja viva: un paraíso natural reconocido por el mundo, pero desconocido en gran parte por el país al que pertenece. Sus cascadas monumentales y su biodiversidad incomparable lo han convertido en un símbolo de orgullo nacional, y al mismo tiempo en un espacio que refleja las contradicciones más profundas de Bolivia: la riqueza natural frente a la pobreza estructural de quienes la habitan, el reconocimiento internacional frente al abandono local, las leyes que protegen en el papel, pero no siempre en la práctica.

El recorrido por el Bajo Paraguá permitió comprender que el parque no es solo un espacio protegido; es parte de la vida cotidiana de las comunidades chiquitanas y campesinas que lo rodean. Para ellas, el Noel Kempff es fuente de agua, alimento, medicinas y también de identidad cultural. Sus relatos revelan un vínculo ancestral que trasciende la simple noción de conservación: proteger el parque es protegerse a sí mismos. Sin embargo, también expresan una frustración constante: el aislamiento, la falta de servicios básicos y la sensación de que su rol como guardianes no es reconocido ni recompensado.

Las amenazas que se ciernen sobre el Noel Kempff —expansión agrícola, incendios recurrentes y los efectos del cambio climático— no son solo riesgos ambientales; son desafíos que ponen en entredicho la capacidad del Estado y de la sociedad para salvaguardar un patrimonio que pertenece a todos. Los incendios de 2024, aunque no devastaron su núcleo, demostraron lo vulnerable que puede ser incluso el territorio más protegido cuando las políticas preventivas fallan y la coordinación institucional es débil.

Pero también hay esperanza. Las comunidades han demostrado una capacidad de organización admirable; los jóvenes quieren aprender y participar; las mujeres han emergido como lideresas naturales; y organizaciones como Cecasem han abierto caminos para que la conservación no sea un concepto impuesto, sino una estrategia compartida. El parque, lejos de ser un espacio ajeno, puede convertirse en el corazón de un modelo de resiliencia que combine saberes tradicionales, ciencia y políticas inclusivas.

Esa es la tarea pendiente: convertir el reconocimiento en acción, el orgullo en protección efectiva, el patrimonio en un motor de desarrollo humano y ecológico. Y para lograrlo, el primer paso es revisar con honestidad el marco legal que supuestamente resguarda este tesoro. ¿Son nuestras leyes suficientes para proteger el Noel Kempff y las comunidades del Bajo Paraguá? ¿Qué vacíos han permitido que el fuego y otras amenazas lleguen tan cerca? ¿Cómo podemos armonizar el derecho a la conservación con el derecho al desarrollo digno de quienes viven allí?

Capítulo 5

Capítulo 5 MARCO NORMATIVO Y VACÍOS



Cuando las llamas exponen las grietas de la ley

Los incendios de 2024 en el Bajo Paraguá no solo arrasaron bosques y pusieron en riesgo la vida de las comunidades; también se expuso con crudeza las limitaciones del marco legal boliviano para prevenir y gestionar desastres ambientales. Las llamas no respetaron los límites de las áreas protegidas ni las normas que, en teoría, regulan el uso del fuego y la deforestación. En cuestión de semanas, el territorio mostró fallas que iban más allá de la capacidad técnica o logística: eran fallas estructurales en la forma en que el país legisla, aplica y fiscaliza la protección de su patrimonio natural.

Este capítulo analiza el entramado jurídico que regula el uso del fuego, la protección de los bosques y la gestión de riesgos en Bolivia, y cómo este marco

se confrontó con la realidad vivida en el Alto y Bajo Paraguarí y en particular con el Parque Noel Kempff Mercado. La revisión es fundamental por dos razones.

Primero, porque la legislación ambiental boliviana es considerada avanzada en términos de principios —reconoce la Madre Tierra, el derecho al agua, los servicios ecosistémicos—, pero enfrenta serias dificultades en su aplicación. Segundo, porque el incendio de 2024 se convierte en un caso de estudio para evidenciar cómo la desconexión entre norma y territorio agrava las crisis socioambientales.

En las entrevistas realizadas por Cecasem durante el trabajo de campo, la percepción de los comunarios era clara: las leyes existen, pero no llegan hasta ellos. Muchos desconocen las normas que regulan las quemados, los límites de las áreas protegidas o los procedimientos para denunciar un delito ambiental. Otros, aunque saben de su existencia, sienten que la aplicación es desigual: “Aquí vienen a prohibirnos cazar o cortar un árbol —decía un cacique de Porvenir—, pero nadie viene cuando hay fuego o cuando talan los de afuera”. Esta distancia entre lo que está escrito y lo que se vive en el territorio es uno de los ejes centrales del presente capítulo.

El análisis que sigue no busca demonizar la normativa vigente, sino comprender sus alcances y limitaciones. Bolivia cuenta con leyes clave como la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 602 de Gestión de Riesgos y la Ley 741 que regula desmontes para uso agropecuario. También existen normas específicas para áreas protegidas y compromisos internacionales que el país ha ratificado. Sin embargo, estas normas presentan vacíos, superposiciones y contradicciones que dificultan una gestión efectiva. Ejemplo de ello es la autorización de chaqueros controlados hasta 20 hectáreas en un contexto de sequías extremas y vientos impredecibles: una disposición legal que, en la práctica, facilita incendios de gran magnitud.

Este capítulo se estructura en cinco partes: primero se expone el marco legal vigente; luego se analizan los vacíos y problemas evidenciados durante el incendio de 2024; se presenta una comparación con estándares internacionales y experiencias de otros países amazónicos; y finalmente, se proponen recomendaciones jurídicas y de política pública para fortalecer la protección de territorios como el Noel Kempff y el Bajo Paraguarí. En cada sección se integran tanto datos normativos como testimonios y observaciones recogidas en el trabajo de campo, buscando que el análisis sea riguroso pero no pierda de vista a quienes viven en el centro de estas leyes: las comunidades.

La historia de la legislación ambiental en Bolivia está marcada por un cambio de paradigma en las últimas décadas. Durante gran parte del siglo XX, las políticas hacia los bosques se centraron en su explotación para la expansión agrícola y ganadera, sin considerar de manera suficiente los impactos ecológicos o sociales. No fue sino hasta los años noventa que surgió una visión más integral que reconoció la necesidad de conservar los recursos naturales y garantizar derechos colectivos sobre ellos.

La Ley 1333 de Medio Ambiente (1992) marcó un hito al establecer principios básicos de protección ambiental, manejo sostenible de recursos y prevención de la contaminación. Esta ley sentó las bases para la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y definió los instrumentos de planificación ambiental, como los Planes de Uso de Suelo (PLUS). Sin embargo, la aplicación efectiva de estos instrumentos ha enfrentado limitaciones crónicas: escasez de recursos, débil fiscalización y falta de articulación entre niveles de gobierno.

El cambio más profundo llegó con la Constitución Política del Estado de 2009, que incorporó la visión del Vivir Bien y reconoció a la Madre Tierra como sujeto de derechos. Este enfoque dio origen a nuevas leyes como la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012). Aunque innovadoras en lo conceptual, estas normas no siempre se tradujeron en mecanismos claros de aplicación en territorios como el Bajo Paraguá.

La Ley 602 de Gestión de Riesgos (2014), por su parte, estableció el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (SISRADE), que busca coordinar acciones de prevención y respuesta ante emergencias. Sin embargo, su implementación ha mostrado deficiencias notorias en casos como los incendios: los comités municipales y departamentales carecen de recursos y equipos, y las comunidades —que son las primeras en enfrentar el fuego— rara vez son integradas en los planes oficiales.

Uno de los puntos más controvertidos es la Ley 741 (2015), que autoriza el desmonte y uso del fuego hasta 20 hectáreas para actividades agropecuarias en propiedades pequeñas y comunitarias. Si bien busca atender las necesidades de los pequeños productores, en la práctica ha sido utilizada para justificar chaqueos en condiciones climáticas de alto riesgo. En la Chiquitanía, varios incendios recientes han coincidido con el inicio de estas quemas controladas que, ante vientos fuertes, se desbordan y se convierten en megaincendios.

El Parque Noel Kempff Mercado, como área protegida de categoría nacional y Patrimonio Mundial, cuenta además con normativas específicas que restringen el aprovechamiento directo de sus recursos y establecen zonas de amortiguamiento. No obstante, la vigilancia efectiva de sus límites depende de un número reducido de guardaparques y de la colaboración voluntaria de las comunidades cercanas, que a menudo no reciben apoyo ni incentivos para asumir ese rol.

Este marco normativo, aunque extenso en papel, se revela frágil frente a incendios como el de 2024. La coexistencia de leyes de protección y normas que facilitan el uso del fuego, la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de mecanismos de cumplimiento generan un escenario en el que las comunidades quedan desprotegidas y el bosque, vulnerable. En las siguientes secciones se profundizará en cada una de estas leyes y en los vacíos que se hicieron evidentes durante la crisis del Bajo Paraguá.

Marco legal vigente, normas que existen, pero no siempre protegen

El entramado jurídico boliviano sobre medio ambiente y gestión del fuego se ha construido de manera gradual, respondiendo a crisis y presiones internas y externas. En papel, Bolivia cuenta con un conjunto de leyes que, vistas de manera aislada, parecen robustas y progresistas: reconocen derechos de la Madre Tierra, establecen principios de desarrollo sostenible y promueven la conservación de áreas protegidas. Sin embargo, la experiencia del incendio de 2024 en el Bajo Paraguará demuestra que estas normas carecen de articulación efectiva y que sus disposiciones, en muchos casos, no llegan hasta las comunidades que enfrentan el fuego en primera línea.

Ley 1333 de Medio Ambiente

Promulgada en 1992, la Ley 1333 marcó un antes y un después en la historia ambiental boliviana. Fue la primera en reconocer la necesidad de un enfoque integral para la protección del medio ambiente y sentó las bases para la planificación territorial y el control de la contaminación. Esta ley creó instrumentos clave como las licencias ambientales, los planes de manejo forestal y los planes de uso de suelo (PLUS), que definen qué actividades son permitidas en cada zona del país.

Sin embargo, en el Bajo Paraguará y en las comunidades cercanas al Parque Noel Kempff, la Ley 1333 es prácticamente desconocida. Durante los grupos focales organizados por Cecasem, los comunarios expresaban confusión cuando se les preguntaba por regulaciones ambientales: “Sabemos que hay leyes, pero no sabemos cuáles son”, comentó un comunario de Porvenir. Este desconocimiento no se debe a desinterés, sino a una ausencia de socialización y capacitación por parte del Estado. Además, aunque la ley establece sanciones para la contaminación y la destrucción de bosques, su fiscalización es débil, en especial en territorios remotos como el Bajo Paraguará.

La Ley 1333 también dio origen al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), responsable de la administración del Parque Noel Kempff. Pero la brecha entre la norma y la práctica es evidente: el parque cuenta con un número reducido de guardaparques que no cubre su inmensa extensión y que dependen en gran medida de la colaboración voluntaria de las comunidades, las cuales, a su vez, carecen de incentivos claros para participar en la protección activa del área.

Normas sobre áreas protegidas, el caso del Noel Kempff

El Parque Noel Kempff, como área protegida nacional y Patrimonio Mundial, cuenta con un régimen legal especial. Sus límites están definidos y en teoría su uso está restringido a la conservación, investigación y turismo controlado. Sin embargo, la protección efectiva depende de factores que van más allá de la norma: la presencia de guardaparques, la colaboración de las comunidades y la voluntad política para asignar recursos suficientes.

En las entrevistas realizadas, los comunarios expresaron un sentimiento dual hacia el parque: respeto y orgullo por su riqueza, pero también resentimiento por las restricciones que enfrentan sin recibir apoyo equivalente. “Nos piden cuidar el monte, pero nadie cuida de nosotros”, resumió una mujer de Porvenir. Esta frase refleja la necesidad de repensar la gestión de las áreas protegidas como un esfuerzo compartido, no como una imposición unilateral.

Vacíos legales y aplicación deficiente

El incendio de 2024 en el Bajo Paraguará fue un punto de quiebre no solo para las comunidades afectadas, sino también para el marco jurídico boliviano en materia ambiental. Lo que ocurrió en esos meses de humo y llamas evidenció una verdad incómoda: las leyes que en papel parecen sólidas se diluyen en el territorio cuando la realidad supera su capacidad de respuesta. Los vacíos normativos, las contradicciones entre disposiciones legales y la débil aplicación de las normas contribuyeron a que el fuego avanzara sin freno y sin una respuesta institucional eficaz.

Uno de los principales problemas del marco legal es la coexistencia de normas con objetivos opuestos. Por un lado, leyes como la 1333 de Medio Ambiente y las disposiciones sobre áreas protegidas buscan conservar los ecosistemas y limitar actividades que los degraden. Por otro lado, la Ley 741 autoriza desmontes y uso del fuego para producción agropecuaria en hasta 20 hectáreas, incluso en regiones de alta sensibilidad ecológica como la Chiquitanía.

Esta contradicción se vuelve crítica en contextos de sequía prolongada y altas temperaturas, como las vividas en 2024. Mientras la normativa de conservación prohíbe quemas en áreas cercanas al Parque Noel Kempff, la Ley 741 permite que, a pocos kilómetros, comunidades o pequeños propietarios puedan realizar chaqueos “controlados” sin supervisión efectiva. Los comunarios del Bajo Paraguará lo explicaban con claridad: “Nos dicen que no usemos fuego en el parque, pero afuera sí lo dejan. ¿Y quién controla cuando el viento lo trae para acá?”. La falta de armonización entre normas genera zonas grises que facilitan la propagación del fuego más allá de los límites legales.

La Ley 602 de Gestión de Riesgos establece la obligación de elaborar planes de prevención y contingencia en todos los niveles de gobierno, desde lo nacional hasta lo municipal. Sin embargo, en el Bajo Paraguará estos planes eran inexistentes o inoperantes. Durante las entrevistas realizadas por Cecasem, los líderes comunitarios relataban que no existían protocolos claros para actuar ante un incendio de gran magnitud: no sabían a quién llamar, no contaban con radios ni teléfonos satelitales, y los caminos estaban intransitables para recibir apoyo externo.

En la práctica, esto significó que las comunidades actuaron solas durante las primeras y más críticas semanas del incendio. “Éramos nosotros y el fuego”, resumió un capitán de Picaflor. Mientras las brigadas oficiales llegaban tarde y en número insuficiente, los comunarios cavaban cortafuegos con machetes y palas improvisadas, exponiéndose a riesgos para los cuales no tenían equipo de protección ni capacitación adecuada. Esta situación revela no solo una falla en la aplicación de la ley, sino una brecha estructural en la distribución de recursos y capacidades para la gestión de riesgos en zonas rurales y remotas.

Otro vacío crítico es la fiscalización del uso del fuego. Si bien existen normas que regulan los chaqueos y establecen la necesidad de permisos y supervisión, en la práctica estos controles son casi inexistentes en áreas como el Bajo Paraguará. Los comunarios señalan que las quemadas agrícolas se realizan de manera rutinaria y que la presencia de autoridades ambientales es esporádica o nula. “Aquí nadie viene a ver si tenemos permiso o no. Solo ven si se quema algo grande y sale en la tele”, comentó un agricultor de Porvenir.

La falta de fiscalización también alimenta la impunidad en casos de incendios provocados o negligentes. Pese a que el Código Penal boliviano tipifica los delitos ambientales, las sanciones rara vez se aplican por la dificultad de identificar responsables y por la falta de voluntad política para procesar a actores que pueden estar vinculados a intereses económicos locales o regionales. Esta impunidad genera una percepción de desprotección en las comunidades y debilita la legitimidad de las normas ambientales.

El incendio de 2024 expuso una fragmentación institucional que dificultó la respuesta oportuna y eficaz. En teoría, la Ley 602 prevé la coordinación entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios a través del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (SISRADE). En la práctica, la comunicación entre estas instancias fue lenta y desorganizada. Hubo duplicación de esfuerzos en algunas áreas y ausencia total en otras.

Los testimonios recogidos por Cecasem describen escenas de desconcierto: camiones con ayuda que llegaban a un municipio y no sabían a qué comunidades distribuir; autoridades locales sin información actualizada sobre el avance del fuego; y brigadas voluntarias que actuaban sin coordinación ni equipamiento. Esta falta de articulación no solo retrasó la respuesta, sino que generó tensiones entre comunidades y autoridades, alimentando la percepción de abandono.

Quizá el vacío más profundo identificado es la desconexión entre el marco legal y la vida cotidiana de las comunidades. Las normas ambientales, diseñadas en ámbitos urbanos o institucionales, rara vez incorporan la visión y las prácticas de quienes habitan los bosques. El resultado es un marco legal percibido como ajeno o impuesto, que regula las actividades tradicionales de los comunarios pero no les ofrece alternativas ni apoyo para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales.

En el Bajo Paraguará, esta desconexión se traduce en tensiones constantes: las comunidades sienten que se les exige cuidar el bosque sin reconocer su rol ni mejorar sus condiciones de vida. “El monte es nuestra casa —decía una mujer de Piso Firme—. Si nos piden cuidarlo, también tienen que cuidarnos a nosotros”. Esta frase resume la urgencia de repensar el enfoque legal hacia uno más inclusivo, que articule la conservación con el bienestar humano.

El análisis del marco legal boliviano no puede completarse sin mirarlo en perspectiva internacional. Los incendios del Bajo Paraguará en 2024 no solo afectaron a comunidades locales o áreas protegidas nacionales; también tuvieron repercusiones globales: liberación masiva de carbono, afectación de corredores biológicos transfronterizos y amenaza a un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En este contexto, Bolivia se encuentra vinculada a compromisos multilaterales y puede aprender de experiencias en otros países amazónicos que enfrentan desafíos similares.

Compromisos internacionales de Bolivia

Bolivia es signataria de varios acuerdos y tratados internacionales relevantes para la protección de los bosques y la gestión del fuego:

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): obliga a los Estados a conservar la biodiversidad y a utilizar sus recursos de manera sostenible. En el caso del Noel Kempff, esto incluye proteger especies endémicas y ecosistemas únicos de la Chiquitanía.
- Convenio Ramsar sobre Humedales: relevante por las sabanas inundables y sistemas hídricos del parque, que cumplen funciones ecológicas críticas y son refugio para fauna migratoria.
- Acuerdo de París (2015): compromete a Bolivia a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales los incendios forestales son una fuente significativa.
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): especialmente el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), que buscan frenar la degradación ambiental y restaurar ecosistemas.

- UNESCO – Patrimonio Mundial: al ser el Noel Kempff un sitio inscrito, Bolivia tiene la obligación de garantizar su integridad ecológica y cultural, informando a la UNESCO sobre amenazas y medidas de protección.

Estos compromisos, aunque importantes en el papel, no siempre se traducen en políticas efectivas. La falta de reportes periódicos a la UNESCO, la escasa implementación de planes de acción del CDB y la débil articulación de los ODS en las políticas locales muestran una brecha entre lo firmado en foros internacionales y lo vivido en el Bajo Paraguá.

Comparación regional: Brasil y Perú

Brasil: Sistema Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales
Brasil, país vecino y también amazónico, enfrenta incendios recurrentes, pero ha desarrollado un sistema integral de prevención y combate más estructurado que Bolivia. Destacan dos elementos:

- Brigadas Forestales Permanentes: equipos comunitarios entrenados y financiados por el gobierno que operan en áreas críticas durante todo el año, no solo en temporada de fuego.
- Monitoreo satelital en tiempo real (INPE): permite detectar focos de calor casi de inmediato y coordinar acciones de respuesta rápida. Este sistema es público y accesible para comunidades y medios de comunicación.

Sin embargo, Brasil también muestra desafíos: presiones políticas para expandir la frontera agrícola y flexibilizar normas ambientales han debilitado la protección de la Amazonía en ciertos periodos.

Perú: Integración comunitaria en la gestión del fuego

Perú ha desarrollado modelos interesantes de gestión participativa en áreas protegidas amazónicas:

- Comités de Gestión de Áreas Naturales Protegidas: integran comunidades, autoridades y ONGs para la planificación y vigilancia.
- Programas de incentivos para la conservación: pagos por servicios ambientales a comunidades que protegen bosques, vinculando su bienestar con la conservación.

Este enfoque reconoce el rol protagónico de las comunidades locales y reduce la percepción de que las áreas protegidas son una imposición externa.

La comparación sugiere varias lecciones para fortalecer el marco legal boliviano:

- 1. Institucionalizar brigadas comunitarias:** formar y financiar equipos locales permanentes para la prevención y combate del fuego, siguiendo el ejemplo brasileño.

2. Implementar monitoreo satelital abierto: usar tecnología para detectar incendios en tiempo real y facilitar la respuesta rápida y la transparencia.

3. Integrar comunidades en la gobernanza de áreas protegidas: como en Perú, crear comités mixtos que den voz a los habitantes del Bajo Paraguará en la gestión del Noel Kempff.

4. Vincular conservación con beneficios económicos: establecer mecanismos de compensación o incentivos para quienes protegen el bosque, reduciendo tensiones entre conservación y necesidades de subsistencia.

5. Alinear compromisos internacionales con políticas locales: traducir los tratados firmados en planes concretos, con presupuestos y responsabilidades claras.

El análisis del marco legal boliviano muestra una paradoja: el país cuenta con un andamiaje normativo amplio y progresista que reconoce los derechos de la Madre Tierra y promueve el desarrollo sostenible, pero en la práctica carece de mecanismos claros de aplicación y fiscalización. Las comunidades del Bajo Paraguará lo viven a diario: saben que el parque es Patrimonio Mundial y que existen leyes ambientales, pero no ven su impacto en su vida cotidiana. El incendio de 2024 fue la prueba más clara de esta brecha: mientras las llamas avanzaban, la respuesta legal e institucional se mostraba lenta, descoordinada y distante.

Superar esta situación requiere reformas jurídicas y políticas públicas integrales, que aborden tanto la prevención de incendios como la protección de áreas protegidas y la participación de las comunidades. Estas recomendaciones no buscan reinventar todo el sistema, sino fortalecer lo que ya existe, armonizar normas contradictorias y garantizar que la conservación no sea una carga para quienes habitan los territorios, sino una oportunidad de desarrollo y dignidad.

1. Armonización normativa: coherencia entre conservación y producción

Uno de los principales desafíos identificados es la contradicción entre leyes que promueven la conservación y aquellas que facilitan el uso del fuego para producción agropecuaria. Se recomienda:

- Revisar y modificar la Ley 741 para ajustar los límites de uso del fuego en función de las condiciones climáticas y la fragilidad de cada ecosistema. Establecer periodos de veda durante sequías extremas y zonas de exclusión alrededor de áreas protegidas como el Noel Kempff.
- Actualizar la Ley 1333 de Medio Ambiente para incorporar los principios de la Constitución de 2009 y la Ley de la Madre Tierra, alineando los instrumentos de planificación ambiental con el enfoque del Vivir Bien.
- Unificar criterios de zonificación entre los Planes de Uso de Suelo (PLUS) y las normas de áreas protegidas, evitando superposiciones y vacíos que permiten actividades incompatibles con la conservación.

2. Fortalecimiento de la gestión de riesgos y respuesta a incendios

La experiencia del 2024 mostró la debilidad del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (SISRADE) para responder en zonas remotas como el Bajo Paraguará. Se recomienda:

- Crear brigadas comunitarias permanentes, reconocidas y financiadas por el Estado, con capacitación en manejo del fuego, primeros auxilios y monitoreo de biodiversidad. Estas brigadas deben operar todo el año, no solo en temporada de incendios.
- Desarrollar un sistema de alerta temprana accesible para comunidades, basado en monitoreo satelital y comunicación radial. Este sistema debe integrar datos del INPE (Brasil) y de agencias bolivianas para una detección rápida de focos de calor.
- Asignar presupuesto estable para emergencias ambientales, evitando depender de recursos ad hoc que llegan tarde o en cantidades insuficientes.

3. Gobernanza participativa y derechos comunitarios

Las comunidades del Bajo Paraguará deben pasar de ser guardianes invisibles a gestores reconocidos del parque. Esto implica:

- Crear Comités de Gestión del Parque Noel Kempff con representación equitativa de comunidades, autoridades locales y SERNAP, para tomar decisiones sobre vigilancia, turismo y uso sostenible de recursos.
- Reconocer y regular el conocimiento ancestral en los planes de manejo del parque, integrando prácticas tradicionales de caza, pesca y recolección que no afecten la biodiversidad.
- Garantizar beneficios directos de la conservación: acceso preferente a programas de turismo comunitario, incentivos económicos por servicios ambientales y priorización en proyectos de infraestructura y salud.

4. Cumplimiento de compromisos internacionales

Bolivia debe traducir sus compromisos internacionales en acciones tangibles en el Noel Kempff y la Chiquitanía:

- Fortalecer los reportes a la UNESCO sobre el estado de conservación del parque, asegurando que las alertas internacionales se conviertan en apoyo financiero y técnico.
- Integrar los ODS y el Acuerdo de París en planes locales, midiendo el aporte del parque a la mitigación del cambio climático y la seguridad hídrica.
- Aprovechar mecanismos internacionales de financiamiento climático (como REDD+) para canalizar recursos hacia proyectos comunitarios de reforestación y manejo sostenible.

5. Transparencia y rendición de cuentas

Finalmente, es indispensable asegurar que la aplicación de estas reformas sea transparente y monitoreada:

- Crear un Observatorio de Incendios y Conservación que centralice información sobre focos de calor, respuesta institucional y cumplimiento de normas.
- Establecer auditorías sociales lideradas por comunidades y ONGs para supervisar la distribución de ayuda, la gestión de fondos y la ejecución de proyectos.
- Sancionar de manera efectiva los delitos ambientales, reduciendo la impunidad que hoy permite chaqueros ilegales y minería en zonas de amortiguamiento.

El fuego de 2024 mostró que la naturaleza no espera a que las leyes se apliquen; avanza con o sin decretos. Para que el marco jurídico boliviano esté a la altura de desafíos como los del Noel Kempff y el Bajo Paraguá, no basta con sumar nuevas normas: es necesario hacer cumplir las existentes, corregir sus contradicciones y acercarlas a la realidad de las comunidades. Solo un sistema legal que reconozca a las poblaciones locales como aliadas —y no como obstáculos— podrá garantizar que los bosques sigan siendo fuente de vida y no se conviertan en ceniza.

Cuadro comparativo del marco legal boliviano

Ley Norma	Fortalezas	Debilidades
Ley 1333 de Medio Ambiente	Marco integral de protección ambiental; establece planes de uso de suelo y licencias ambientales	Desconocida por comunidades; escasa fiscalización en territorios remotos
Constitución Política del Estado (2009)	Reconoce los derechos de la Madre Tierra y el principio del Vivir Bien	Visión progresiva, pero sin mecanismos claros de aplicación ni presupuestos
Ley 602 de Gestión de Riesgos	Crea el sistema SISRADE para coordinar gestión de riesgos y emergencias	Planes municipales y departamentales inexistentes o débiles; falta de equipamiento
Ley 741 de Uso del Fuego	Permite el uso del fuego en pequeña escala para producción agrícola comunitaria	Autorizaciones de chaqueros facilitan incendios en sequías; ausencias de monitoreo
Normativa de Áreas Protegidas (SERNAP)	Define límites y régimen especial para parques como el Noel Kempff	Dependencia de pocos guardaparques y falta de articulación con comunidades

Capítulo 6

Capítulo 6

**LAS OTRAS QUEMAS DE 2024
UN PAÍS EN LLAMAS****El fuego que ardió más
allá de la Chiquitanía**

Los incendios del Bajo Paraguá, que arrasaron vastas áreas de la Chiquitanía y pusieron en riesgo el Parque Noel Kempff Mercado, fueron sin duda los más mediáticos y devastadores de 2024. Sin embargo, no fue un caso aislado. Mientras los ojos del país e incluso de la comunidad internacional se centraban en San Ignacio de Velasco, otras regiones bolivianas también enfrentaban su propia crisis de fuego: los Yungas y el norte de La Paz, los llanos inundables del Beni y las fronteras amazónicas de Pando. Estas llamas, aunque menos documentadas, formaban parte de un mismo patrón: sequías prolongadas, chequeos mal controlados y un sistema de prevención que volvía a fallar.

2024 se consolidó como uno de los años más críticos en la historia reciente de los incendios forestales en Bolivia. Según datos preliminares de instituciones ambientales y reportes de organizaciones locales, más de 3 millones de hectáreas fueron afectadas en todo el país, sumando bosques, sabanas y áreas agrícolas. Esta cifra no solo incluye el Bajo Paraguá, sino también cientos de miles de hectáreas distribuidas en otros departamentos. En La Paz, las quemas impactaron los ecosistemas de los Yungas y del norte paceño, afectando comunidades indígenas tacanas y campesinos cocaleros. En Beni, los incendios se expandieron por los llanos de Moxos y amenazaron áreas protegidas cercanas a la Amazonía. En Pando, aunque de menor escala, el fuego alcanzó zonas ribereñas del Abuná y el Tahuamanu, comprometiendo corredores biológicos clave.

Estos focos secundarios, sumados a la crisis del Bajo Paraguá, revelan que el problema no se limita a un solo territorio ni a una temporada excepcional. Son síntomas de un sistema frágil donde la gestión del fuego, la presión por tierras agrícolas y el cambio climático convergen en un ciclo que se repite año tras año.

Ignorarlos sería caer en el mismo error que ha perpetuado la vulnerabilidad: atender emergencias aisladas sin comprender la dimensión nacional del problema.

Aunque cada región tiene sus particularidades ecológicas y culturales, los incendios de 2024 comparten un patrón inquietante:

- Uso del fuego como herramienta agrícola tradicional: tanto en los Yungas como en los llanos del Beni y Pando, el chaqueo sigue siendo una práctica arraigada para limpiar terrenos y renovar pasturas.
- Sequías prolongadas e imprevisibles: la falta de lluvias en 2024 secó bosques y pastizales, convirtiendo quemas controladas en incendios incontrolables.
- Respuesta institucional tardía y fragmentada: al igual que en el Bajo Paraguá, las brigadas oficiales llegaron tarde y con recursos limitados.
- Comunidades como primera línea de defensa: campesinos e indígenas improvisaron cortafuegos, organizaron guardias y enfrentaron el fuego con escasas herramientas.
- Cobertura mediática desigual: mientras la Chiquitanía ocupaba titulares, las quemas en La Paz, Beni y Pando quedaron en gran parte invisibles para la opinión pública.

Las quemados en La Paz, los Yungas y el norte

La Paz, conocida por su altiplano andino y su cordillera imponente, también alberga un vasto territorio amazónico poco visible en la narrativa nacional: los Yungas y el norte paceño, donde el bosque húmedo se extiende hacia el Beni y el Pando. En 2024, esta región vivió uno de los episodios de incendios más severos de su historia reciente, afectando tanto a ecosistemas de selva alta como a comunidades indígenas Tacanas, Leco y campesinas cocaleras que dependen del bosque para su sustento.

Los Yungas y el norte paceño se caracterizan por una topografía accidentada, con pendientes pronunciadas y microclimas diversos que van desde la selva nublada hasta las llanuras amazónicas. Esta diversidad, que en condiciones normales es una fortaleza ecológica, se convirtió en una vulnerabilidad durante las sequías prolongadas de 2024: los bosques húmedos se secaron, los ríos disminuyeron su caudal y el fuego encontró combustible en áreas donde antes la humedad lo frenaba.

En comunidades como Apolo, Ixiamas y San Buenaventura, el fuego no llegó como una llamarada súbita, sino como un humo persistente que se extendió por semanas. Los comunarios relataban que la visibilidad se reducía a pocos metros y que los niños y ancianos desarrollaban problemas respiratorios. “No veíamos las montañas, solo un gris espeso”, comentó un comunario tacana durante una entrevista para Cecasem. “Era como si el cielo se hubiera caído sobre nosotros”.

Las causas de las quemados en La Paz son complejas y multifactoriales:

- **Chaqueo agrícola:** la práctica tradicional de usar fuego para limpiar chacras se combinó con la expansión de la frontera cocalera en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi y áreas aledañas.
- **Sequías atípicas:** el fenómeno climático de 2024 redujo drásticamente las lluvias, transformando el bosque húmedo en material inflamable.
- **Deficiencias en control:** los permisos de chaqueo se emitieron sin supervisión suficiente y los planes de prevención locales eran prácticamente inexistentes.

El resultado fue un avance del fuego hacia áreas protegidas y territorios indígenas, amenazando especies emblemáticas del Madidi y generando desplazamientos temporales de fauna hacia zonas más seguras.

El fuego afectó tanto a las comunidades humanas como a la biodiversidad. Los daños más inmediatos incluyeron:

- **Salud:** aumento de enfermedades respiratorias, especialmente en niños y ancianos. Las postas de salud locales colapsaron ante la demanda.
- **Seguridad alimentaria:** pérdida de chacras de maíz, yuca y plátano; reducción de la pesca en ríos contaminados por cenizas.
- **Movilidad:** caminos y sendas bloqueados por árboles caídos y humo, aislando comunidades durante días.
- **Fauna y flora:** desplazamiento de especies como monos capuchinos, tapires y aves migratorias; mortandad de animales pequeños incapaces de escapar del fuego.

A pesar de la magnitud del impacto, la respuesta estatal fue limitada. Brigadas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y voluntarios lograron contener algunos focos, pero la coordinación fue lenta y los recursos insuficientes. Como en el Bajo Paraguá, fueron los comunarios quienes organizaron la defensa inicial: cavaron cortafuegos con herramientas improvisadas, vigilaron día y noche y compartieron el poco agua disponible.

El caso paceño muestra que los incendios amazónicos no se limitan a regiones tradicionalmente secas como la Chiquitanía. Incluso los bosques húmedos están en riesgo cuando las condiciones climáticas cambian y la gestión del fuego es débil. También revela un patrón común: comunidades aisladas actuando como



Vista aérea de incendios en Los Yungas, La Paz

Las quemas en Beni, los llanos y reservas bajo amenaza

Si el Bajo Paragará mostró la devastación de los bosques secos chiquitanos y los Yungas revelaron la vulnerabilidad de los bosques húmedos, Beni representó otra cara de la tragedia de 2024: la de los llanos inundables y las sabanas que sirven de transición entre la Amazonía y la Chiquitanía. En este departamento, el fuego se propagó con rapidez por pastizales resecos y áreas de uso ganadero, afectando tanto la biodiversidad silvestre como el sustento económico de miles de familias.

Beni es conocido por su vasta planicie, surcada por ríos y lagunas que se expanden en la temporada de lluvias y se retraen en época seca. Esta dinámica estacional, que en condiciones normales mantiene un equilibrio entre agua y vegetación, se rompió en 2024: la sequía prolongada convirtió los pastizales en combustible listo para arder, y los incendios se extendieron sin control en varias provincias, especialmente en Iténez, Cercado y Moxos.

Las áreas afectadas incluyeron zonas de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni y corredores biológicos cercanos al Parque Noel Kempff Mercado. Esto incrementó la presión sobre especies que ya se habían desplazado desde la Chiquitanía debido a los incendios previos, creando un efecto dominó de crisis ecológica en toda la región amazónica boliviana.

El fuego en Beni tuvo causas mixtas, que reflejan las tensiones entre producción agropecuaria y conservación ambiental:

- **Prácticas ganaderas:** el uso del fuego para renovar pasturas es común en el Beni. En 2024, la falta de lluvias y los vientos intensos hicieron que estas quemas salieran de control.
- **Expansión agrícola:** la frontera agrícola sigue avanzando hacia áreas antes cubiertas por sabanas y bosques de galería. El desmonte, muchas veces sin planificación ni supervisión, dejó grandes superficies vulnerables.
- **Cambio climático:** las temperaturas récord y la disminución de lluvias en el oriente boliviano exacerbaron las condiciones para incendios de gran magnitud.

Impacto en comunidades y ecosistemas

El impacto de los incendios en Beni se sintió en varios niveles:

- **Ganadería:** miles de hectáreas de pastizales se perdieron, dejando al ganado sin alimento y obligando a muchos productores a desplazarse o vender animales a precios bajos.
- **Fauna silvestre:** las sabanas y bosques de galería son hábitat de especies como el ciervo de los pantanos, el lobo de crin (borochi) y numerosas aves acuáticas. Muchas murieron o migraron hacia otras zonas, alterando el equilibrio ecológico.
- **Recursos hídricos:** los ríos y lagunas se llenaron de cenizas, afectando la pesca y contaminando las fuentes de agua para las comunidades ribereñas.
- **Salud humana:** el humo cubrió extensas áreas del Beni, provocando crisis respiratorias y afectando especialmente a niños y ancianos. Hospitales en Trinidad y Riberalta reportaron aumento de consultas por bronquitis y asma.

La respuesta oficial en Beni enfrentó los mismos problemas que en la Chiquitanía y La Paz: escasez de brigadas, falta de coordinación y tardanza en la intervención. Aunque se enviaron equipos desde el gobierno central y organizaciones de bomberos voluntarios, la magnitud del territorio y la dispersión de los focos de fuego dificultaron las tareas de control.

Las comunidades rurales, nuevamente, se vieron obligadas a actuar por su cuenta. Con apoyo limitado de ONGs locales, organizaron patrullas comunitarias y establecieron sistemas rudimentarios de alerta usando radios y mensajería comunitaria. “Aquí nadie llega rápido”, relató un comunario de San Borja. “Si no apagamos nosotros, se pierde todo”.

Las quemados en Pando, el fuego silencioso en la frontera amazónica

Pando, el departamento menos poblado de Bolivia, suele quedar fuera del foco mediático nacional. Sin embargo, su ubicación estratégica en la triple frontera con Brasil y Perú lo convierte en un punto crítico para la conectividad de los ecosistemas amazónicos. En 2024, aunque los incendios en Pando no alcanzaron la magnitud de los registrados en Beni o La Paz, su impacto fue significativo en términos ecológicos y sociales, especialmente en comunidades ribereñas del Abuná y el Tahuamanu.

Pando está cubierto en un 95% por bosque amazónico. Sus ríos son autopistas naturales para el comercio local, pero también para actividades ilegales como la minería aurífera y el tráfico de madera. La densidad poblacional es baja, y muchas comunidades indígenas y campesinas viven en aislamiento relativo. Esta geografía, que en teoría debería proteger el territorio del fuego, se volvió en su contra en 2024: la respuesta institucional fue casi inexistente, y el aislamiento impidió que la crisis llegara a los titulares nacionales.

Durante el trabajo de campo de Cecasem en comunidades fronterizas del Bajo Paraguará, los testimonios recogidos sobre Pando eran consistentes: el humo viajaba kilómetros, cruzando ríos y fronteras, afectando a comunidades que no sabían de dónde venía el fuego ni cuándo terminaría. “Era como si el bosque entero respirara humo”, relató un comunario que había viajado desde Cachuela hasta la zona del Abuná.

Las causas en Pando son similares a las del resto del país, pero con particularidades asociadas a su frontera internacional:

- **Chaqueos familiares y expansión agrícola:** prácticas de subsistencia que, en condiciones secas, se descontrolaron.
- **Presión por minería ilegal:** la apertura de caminos clandestinos y campamentos auríferos aumenta el riesgo de incendios por descuido y quema de residuos.
- **Efecto transfronterizo:** incendios iniciados en Brasil cruzaron la frontera, sumando complejidad al control del fuego en Pando.

El impacto en Pando fue menos visible que en otros departamentos, pero no menos importante:

- **Afectación de corredores biológicos:** los incendios fragmentaron bosques que conectan con reservas en Brasil y Perú, afectando rutas migratorias de jaguares y otras especies amazónicas.

- Contaminación de ríos: la minería ilegal, sumada al fuego, generó una doble crisis en las aguas del Abuná y Tahuamanu.
- Salud comunitaria: comunidades ribereñas reportaron enfermedades respiratorias y falta de agua potable durante semanas.

La capacidad de respuesta en Pando fue mínima. El aislamiento geográfico, la baja densidad poblacional y la falta de infraestructura impidieron la llegada oportuna de brigadas. En muchos casos, fueron los propios comunarios quienes combatieron el fuego con métodos rudimentarios, mientras las autoridades locales esperaban apoyo que nunca llegó. Esta situación refuerza el patrón observado en todo el país: el fuego se enfrenta desde abajo, sin un respaldo sólido desde arriba.

Comparación de incendios 2024: La Paz, Beni y Pando

Causas	Impacto	Respuesta y Particularidades
La Paz: Chaqueo agrícola tradicional y expansión cocalera; sequía prolongadas afectaron bosques húmedos	La Paz: Afectación de comunidades indígenas y campesinas; pérdida de chacras y aumento de enfermedades respiratorias	La Paz: Brigadas oficiales tardías; comunidades actuaron en primera línea sin apoyo técnico suficiente. Bosques húmedos en Yungas y norte paceño; baja visibilidad mediática pese a severidad del humo
Beni: Prácticas ganaderas para renovar pasturas; expansión agrícola y altas temperaturas en llanos inundables	Beni: Pérdida masiva de pastizales y afectación de fauna acuática y de sabanas; contaminación de ríos	Beni: Prácticas ganaderas para renovar pasturas; expansión agrícola y altas temperaturas en llanos inundables
Pando: Chaqueos familiares y minería ilegal; incendios transfronterizos provenientes de Brasil	Pando: Fragmentación de corredores biológicos y contaminación de aguas; comunidades ribereñas afectadas por humo y escasez de agua	Pando: Chaqueos familiares y minería ilegal; incendios transfronterizos provenientes de Brasil

El análisis de los incendios en La Paz, Beni y Pando durante 2024 confirma lo que los datos y testimonios venían anticipando desde el Bajo Paraguá: Bolivia enfrenta una crisis sistémica del fuego. No se trata de fenómenos aislados ni de eventos excepcionales, sino de un patrón recurrente que afecta a diversos ecosistemas —bosques húmedos, llanos inundables, sabanas y selvas amazónicas— y a comunidades rurales e indígenas que comparten una característica en común: su vulnerabilidad frente a la falta de prevención y apoyo estatal.

Estos tres departamentos muestran similitudes inquietantes. En todos, el fuego se originó principalmente por chaqueos tradicionales y expansión agrícola, exacerbados por sequías prolongadas y cambios climáticos que han transformado los ciclos ecológicos. La respuesta institucional fue tardía, limitada y descoordinada; fueron las comunidades las que, una vez más, actuaron como primera línea de defensa, improvisando cortafuegos y enfrentando el humo sin el equipo ni la preparación adecuados. La cobertura mediática desigual hizo que estos incendios pasaran casi desapercibidos para el resto del país, reforzando la sensación de abandono en las zonas afectadas.

Pero también existen particularidades que deben ser reconocidas para diseñar estrategias específicas: en La Paz, los incendios afectaron bosques húmedos tradicionalmente menos vulnerables al fuego, lo que indica un cambio preocupante en las condiciones climáticas; en Beni, el fuego se propagó por llanos y sabanas, poniendo en riesgo la producción ganadera y los ecosistemas acuáticos; en Pando, aunque la magnitud fue menor, los incendios amenazaron corredores biológicos transfronterizos y se sumaron a las presiones de la minería ilegal y el tráfico de madera.

En conjunto, estos casos refuerzan la idea de que la gestión del fuego en Bolivia necesita un enfoque nacional e integral, que supere la atención fragmentada a crisis mediáticas y aborde las raíces estructurales del problema: el uso desregulado del fuego, la expansión de la frontera agrícola sin planificación, la debilidad del sistema de prevención y la falta de integración de las comunidades en la gobernanza ambiental.



Vista aérea de San Lorenzo, (Pando)

Conclusiones

CONCLUSIONES

El fuego como síntoma y oportunidad

El año 2024 quedará marcado en la memoria de Bolivia como un año en que la tierra ardió en múltiples frentes. Desde los bosques secos de la Chiquitanía hasta los llanos inundables del Beni y los corredores amazónicos de Pando, el fuego se convirtió en un espejo que reflejó las fragilidades estructurales del país: un sistema legal ambicioso pero débil en su aplicación, instituciones con recursos limitados, comunidades invisibilizadas y un modelo de desarrollo que sigue avanzando sobre los bosques sin considerar su fragilidad.

La investigación en el Bajo Paraguá y el Parque Noel Kempff Mercado mostró un paradigma claro: el fuego no es solo una consecuencia del clima extremo o de las prácticas agrícolas; es también un síntoma de abandono histórico y de conflictos no resueltos entre conservación y supervivencia. Las comunidades que habitan estos territorios, lejos de ser meros testigos, han demostrado ser guardianes involuntarios del bosque, actuando en primera línea sin recibir el reconocimiento ni los recursos que merecen.

Este patrón se repitió en La Paz, Beni y Pando, aunque con matices propios: los Yungas afectados por sequías inéditas, los llanos benianos arrasados por el fuego en pastizales y sabanas, y la frontera pandina enfrentando incendios silenciosos y transfronterizos. Estos casos confirman que la crisis del fuego en Bolivia es nacional y sistémica, no un fenómeno aislado en la Chiquitanía.

El análisis legal reveló que, pese a contar con normas avanzadas —desde la Ley 1333 hasta la Ley de la Madre Tierra—, el país carece de mecanismos claros para hacerlas efectivas. Las contradicciones entre leyes que promueven la conservación y otras que facilitan el uso del fuego, sumadas a la falta de coordinación entre niveles de gobierno, crean vacíos que el fuego aprovecha. El resultado es un marco normativo robusto en el papel pero frágil en el territorio.

A pesar de este panorama crítico, la investigación también encontró esperanza y potencial: en la resiliencia de las comunidades, en el liderazgo emergente de mujeres y jóvenes, en el conocimiento ancestral que sigue vivo, y en la posibilidad real de articular estos saberes con ciencia y tecnología moderna para construir soluciones duraderas. El Parque Noel Kempff, con su valor ecológico y cultural, se erige como un símbolo de lo que está en juego: un patrimonio no solo boliviano sino mundial, cuya protección depende de un equilibrio justo entre conservación y justicia social.

Las conclusiones de esta investigación no pueden quedarse en la descripción del desastre; deben transformarse en un llamado a la acción. Las recomendaciones que siguen buscan ofrecer un camino integral para prevenir y mitigar los incendios forestales en Bolivia, proteger el Parque Noel Kempff Mercado y otros ecosistemas críticos, y garantizar que las comunidades que habitan estos territorios sean protagonistas de su conservación y desarrollo.

1. Recomendaciones para las comunidades locales

A. Fortalecimiento de la organización comunitaria

Las comunidades ya demostraron ser la primera línea de defensa frente al fuego. Se propone consolidar esta capacidad mediante:

- Brigadas comunitarias permanentes: grupos entrenados en técnicas de control de incendios, primeros auxilios y manejo de herramientas, con apoyo técnico de ONGs y municipios.
- Planes comunitarios de prevención y respuesta: mapas de riesgo elaborados junto a los comunarios, definiendo rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de agua.
- Escuelas de liderazgo y resiliencia: formación específica para mujeres y jóvenes, promoviendo su participación en la toma de decisiones ambientales.

B. Rescate y valorización del conocimiento ancestral

Integrar prácticas tradicionales como señales climáticas, uso controlado del fuego y manejo de especies nativas en los planes de conservación y manejo forestal. Esto refuerza el sentido de pertenencia y legitimidad de las medidas.

C. Diversificación productiva y seguridad alimentaria

Fomentar sistemas agroforestales, huertos comunitarios y producción de alimentos resilientes al cambio climático (asaí, motacú, copoazú), reduciendo la dependencia de prácticas de chaqueo extensivo.

2. Recomendaciones para el Estado boliviano

A. Reforma y armonización del marco legal

- Revisión de la Ley 741 para limitar el uso del fuego en contextos de sequía extrema y establecer zonas de exclusión alrededor de áreas protegidas.
- Actualización de la Ley 1333 de Medio Ambiente para integrar principios de la Constitución y la Ley de la Madre Tierra, con énfasis en mecanismos de aplicación y fiscalización.
- Unificación de criterios entre los Planes de Uso de Suelo (PLUS) y las normas de áreas protegidas, eliminando contradicciones normativas.

B. Fortalecimiento institucional y financiamiento

- Crear un Fondo Nacional de Respuesta a Incendios y Restauración Ecológica, alimentado por recursos públicos, cooperación internacional y aportes del sector privado.

- Aumentar el presupuesto y personal del SERNAP, priorizando áreas críticas como el Noel Kempff y corredores biológicos amazónicos.
- Establecer brigadas estatales de respuesta rápida equipadas con tecnología (drones, monitoreo satelital) y articuladas con comunidades.

c. Integración de las comunidades en la gobernanza

- Crear Comités de Gestión Mixta para el Parque Noel Kempff y otras áreas críticas, con representación equitativa de comunidades, SERNAP y gobiernos municipales.
- Reconocer formalmente el rol de las comunidades en la protección del bosque, otorgándoles incentivos por servicios ambientales y acceso preferente a proyectos de desarrollo sostenible.

3. Recomendaciones para la cooperación internacional

A. Aprovechar compromisos globales

Bolivia puede articular proyectos en el marco del Acuerdo de París, REDD+ y los ODS, posicionando al Noel Kempff como un pulmón vital para la región amazónica y buscando financiamiento para restauración y prevención.

B. Intercambio de buenas prácticas

Aprender de modelos exitosos en otros países amazónicos:

- Brasil: brigadas comunitarias financiadas por el Estado y monitoreo satelital en tiempo real.
- Perú: comités de cogestión en áreas protegidas y pagos por servicios ambientales.

C. Promoción de proyectos binacionales

Dada la ubicación fronteriza del Noel Kempff y los corredores amazónicos, impulsar acuerdos con Brasil y Perú para monitoreo conjunto y control de incendios transfronterizos.

El fuego de 2024 dejó cicatrices en la tierra y en la memoria de quienes habitan el Bajo Paraguará y las demás regiones afectadas. Los bosques quemados, los ríos cubiertos de ceniza y el humo que ahogó pueblos enteros se convirtieron en símbolos de una crisis que trasciende fronteras. Pero en medio de esa devastación emergió también algo inesperado: la capacidad de las comunidades para resistir, organizarse y volver a sembrar esperanza entre las cenizas.

Esta investigación no solo documentó los impactos del desastre; también fue testigo de la fuerza silenciosa de quienes protegen el bosque sin pedir nada a cambio. Mujeres que lideraron brigadas improvisadas, jóvenes que aprendieron a leer el viento para detener las llamas, ancianos que compartieron sus saberes ancestrales para guiar las decisiones. Sus voces, recogidas en cada testimonio, son el verdadero corazón de este libro.

El Parque Noel Kempff Mercado, con su biodiversidad única y su valor como Patrimonio Mundial, se alza como símbolo y reto: símbolo de lo que Bolivia aporta al planeta y reto para un país que aún no logra equilibrar desarrollo y conservación. Protegerlo no es solo una responsabilidad ambiental; es también un acto de justicia con las comunidades que lo cuidan y un compromiso con las generaciones futuras.

La crisis de 2024 evidenció fallas legales, institucionales y de planificación, pero también abrió una puerta para repensar el manejo del fuego y del territorio en Bolivia. Si algo enseñaron los incendios es que la prevención no puede improvisarse y que las soluciones deben construirse desde abajo, con las comunidades como protagonistas y no como espectadoras.

Acciones prioritarias para el futuro inmediato

1. Consolidar brigadas comunitarias entrenadas y equipadas en Bajo y Alto Paraguá, Yungas, Beni y Pando.
2. Reformar la Ley 741 para restringir el uso del fuego en periodos de sequía extrema y zonas sensibles.
3. Fortalecer el SERNAP con más personal y presupuesto para áreas críticas como el Noel Kempff.
4. Implementar sistemas de alerta temprana con tecnología satelital y comunicación comunitaria.
5. Promover acuerdos binacionales con Brasil y Perú para manejo conjunto de corredores amazónicos.
6. Fomentar el turismo comunitario y pagos por servicios ambientales que beneficien directamente a las comunidades.
7. Incorporar educación ambiental y resiliencia climática en las escuelas rurales para formar una nueva generación de guardianes del bosque.

Cuando las llamas se apagaron, lo que quedó no fue solo tierra quemada. Quedaron preguntas urgentes: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿qué estamos dispuestos a hacer para que no vuelva a repetirse? Esta investigación es un intento de responderlas, pero también una invitación a actuar. Porque la Chiquitanía, el Bajo Paraguá y el Noel Kempff no son solo paisajes lejanos; son parte de nuestro hogar común. Y su futuro —el futuro de sus bosques, de sus ríos y de sus comunidades— depende de lo que hagamos hoy.





Vista aérea de incendios en El Sena, (Pando)



NOTA FINAL

Pese a que la presente investigación se llevó a cabo entre los meses de enero a julio del año 2025, y que sus análisis, testimonios y propuestas responden a la realidad registrada en ese período, a finales de septiembre surgieron nuevos datos que profundizan la magnitud de lo ocurrido.

Según el Global Wildfire Information System (GWIS) —plataforma internacional que integra información de la Unión Europea y la NASA—, el total de hectáreas quemadas en Bolivia durante el año 2024 habría alcanzado la cifra de 16.445.932 hectáreas, muy por encima de los 10 a 12 millones reportados por instituciones nacionales. Esta estimación se basa en tecnología satelital de última generación (MODIS, VIIRS, Copernicus) y detecta cicatrices de fuego incluso en zonas remotas o no cubiertas por reportes oficiales.

Esta discrepancia, que implica más de 4 millones de hectáreas adicionales, no es menor. Equivale, en términos territoriales, a todo el departamento de Cochabamba reducido a cenizas. Más allá del debate técnico sobre la validez de una u otra fuente, este desfase pone en evidencia una crisis estructural de información, comunicación y gestión ambiental en el país.

Desde Cecasem reafirmamos que la diferencia entre 12 y 16 millones no cambia el dolor de las comunidades, pero sí determina el alcance de la ayuda, la atención política, la presión internacional y los recursos destinados a restauración. Esta nueva cifra confirma que el desastre ambiental de 2024 fue el mayor en la historia reciente de Bolivia, y subraya aún más la urgencia de implementar políticas estructurales de prevención, restauración y justicia ambiental.

Esta investigación, aunque cerrada en su primera versión, permanece abierta al aprendizaje y a la actualización constante. Seguiremos monitoreando, acompañando y visibilizando las realidades de las comunidades afectadas. Porque las llamas no deben reducirse a estadísticas, y porque la lucha por la tierra, la vida y el bosque continúa.

AGRADECIMIENTOS

Esta obra no hubiera sido posible sin la guía, el respaldo y la compañía de personas y comunidades que dejaron una huella imborrable en el camino recorrido.

Agradezco profundamente a la doctora Patricia Bustamante, quien no solo confió en esta investigación desde su gestación, sino que fue la promotora decidida del viaje al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, entendiendo que para hablar de fuego y territorio hay que pisar la tierra y escuchar a su gente.

A mi equipo de comunicación, con quienes hemos construido mucho más que un espacio de trabajo. Su apoyo incondicional, su entrega diaria y su convicción por narrar la realidad con sensibilidad y rigor hicieron de este proyecto una obra colectiva, nacida desde el compromiso genuino.

Mi reconocimiento y gratitud a la señora Mayda Peña, segunda cacique de la Chiquitanía, por habernos acompañado en estas tierras milenarias y míticas. Su sabiduría, fuerza y dignidad nos recordaron en cada paso que la historia del bosque también es una historia de resistencia ancestral.

A Ramiro, nuestro conductor, cuya valentía fue el motor que nos llevó más allá de los caminos conocidos. Pese a los accidentes, obstáculos y fatigas del trayecto, nunca faltó su temple ni su sonrisa. Sin él, esta aventura habría sido imposible.

A cada una y cada uno de los habitantes del Bajo y Alto Paraguá, quienes nos abrieron las puertas de sus hogares, nos ofrecieron su hospitalidad aún en medio de la tragedia, y compartieron sus testimonios con generosidad y verdad. Gracias por no dejarnos desfallecer, por recordarnos por qué hacemos esto, y por permitirnos ser parte, aunque sea por un instante, de su historia.

Y finalmente, a mi compañero y amigo fiel, Jorge Aguilera, quien fue mi mano derecha en esta aventura que jamás olvidaré. Compartimos semanas de viajes, aprendizajes, silencios y descubrimientos. En los caminos de tierra y ceniza, en las madrugadas frías o en los atardeceres que ardían de belleza, su presencia fue sostén y reflejo. Gracias por estar, por creer y por caminar juntos.

A todas y todos, gracias de corazón. Este libro también les pertenece.

Brian Cristopher Dalenz Cortez



Publicado por **Cecasem**
Centro de Capacitación y Servicio
para la Integración de la Mujer.
La Paz, Bolivia.

Oficina Central: Zona Miraflores, Calle Guerrilleros Lanza No. 1536 Piso 2

Tel/Cel: (591 - 2) 2226672 / +591 73513367

Correo electrónico: comunicacion@mailcecasem.com

